



Marco de Gestión Ambiental y Social para REDD+ (ESMF) de Guatemala

La construcción de la Estrategia Nacional REDD+ es coordinada por el Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI), el cual es liderado por el MARN y está conformado por: i) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ii) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), iii) Instituto Nacional de Bosques (INAB) y iv) Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

Este documento ha sido elaborado bajo el Marco del proceso de preparación de la Estrategia Nacional REDD+, específicamente para el Componente:

Componente 2: Preparación de las Estrategia REDD+

Con el apoyo técnico y financiero de:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)

Citar este documento como:

GCI, 2017. Marco de Gestión Ambiental y Social de Guatemala (ESMF). Estrategia Nacional de Reducción de la Deforestación y Degradación de Bosques en Guatemala (ENDDBG) bajo el mecanismo REDD+. Grupo de Coordinación Interinstitucional (MARN, MAGA, INAB y CONAP). Con el apoyo técnico y financiero del BID y FCPF. Guatemala. 2017

Elaborado por:

Climate Law and Policy (CLP) - Líder del consorcio
Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
Winrock Internacional

Acrónimos

| | |
|-----------------|---|
| ALMG | Academia de Lenguas Mayas de Guatemala |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| BM | Banco Mundial |
| CMNUCC | Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático |
| CNCC | Consejo Nacional de Cambio Climático |
| CNSREDD+ | Comité Nacional de Salvaguardas REDD+ |
| CO ₂ | Dióxido de carbono |
| CONAP | Consejo Nacional de Áreas Protegidas |
| CONIC | Coordinadora Nacional Indígena y Campesina |
| CUC | Comité de Unidad Campesina |
| DP | Delivery Partner (Socio Implementador) |
| ENS | Enfoque Nacional de Salvaguardas |
| ER-PIN | Emission Reduction Proposal Idea Note |
| ESMF/MGAS | Marco de Gestión Ambiental y Social |
| FCPF | Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (por sus siglas en inglés) |
| FTN | Franja Transversal del Norte |
| GBByCC | Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático |
| GCI | Grupo de Coordinación Interinstitucional |
| GEI | Gases de efecto invernadero |
| INAB | Instituto Nacional de Bosques |
| IMT | Informe de Medio Termino |
| MARN | Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales |
| MAGA | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación |
| MIAQ | Mecanismo de información y atención a quejas |
| MRV | Monitoreo, Reporte y Verificación |
| ONG | Organizaciones No Gubernamentales |
| PaMs | Policies and Measures (políticas y medidas) |
| PSA | Pago por Servicios Ambientales |
| PINFOR | Programa de Incentivos Forestales |
| PINPEP | Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación Forestal o Agroforestal |
| RBM | Reserva Biosfera Maya |
| REDD+ | Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques, Conservación y manejo sostenible de los bosques e incremento de los stocks de carbono. |
| R-PP | Readiness Preparation Proposal |
| SESA | Evaluación Social y Ambiental Estratégica |
| SIGAP | Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas |
| TBN | Tierras Bajas del Norte |
| UICN | Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza |

Glosario

Acciones REDD+

El término 'acciones' o PaMs son aquellas que se ejecutan para implementar las actividades REDD+ en cada región. Por ejemplo, un país puede imponer una prohibición legal de la agricultura comercial en las zonas de bosques primarios intactos. Estas acciones no se han definido a nivel nacional, y las acciones consideradas en este reporte son aquellas identificadas por los participantes de los talleres regionales del SESA

Actividades REDD+

Se refiere a las diferentes actividades que serán implementadas bajo cada opción y sub-opción estratégica de acuerdo al contexto en cada región.

Las actividades consideradas en este reporte son aquellas usadas en los talleres regionales SESA (indicados por INAB y CONAP), y las actividades indicadas en el ER-PIN e Informe de Medio Término.

Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia Nacional REDD+).

Medidas REDD+

El término medidas REDD+ se refiere a aquellas actividades incluidas en el párrafo 70 de la decisión 1/CP.16: La reducción de las emisiones por deforestación; la reducción de las emisiones por degradación de los bosques; el manejo sostenible de los bosques; la conservación de las reservas forestales de carbono; y, El aumento de las reservas forestales de carbono.

Las tres medidas REDD+ que se consideran en Guatemala son:

- Deforestación evitada
- Degradación forestal evitada (por incendios forestales y extracción de biomasa forestal)
- Aumentos de los almacenes carbono forestal

Opciones REDD+

Se refiere a las alternativas que el país va a utilizar para implementar las medidas REDD+ y hacer frente a los agentes de la deforestación y degradación de los bosques.

Las opciones estratégicas REDD+ de Guatemala de acuerdo al informe medio término son:

- a) Fortalecimiento de los instrumentos económicos de la Ley Forestal (PINPEP, PROBOSQUE y estrategias institucionales)
- b) Fortalecimiento del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP).

Política Operativas del BID

Los objetivos que persiguen las políticas operativas del Banco Interamericano de Desarrollo son establecer el marco operacional para que el personal preste asistencia a los países miembros prestatarios del Banco

Salvaguardas de Cancún

El término 'Salvaguardas de Cancún' se refiere a las salvaguardas desarrolladas bajo la CMNUCC en el párrafo 2 del apéndice I de la decisión 1 / CP.16 (el Acuerdo de Cancún).

Sub-Opciones REDD+

Se refiere a las siete del ER-PIN que figuran como opciones de estrategia:

1. Armonización del marco de políticas, planes e instrumentos de sectores vinculados al uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la gestión forestal-ambiental.
2. Fortalecimiento de capacidades institucionales para el monitoreo y protección de los bosques, el cumplimiento de las operaciones de justicia y el control de la tala ilegal
3. Promoción y fortalecimiento del ordenamiento territorial en Guatemala.
4. Fortalecimiento de los programas existentes y creación de nuevos mecanismos para incentivar la conservación y protección forestal y agroforestal, gestión de actividades (económicas y no económicas) y para la producción de energía a base de madera.
5. Desarrollo del marco normativo e institucional para el reconocimiento económico de los bienes y servicios ambientales, incluyendo el carbono forestal.
6. Fomento de actividades productivas y medios de vida compatibles con la conservación y manejo sostenible de bosques y paisajes agroforestales.
7. Desarrollo e implementación de la estrategia para el uso eficiente y producción sostenible de leña como fuente de energía.

Índice

| | |
|--|-----|
| Acrónimos..... | 3 |
| Glosario..... | 5 |
| Índice..... | 7 |
| Introducción..... | 8 |
| Requerimientos del FCPF..... | 12 |
| Objetivo, alcance y estructura del ESMF..... | 16 |
| Sección 1. Medidas para reducir, mitigar o contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos, y para potenciar los impactos positivos asociados con la futura implementación de las opciones de Estrategia REDD+..... | 24 |
| 1.1. Políticas Operativas del Enfoque Común bajo el FCPF..... | 24 |
| 1.2. Aplicación de las salvaguardas de la CMNUCC..... | 34 |
| 1.3. Legislación nacional y convenciones relevantes al EMSF y vinculadas a las políticas operativas del FCPF..... | 39 |
| 1.4 Recomendaciones para abordar deficiencias legales e institucionales relevantes al ESMF..... | 55 |
| 1.5. Medidas específicas para reducir, mitigar o contrarrestar los potenciales impactos ambientales y sociales adversos de la implementación de la Estrategia REDD+..... | 64 |
| 1.6 Medidas para potenciar los impactos ambientales y sociales positivos de la implementación de la Estrategia REDD+..... | 109 |
| 1.7 Lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales en el contexto del ciclo de la implementación de las acciones REDD+..... | 123 |
| Sección 2. Marcos específicos..... | 131 |
| 2.1. Marco para pueblos indígenas..... | 131 |
| 2.2. Marco para reasentamiento involuntario..... | 154 |
| Sección 3. Arreglos institucionales para el ESMF..... | 177 |
| Sección 4. Propuesta de diseño del mecanismo de atención a reclamos..... | 178 |
| Sección 5. Participación y consulta..... | 191 |
| Sección 6. Consideraciones prácticas para la aplicación del ESMF..... | 195 |
| 6.1. Diseminación y divulgación del ESMF..... | 195 |
| 6.2. Presupuesto..... | 197 |

Introducción

En 1995¹, Guatemala ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y en 1999² lo hizo con el Protocolo de Kioto. En 1999, el país empezó a trabajar en su primer Comunicado Nacional ante la CMNUCC, el cual presentó en 2001.³ Al año siguiente, Guatemala estableció su Programa sobre el Cambio Climático.

En 2009, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) publicó la primera Política Nacional de Cambio Climático de Guatemala, propuso el borrador de la Ley Marco sobre el Cambio Climático (LMCC) y presentó una Nota de Ideas para Proyectos de REDD+ al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial para apoyar la elaboración de la Propuesta de Preparación para REDD+ (R-PP, por sus siglas en inglés).

Guatemala presentó su R-PP en marzo de 2012. Guatemala eligió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como su socio implementador y en mayo de 2014, el país firmó un convenio con esta institución, lo cual permitiría la transferencia de estos fondos al presupuesto nacional.

Guatemala ha establecido oficinas sobre el cambio climático en diversas instituciones relevantes: el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). En 2011, estas entidades formaron el Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI), el cual se reúne tanto a nivel político como técnico e impulsa el proceso de REDD+, conjuntamente con un grupo de organizaciones socias importantes que incluye a diversas ONG nacionales e internacionales de gran tamaño.

El 5 de septiembre de 2013, se aprobó finalmente por parte del Congreso de la República la LMCC. Específicamente, esta ley aborda proyectos para la reducción de emisiones al evitar la deforestación y establece nexos entre los derechos a créditos por concepto de reducción de emisiones y la propiedad de la tierra. La LMCC ratificó al MARN como la institución que supervisa las políticas sobre el cambio climático en Guatemala y promulgó la creación de dos entidades nuevas: el Consejo Nacional de Cambio Climático (CNCC), con el fin de encabezar acciones interministeriales, y el Fondo Nacional del Cambio Climático (FONCC), con el propósito de financiar actividades afines. Una gran parte de los recursos del FONCC (el 80 por ciento) deberá destinarse a la adaptación. Además, esta ley ordenó al MARN a que creara en un plazo de 18 meses un registro nacional para proyectos sobre reducción de emisiones, y aclaró que las mismas pertenecerán al propietario o poseedor legal de las tierras en las que se ejecuten los proyectos. Finalmente cabe destacar que el artículo 20 de la LMCC establece que, con fines de reducción de emisiones por cambio de uso de la tierra, el INAB, CONAP y MAGA en coordinación con el MARN, ajustarán y diseñarán políticas, estrategias, programas y planes para el desarrollo para el aprovechamiento sostenible y la gestión de recursos forestales, incluyendo la promoción de servicios ambientales que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero.

¹ Decreto Número 15-1995 del Congreso de la República de Guatemala.

² Decreto Número 23-1999 del Congreso de la República de Guatemala.

³ <http://www.fao.org/docrep/007/j3029s/j3029s11.htm>

Otros instrumentos legales relevantes a la Estrategia Nacional REDD+ y a las Opciones Estratégicas REDD+ incluyen:

- **Ley Forestal, Decreto 101-96 del Congreso de la República**

La Ley Forestal, aprobada por el Congreso de la República de Guatemala el 2 de diciembre de 1996 mediante el Decreto 101-96, fue publicada en el Diario Oficial el 4 de diciembre del mismo año y entró en vigencia el 12 de diciembre de 1996. La ley parte de considerar que los recursos forestales deben constituir la base fundamental del desarrollo económico y social de Guatemala, y que mediante el manejo sostenido pueden producirse bienes que coadyuven a satisfacer las necesidades de energía, vivienda y alimentos para contribuir a elevar la calidad de vida, el nivel económico, educación y recreación de las poblaciones, la protección de los recursos naturales y la fijación de carbono. La ley establece el programa de incentivos forestales para propietarios de tierras⁴. Así también, la ley incorpora el régimen legal de tipificación de delitos y faltas contra los recursos forestales. Cabe resaltar entre las prohibiciones limita la autorización de licencias en las partes altas de las cuencas hidrográficas cubiertas de bosque, ya que, por su importancia, constituyen ecosistemas importantes para el proceso de captación y recarga hídrica. Adicionalmente se incorporó normativa específica prohibiendo el cambio de uso sin autorización⁵ y la protección de los bosques de manglar⁶.

- **Ley de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP)**

El PINPEP es adoptado por el Decreto número 51-2010 del Congreso de la República de Guatemala y comprende un programa que aplica a poseedores de pequeñas extensiones de tierras (menos de 15 ha) que no estén inscritas en el Registro General de la Propiedad, debiendo tener como presupuestos necesarios, vocación forestal y agroforestal, con o sin cobertura forestal, en cualquier parte del territorio nacional. Su objetivo es facilitar el acceso a programas de incentivos forestales a los pequeños poseedores de tierra que se manejan de forma comunitaria, con el propósito de beneficiar a usuarios en extrema pobreza y garantizar el uso y manejo sostenible de los recursos naturales a nivel comunitario.

Este mecanismo incentiva el establecimiento de plantaciones y el manejo sostenible de bosques naturales tanto de protección como de producción, estimulando el cultivo de árboles en sistemas agroforestales. Al permitir que los poseedores de pequeñas tierras tengan acceso a incentivos forestales, la Ley brinda la oportunidad para que los sectores más vulnerables de la población, incluidas las mujeres, puedan contribuir a la conservación de los bosques y la

⁴ Artículo 71 de la Ley Forestal: "Incentivos. El Estado otorgará incentivos por medio del Instituto Nacional de Bosques, INAB, en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas conforme esta ley; a los propietarios de tierras, incluyendo a las municipalidades, que se dediquen a proyectos de reforestación y mantenimiento en tierras de vocación forestal des- provistas de bosque, así como al manejo de bosques naturales; y a las agrupaciones sociales con personería jurídica, que virtud a arreglo legal, ocupan terreno de propiedad de los municipios. Estos incentivos no se aplicarán a la reforestación derivada de los compromisos contraídos según los casos indicados en esta ley. Las plantaciones derivadas de programas de incentivos forestales se conceptúan como bosques plantados voluntarios.

⁵ Artículo 98. Cambio del uso de la tierra sin autorización. cubiertas de bosque y registradas como beneficiarias del incentivo forestal, será sancionado con prisión de dos a seis (2 a 6) años y multa equivalente al valor de la madera conforme al avalúo que realice el INAB."

⁶ Artículo 35. Protección del mangle. Se declara de interés nacional la protección, conservación y restauración de los bosques de mangle en el país. El aprovechamiento de árboles de estos ecosistemas será objeto de una reglamentación especial, la cual deberá ser elaborada por el INAB en un plazo no mayor de un año, luego de la aprobación del apoyo de una ley de protección especial.

reforestación de Guatemala, además de acceder a empleos y llevar el desarrollo a las áreas más pobres del país.

El incentivo es otorgado a través del INAB, para el manejo de bosques naturales de producción o protección, y el establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales, a favor de grupos organizados, comunidades y personas individuales poseedores de extensiones de tierra menores a 15 hectáreas.

- **Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala (Ley PROBOSQUE)**

Esta Ley se encuentra contenida en el Decreto número 02-2015 del Congreso de la República de Guatemala, teniendo como parte de sus finalidades dar continuidad al Programa de Incentivos Forestales (PINFOR), el cual finalizó en el año 2016, y tiene como objetivo principal, “garantizar el uso sostenible de los bienes y servicios de los bosques para contribuir a cimentar las bases del desarrollo rural sostenible, la mitigación y reducción de la vulnerabilidad al cambio climático, la reducción del hambre y la pobreza, el crecimiento económico y el logro de la convivencia pacífica y armónica de la sociedad guatemalteca en torno a sus bosques”. La iniciativa aumenta las modalidades de incentivos, incluyendo: a) El manejo de bosques con fines de producción; b) Las plantaciones forestales con fines comerciales; c) Los bosques energéticos; d) Los sistemas agroforestales; y e) La restauración de bosques degradados y los sistemas silvopastoriles (que comprenden bosques y ganadería).

El INAB constituye la entidad que tiene por mandato legal revisar y aprobar los planes de manejo, así como corroborar que se cumplieron previo a autorizar el pago del incentivo, el cual es otorgado una sola vez para una misma área. Su vigencia está determinada para 30 años y los proyectos que se manejen deberían alcanzar 1.200,000 mil hectáreas de tierras que generarían 4,000 empleos.

La aprobación de la Ley PROBOSQUE vendría a complementar el régimen normativo e institucional, hacia un mayor y mejor cumplimiento del mandato constitucional que declara de urgencia nacional y de interés social, la reforestación del país y la conservación de los bosques.

La iniciativa contempla la creación del Fondo Nacional de Bosques como un mecanismo que permitiría captar y administrar recursos económicos que se generan de la administración de los incentivos, lo que fortalecería la institucionalidad forestal.

- **Ley de Áreas Protegidas**

La Ley está contenida en el Decreto número 4-89 del Congreso de la República de Guatemala, el cual ya ha sido reformado por el Decreto número 110-96 y publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 1989. Dicha Ley crea el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, como Órgano Máximo director del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). El Consejo, que es presidido por el MARN e integra a representantes de diversos sectores, incluyendo a la academia, gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales, adopta legalmente las

decisiones institucionales. Referente al tema, el CONAP ha desarrollado diversos instrumentos de aplicación de la ley, entre ellos, el Reglamento para el otorgamiento de concesiones forestales comunitarias e industriales, el Reglamento de Apoyo en la Administración Conjunta, Coadministración y Gestión Compartida del SIGAP y en Áreas Naturales de Importancia para la Conservación de la Diversidad Biológica de Guatemala, así como y el propio reglamento de aplicación de ley. Asimismo, emitió una Política Nacional de Diversidad Biológica, la cual incorpora un eje de cambio climático; instauró una Oficina de Biodiversidad (ahora Dirección de Valoración y Conversación de la Diversidad Biológica) y en conjunto con representantes de la sociedad civil organizada ha impulsado iniciativas REDD+.

Opciones de Estrategia REDD+

La Nota de Ideas para Proyectos de Reducción de Emisiones (ER-PIN, por sus siglas en inglés), define siete (7) opciones REDD+⁷ en las cuales se hace énfasis en el uso de los esquemas de incentivos existentes como base para un futuro programa de REDD+. Para lograr reducir la deforestación bajo su programa de reducción de emisiones, Guatemala pretende incrementar la cobertura de sus esquemas de incentivos forestales y aumentar la observancia a nivel de los paisajes.

El INAB administra dos grandes programas de incentivos forestales y ambos guardan una gran relevancia para la tenencia y el cambio climático. PINFOR, el más grande y más antiguo de los dos programas, beneficia a aquellos propietarios de tierras que están debidamente inscritos y según lo estipulaba la ley, esté concluyó en 2016. El INAB elaboró una iniciativa de ley para reemplazar este programa con uno nuevo denominado PROBOSQUE. Por su parte, el programa PINPEP entró en plena vigencia en 2010 y beneficia a aquellos propietarios de pequeños terrenos (“poseedores”) que no están registrados. Tanto con PINFOR como con PINPEP. Guatemala ha demostrado que tiene la capacidad necesaria para distribuir los beneficios de REDD+ en diferentes niveles y con una cobertura nacional.

Para propósitos de REDD+, se ha dividido el territorio de Guatemala en cinco regiones REDD+. Guatemala priorizará actividades en las Tierras Bajas del Norte (TBN), Sarstún Motagua y diversas áreas subnacionales de occidente y abordará con posterioridad la región centro-oriental y las costas del sur (que tienen menos bosques

Las TBN son las áreas de mayor extensión en estas regiones, abarcan aproximadamente el 40 por ciento del territorio nacional y tienen las zonas boscosas más grandes del país. Las TBN se encuentran en el departamento septentrional del Petén (60 por ciento del cual tiene un estatus de áreas protegidas y alberga el 48 por ciento de los bosques del país) y en una zona colindante con el sur del Petén conocida como Franja Transversal del Norte (FTN). Asimismo, en las TBN se encuentran tres de las cinco iniciativas tempranas de REDD+ que actualmente están en desarrollo en Guatemala (GuateCarbón, Laguna Lachúa y Sierra del Lacandón).

⁷ El Programa Guatemalteco de Reducción de Emisiones – RE – consta de seis actividades REDD +: 1. Incentivos y mecanismos financieros para aumentar las reservas de carbono. 2. Incentivos para la conservación y la gestión sostenible de los bosques naturales. 3. Incentivos a los pueblos indígenas y a los propietarios de pequeñas extensiones de base comunitaria. 4. Aplicación de la ley en los terrenos forestales. 5. Mejora de la gestión forestal. 6. Desarrollo de competitividad y legalidad en la cadena de valor de los productos forestales.

En particular, el proyecto GuateCarbón ha impulsado gran parte del progreso alcanzado en el plano nacional. El área del proyecto está conformada principalmente por 12 concesiones bajo gestión comunitaria en 717.000 hectáreas de bosques, las cuales son propiedad estatal dentro de la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biósfera Maya (RBM). Como parte del proyecto, los diferentes actores involucrados desarrollaron el nivel de referencia regional para las TBN.

Fuera de las TBN, las principales áreas forestales de Guatemala se encuentran en el área de la Sierra de las Minas, en el oriente del país, y en los bosques de coníferas del Altiplano Occidental. Los patrones de tenencia forestal y el origen de las emisiones difieren drásticamente entre las regiones. Por ejemplo, en las TBN, los bosques son mayoritariamente propiedad del Estado, pero también están en manos privadas, y la principal fuente de emisiones son los cambios de uso de la tierra para la ganadería, los cultivos de exportación y en menor grado la agricultura de subsistencia. Por el contrario, en el Altiplano Occidental los bosques son principalmente de propiedad municipal o comunal y entre las causas principales de las emisiones está la degradación debido a la extracción de leña.

Requerimientos del FCPF

Aplicación de las Políticas Operativas para salvaguardas sociales y ambientales bajo el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques

Guatemala es un país beneficiario del Fondo de Preparación del FCPF, a través de su Propuesta de Preparación de *Readiness* (R-PP) el cual busca apoyar al país en el desarrollo de actividades de planificación estratégica y la preparación para la implementación de REDD+, lo que incluye actividades relacionadas con:

- a. La evaluación del contexto país respecto de la deforestación y degradación de bosques, la conservación, el manejo forestal sostenible y aspectos relevantes de gobernanza
- b. La identificación de las medidas REDD+
- c. La evaluación de posibles riesgos sociales y ambientales e impactos potenciales derivados de REDD+
- d. El estudio de cambio históricos en cobertura forestal, y de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, así como el desarrollo de nivel(es) de referencia como la base de medición de estos cambios
- e. El diseño de un sistema de monitoreo, medición, reporte y verificación del impacto de la Estrategia REDD+ sobre las emisiones / absorciones de gases de efecto invernadero
- f. El diseño de mecanismos de operatividad nacional de REDD+

En este sentido, el Comité de Participantes del FCPF ha resuelto el 'Enfoque Común de las Salvaguardas Sociales y Ambientales para los Socios Implementadores Múltiples bajo el Fondo *Readiness* del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)', o Enfoque Común, el cual constituye el marco común a ser implementado por los Socios Implementadores (DP, por sus siglas en inglés) a través del cual se alcanzará equivalencia

sustantiva de las Políticas Operativas de Salvaguardas Sociales y Ambientales establecidas bajo el Banco Mundial, como entidad fiduciaria del FCPF.⁸

En este sentido, las Políticas Operativas de Salvaguardas Sociales y Ambientales del Banco Mundial aplicables para el enfoque común del FCPF incluyen:

- a. Evaluación Ambiental: promueve la robustez socio ambiental y la sostenibilidad de proyectos de inversión y/o estrategias, y respalda la integración de aspectos socio ambientales en la toma de decisiones sobre dichos proyectos / estrategias
- b. Hábitats naturales: promueve el desarrollo sostenible en armonía con el ambiente, a través de la protección, conservación, mantenimiento y rehabilitación de hábitats naturales y sus funciones
- c. Bosques: reconocimiento del potencial de los bosques en la reducción de la pobreza de manera sostenible, así como la efectiva integración de los bosques en el desarrollo económico de manera sostenible, así como la protección de los servicios ambientales y el valor de los bosques,
- d. Reasentamiento involuntario: busca aplicar los estándares más altos de compromiso entre los DP para evitar o minimizar el reasentamiento involuntario y, de no ser posible, ayudar a las personas desplazadas en la mejora o restablecimiento de sus formas de sustento y niveles de vida, con respecto a los niveles previos al reasentamiento o al comienzo de la implementación del proyecto/estrategia
- e. Pueblos Indígenas: promover el diseño de proyectos/estrategias con la participación plena y efectiva de Pueblo Indígenas de manera que fomente el respeto pleno de la dignidad de pueblos indígenas, derechos humanos, conocimiento tradicional, singularidad cultural y diversidad de manera que se promuevan beneficios sociales y económicos y se eviten efectos adversos;
- f. Recursos físicos y culturales: promover la preservación de los recursos culturales físicos y evitar daños o su destrucción.

El documento del Enfoque Común precisa que los DP deben alcanzar la “equivalencia sustancial” que significa equivalencia con las políticas los procedimientos de salvaguardas ambientales y sociales del BM aplicables al Fondo *Readiness* del FCPF, y que, si las políticas y los procedimientos de salvaguarda del DP son más rigurosos y/u ofrecen más protección que los del BM, el DP aplicará sus políticas y procedimientos a las actividades realizadas en el marco del Fondo *Readiness* del FCPF.

En el caso de Guatemala, el socio implementador (DP) es el Banco Interamericano de Desarrollo (IDB). De acuerdo con el BIC⁹ y a un estudio independiente hecho para el FCPF¹⁰,

⁸ Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), Fondo Readiness Enfoque Común para las Salvaguardas Ambientales y Sociales
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2011/Sp.%20FCPF%20Enfoque%20Comun_060611.pdf

⁹ Políticas de Salvaguardia Socio Ambiental y Enfoque Común del FCPF, Bank Information Center, Agosto 2013.
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Políticas-de-Salvaguardia-Socio-Ambiental-y-Enfoque-Comun-del-FCPF_BankInformationCenter_agosto2013.pdf

¹⁰ Independent Assessment of IDB's Background Information for the FCPF Common Approach to Environmental and Social Safeguards, 2011.

la mayoría de los requisitos de las políticas de salvaguardas del BID, son semejantes (o menos rigurosos) a los del Banco Mundial.

De acuerdo con estos estudios¹¹, en ciertas áreas clave, las diferencias entre las salvaguardas del BM y las del BID, necesitan ser abordadas bajo el Enfoque Común.

Reasentamiento involuntario:

Los requisitos del BID son más rigurosos que los del BM. El BM requiere que los pueblos indígenas deban proveer “amplio apoyo” para cualquier reubicación, a través de un proceso de consulta libre, previa e informada. El BID requiere que los pueblos indígenas provean su “consentimiento informado”, y que sus derechos consuetudinarios sean plenamente reconocidos y compensados.

Pueblos indígenas:

Acuerdos verificados para impactos adversos significativos para programas o proyectos de muy alto riesgo, el BID requiere acuerdos verificados con los pueblos indígenas afectados, antes de que puedan proceder, lo cual es un estándar más riguroso que el que aplica el BM (“amplio apoyo comunitario”).

De esta manera, la aplicación del enfoque común busca asegurar la aplicación de las salvaguardas sociales y ambientales, así como sus políticas asociadas, de manera que se promueva la prevención y mitigación de daños potenciales asociados para las personas y el ambiente, así como promover beneficios, asociados a las intervenciones en el marco del FCPF. Es así que los requisitos establecidos bajo el enfoque común incluyen:

1. La aplicación de las Directrices y Términos de Referencia Genéricos para las Evaluaciones Ambientales y Sociales Estratégicas (SESA por su sigla en inglés) y los Marcos para el Manejo Ambiental y Social (MGAS- ESMF por su sigla en inglés).
2. Las Directrices del FCPF sobre el Compromiso de los Actores Involucrados en la preparación del *Readiness* REDD+
3. La Guía FCPF sobre Divulgación de la Información
4. Proveer acceso Socio Implementador a los mecanismos de rendición de cuentas, incluyendo esfuerzos nacionales para cumplir con las Directrices para Establecer los Mecanismos de Reclamo y Reparación a nivel nacional

Al respecto cabe mencionar que si bien las Estrategias REDD+ tienen el potencial de ofrecer significativos beneficios tanto a pueblos indígenas como a comunidades locales cuyos medios de vida son dependientes de los bosques, si estas Estrategias REDD+ y sus medidas no se implementan de la manera adecuada, tienen un alto potencial de generar riesgos para los medios de subsistencia, la seguridad de la tenencia de la tierra, la gobernanza forestal, la biodiversidad, entre otros. Es por esta razón que el Programa ONU-REDD y el FCPF han desarrollado directrices para promover la participación plena y efectiva de los actores

<http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2011/Summary%20Memo%20and%20Gap%20Analysis%20of%20IDB%20Background%20Info%20110603.pdf>

¹¹ página 35, Políticas de Salvaguardia Socio Ambiental y Enfoque Común del FCPF, Bank Information Center, Agosto 2013.

Páginas 2-4, Independent Assessment of IDB's Background Information for the FCPF Common Approach to Environmental and Social Safeguards, 2011.

relevantes, de manera que se asegure su involucramiento en las fases de formulación e implementación de las estrategias nacionales REDD+.

Finalmente, en cuanto a la divulgación de información, el FCPF busca promover esfuerzos que aseguren la provisión de información adecuada, oportuna, de calidad y en un formato culturalmente apropiado, para lo cual se han desarrollado las Directrices del FCPF sobre divulgación de información. De la misma manera, las Directrices sobre el Compromiso de los Actores Involucrados en el Fondo de Preparación del FCPF requieren el establecimiento de mecanismos de reclamo y de rendición de cuentas, que sean accesibles durante el proceso de consulta e implementación de las medidas REDD+, las cuales además deberá utilizar, complementar o institucionalizar los mecanismos de rendición de cuentas, resolución de disputas y reclamo existentes en el país.

Desarrollo de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental y el Marco de Gestión Social y Ambiental

El SESA se deriva de los requisitos de evaluación ambiental (EA) del Banco Mundial. Se pretende que sea un proceso inclusivo mediante el cual el país REDD +, con la participación de todos los interesados potencialmente afectados, busque "identificar posibles impactos, así como oportunidades", entre diferentes opciones estratégicas de REDD+. Durante el proceso de SESA, estos impactos y oportunidades son evaluados y sopesados por las diversas partes interesadas.

El SESA debe concluir con la elaboración de un Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF por sus siglas en inglés) como un medio para gestionar los impactos ambientales y sociales a medida que los países REDD + desarrollan sus estrategias nacionales de REDD +.

Todos los países de REDD + deben producir un ESMF como resultado directo del proceso de SESA. El ESMF establece principios, reglas, pautas y procedimientos para abordar los problemas e impactos asociados con las actividades REDD+ que pueden ocurrir en el futuro pero que no se conocen actualmente o son inciertos. En gran medida proporciona un marco para que los países aborden las cuestiones ambientales y sociales en su Estrategia REDD + a medida que se implementa.

El ESMF se completa y se presenta, en la medida de lo posible, como parte del 'paquete *readiness*' del país. Sin embargo, si aún no se han identificado específicamente las inversiones de REDD+, el ESMF sigue siendo un documento basado en principios generales, dejando detalles específicos para más adelante.

Objetivo, alcance y estructura del ESMF

Objetivo del ESMF

El ESMF de Guatemala es el instrumento operativo por el cual se establecen los principios, lineamientos y procedimientos para abordar, evitar y minimizar los riesgos de impactos adversos y potencializar los beneficios sociales y ambientales asociados a la implementación de las opciones de la Estrategia Nacional REDD+.

Conforme a los TdRs de esta consultoría el objetivo del presente documento es el de proponer medidas para reducir, mitigar o contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos, y para mejorar los impactos positivos y las oportunidades de proyectos, actividades, políticas o reglamentaciones asociados con la futura implementación de las opciones de Estrategia REDD+.

Se hace notar que tanto los impactos ambientales y sociales adversos como los impactos positivos fueron previamente identificados y priorizados mediante el proceso SESA.

Alcance del ESMF

El alcance del ESMF está directamente vinculado al alcance del SESA. Por lo tanto, el ESMF que se presenta a continuación se enmarcó en de la propuesta de Opciones REDD+ del país, las cuales fueron basadas en información del ER-PIN (2014) y del Informe de Medio Término (2016),¹² y guiados por los insumos brindados por el BID y el GCI, así como por los trabajos y resultados de los talleres regionales SESA que se ejecutaron en el mes de marzo de 2017, y del taller nacional ejecutado en el mes de mayo de 2017.

Guatemala basa su Estrategia Nacional REDD+ en dos lineamientos de política:

- a) El fortalecimiento de los instrumentos económicos de la Ley Forestal (programas de incentivos forestales y estrategias institucionales de INAB) y
- b) El fortalecimiento del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP)”.

Las opciones de Estrategia REDD+ son las siguientes:

1. Armonización del marco de políticas, planes e instrumentos de sectores vinculados al uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la gestión forestal-ambiental.
2. Fortalecimiento de capacidades institucionales para el monitoreo y protección de los bosques, el cumplimiento de las operaciones de justicia y el control de la tala ilegal
3. Promoción y fortalecimiento del ordenamiento territorial en Guatemala.

¹² Informe de Medio Término, Guatemala, febrero 2016
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2016/Mar/MTR%20Guatemala_2016_Spanish.pdf

4. Fortalecimiento de los programas existentes y creación de nuevos mecanismos para incentivar la conservación y protección forestal y agroforestal, gestión de actividades (económicas y no económicas) y para la producción de energía a base de madera.
5. Desarrollo del marco normativo e institucional para el reconocimiento económico de los bienes y servicios ambientales, incluyendo el carbono forestal.
6. Fomento de actividades productivas y medios de vida compatibles con la conservación y manejo sostenible de bosques y paisajes agroforestales.
7. Desarrollo e implementación de la estrategia para el uso eficiente y producción sostenible de leña como fuente de energía.

Las tres medidas REDD+ que se consideran en el ER-PIN de Guatemala y que las opciones estratégicas buscan atender son:

- Deforestación evitada;
- Degradación forestal evitada (por incendios forestales y extracción de biomasa forestal); y
- Aumento de los reservorios de carbono forestal.

La tabla 1 ilustra la vinculación entre las medidas REDD+ y las opciones estratégicas.

Tabla No.1. Medida REDD+ y vinculación con Opción Estratégica

| Medida REDD+ | Opción Estratégica |
|------------------------------|---------------------------|
| Deforestación evitada | Opción 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Degradación forestal evitada | Opción 1, 2, 4, 6 |
| Aumentos de carbono forestal | Opción 1, 5, 4, 6 |

Las opciones se vinculan espacialmente a ciertas áreas en el país.¹³ El ER-PIN se basa en cinco regiones que forman ecozonas distintas en el país: Costa Sur, Occidente, Oriente, Sarstún-Motagua y Tierras Bajas del Norte(TBN). La tabla 2 ilustra la vinculación entre las Opciones estratégicas y su especialización en las regiones REDD+.

Tabla 2. Regiones en cuales se enfoca cada opción estratégica de REDD+¹⁴

| Opción estratégica | Costa Sur | Occidente | Oriente | Sarstún-Motagua | Tierras Bajas del Norte |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|
| Armonización del marco de políticas, planes e instrumentos de sectores vinculados al uso de la | | | | | |

¹³ Winrock International, Informe de la actividad 3.2. Revisar y analizar las opciones de estrategia para REDD+ propuestas dentro de la ER-PIN y ubicarlas espacialmente dentro del territorio

¹⁴ Winrock International, Informe de la actividad 3.2. Revisar y analizar las opciones de estrategia para REDD+ propuestas dentro de la ER-PIN y ubicarlas espacialmente dentro del territorio

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| tierra, el cambio de uso de la tierra y la gestión forestal-ambiental. | | | | | |
| Fortalecimiento de las capacidades institucionales de vigilancia y protección forestal, operación de justicia y control de la tala ilegal. | | | | | |
| Promoción y fortalecimiento del ordenamiento territorial en Guatemala. | | | | | |
| Fortalecimiento de los programas existentes y creación de nuevos mecanismos de incentivos para actividades (económicas y no económicas) de conservación, protección y manejo de los bosques, sistemas agroforestales y producción forestal energética. | | | | | |
| Desarrollo del marco regulatorio y la institucionalidad relacionada con el reconocimiento económico de los bienes y servicios ambientales, incluyendo el carbono forestal. | | | | | |
| Fomento de actividades productivas y medios de vida compatibles con la conservación y manejo sostenible de los bosques y paisajes agroforestales. | | | | | |
| Desarrollo e implementación de una Estrategia para el uso sostenible del combustible a base de madera | | | | | |

Tabla 3: Listado de actividades REDD+ consideradas en este análisis, y su vinculación con las opciones REDD+

Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+. Se hace la salvedad que las actividades REDD+ actualmente propuestas pueden cubrir más de una opción estratégica. Para una descripción más detallada de las Opciones REDD+ propuestas, ver el documento SESA¹⁵

¹⁵ Producto 8, Evaluación Estratégica Social y Ambiental

| | |
|--|---|
| <p>Opción 1: Armonización del marco de políticas, planes e instrumentos de sectores vinculados al uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la gestión forestal-ambiental.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos. • Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles. • Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas. • Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales. • Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques. • Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros. |
| <p>Opción 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales para el monitoreo y protección de los bosques, el cumplimiento de las operaciones de justicia y el control de la tala ilegal.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros. • Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas. |
| <p>Opción 3: Promoción y fortalecimiento del ordenamiento territorial nacional.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos. • Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles. • Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas. • Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales. |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques. • Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros. |
| <p>Opción 4: Fortalecimiento de programas existentes y creación de nuevos mecanismos para incentivar la conservación y protección forestal y agroforestal, gestión de actividades económicas y no económicas y la producción de energía a base de madera.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos. • Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles. • Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas. • Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales. • Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques. • Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros. |
| <p>Opción 5: Desarrollo del marco normativo e institucional para el reconocimiento de la importancia económica de bienes y servicios ambientales, incluyendo el carbono forestal.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas. • Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales. • Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques. |
| <p>Opción 6: Fomento de actividades productivas y medios de vida compatibles con la conservación y manejo sostenible de bosques y paisajes agroforestales.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles. • Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales. |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques. |
| <p>Opción 7: Desarrollo e implementación de la estrategia para el uso eficiente y producción sostenible de leña como fuente de energía.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos. • Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles. • Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales. • Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros. |

Metodología empleada en la elaboración del ESMF

El desarrollo del presente ESMF se basó en la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA) información que se obtuvo de los talleres ejecutados en marzo del 2017, y del taller nacional ejecutado en mayo del 2017 mediante los cuales se llevó a cabo la identificación, y priorización de los posibles impactos (adversos y positivos) que pudieran surgir como consecuencia de la implementación de las medidas y Opciones de la Estrategia Nacional REDD+. ¹⁶

Asimismo, el ESMF fue informado por los siguientes análisis:

- Producto 2: Documento con el reporte y análisis de la revisión de las opciones de la Estrategia REDD+ propuestas dentro de la R-PP y el ER-PIN, incluyendo su especialización y la descripción de la institucionalidad vinculada a esas acciones.
- Producto 4: Documento con la propuesta de las entidades institucionales de Gobierno responsables de la implementación y supervisión del SESA y ESMF, incluyendo arreglos institucionales para manejar y supervisar el SESA y ESMF contemplando la normativa del país relacionada con REDD+.
- Producto 5: Reporte que sintetiza el análisis de las plataformas y/o estructuras de gobernanza existentes y que se estima podrían ser utilizadas en el contexto de REDD+
- Producto 6: Reporte de los mecanismos específicos de divulgación, comunicación y consulta del SESA y ESMF
- Producto 7: Informe con el mapeo de actores
- Producto 8: Evaluación Estratégica Social y Ambiental
- Producto 9: Reporte de las deficiencias legales/regulatorias y aplicación de políticas, institucionales y de capacidades existentes vinculadas a los posibles riesgos sociales y ambientales asociados a la implementación de la Estrategia Nacional REDD+

¹⁶ Se ruega ver producto 8 que presenta el Borrador v.4 de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental

Estructura del Documento

El presente documento se estructura de la siguiente forma:

Sección 1: presenta las medidas para reducir, mitigar o contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos, y para potenciar los impactos positivos asociados con la futura implementación de las opciones de Estrategia REDD+.

Esta sección incluye las siguientes sub-secciones:

- La sub-sección 1.1 presenta una explicación de las políticas operativas del enfoque común bajo el FCPF y vinculadas al ESMF;
- La sub-sección 1.2 presenta una explicación de las salvaguardas de Cancún y su vinculación al ESMF;
- La sub-sección 1.3 presenta la legislación nacional relevante al ESMF y su vinculación a las políticas operativas aplicables; y
- La sub-sección 1.4 presenta recomendaciones para abordar deficiencias legales e institucionales relevantes a la preparación del Marco de Gestión Social y Ambiental;
- La sub-sección 1.5 presenta las medidas específicas para reducir, mitigar o contrarrestar los potenciales impactos ambientales y sociales adversos derivados de la implementación de las Opciones de la Estrategia REDD+, y que fueron identificados y priorizados a través del SESA; y
- La sub-sección 1.6 presenta medidas para potenciar los impactos ambientales y sociales positivos derivados de la implementación de las Opciones de la Estrategia REDD+, y que fueron identificados y priorizados a través del SESA.
- La sub-sección 1.7 presenta los lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales en el contexto del ciclo de la implementación de las acciones REDD+

Sección 2: presenta los marcos específicos requeridos por el FCPF para mitigar y manejar los potenciales impactos derivados de la implementación de las opciones de la Estrategia REDD+, en particular, de sus actividades y acciones REDD+ futuras en los distintos territorios.

Esta sección presenta los dos marcos específicos aplicables a Guatemala conforme a la identificación y priorización de impactos adversos:

- Marco para pueblos indígenas: un marco de planificación de los pueblos indígenas para enfrentar los potenciales impactos adversos sobre los pueblos indígenas; y
- Marco para reasentamiento involuntario: un marco para enfrentar cualquier adquisición potencial de tierra y/o reubicación física, pérdida de los medios de subsistencia o restricción o pérdida de acceso a los recursos naturales.

Destacamos que el tercer marco aplicable del FCPF sobre ‘evaluación ambiental y social’ fue integrado en la sección 1.5 más arriba.

Sección 3: presenta los arreglos institucionales para la implementación y supervisión del ESMF

Sección 4: presenta el Mecanismo de Información y Atención a Quejas (MIAQ)

Sección 5: presenta los arreglos para la participación y consulta de actores relevantes

(Nota: se prevé presentar un descripción y evaluación de las plataformas de participación y consulta existentes y relevantes, y cómo éstas pueden jugar un rol en la supervisión e implementación del ESMF. Se prevé elaborar esta sección con los insumos del GCI)

Sección 6: presenta las consideraciones prácticas para la implementación del ESMF

Sección 1. Medidas para reducir, mitigar o contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos, y para potenciar los impactos positivos asociados con la futura implementación de las opciones de Estrategia REDD+

La siguiente sección tiene por objetivo presentar las medidas para reducir, mitigar o contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos, y para potenciar los impactos positivos asociados con la futura implementación de las opciones de Estrategia REDD+, los cuales fueron identificados y priorizados a través del SESA.

Esta sección se estructura de la siguiente manera:

- La sub-sección 1.1 presenta una explicación de las políticas operativas del enfoque común bajo el FCPF y vinculadas al ESMF;
- La sub-sección 1.2 presenta una explicación de las salvaguardas de Cancún y su vinculación al ESMF;
- La sub-sección 1.3 presenta la legislación nacional relevante al ESMF y su vinculación a las políticas operativas aplicables; y
- La sub-sección 1.4 presenta recomendaciones para abordar deficiencias legales e institucionales relevantes a la preparación del Marco de Gestión Social y Ambiental;
- La sub-sección 1.5 presenta las medidas específicas para reducir, mitigar o contrarrestar los potenciales impactos ambientales y sociales adversos derivados de la implementación de las Opciones de la Estrategia REDD+, y que fueron identificados y priorizados a través del SESA; y
- La sub-sección 1.6 presenta medidas para potenciar los impactos ambientales y sociales positivos derivados de la implementación de las Opciones de la Estrategia REDD+, y que fueron identificados y priorizados a través del SESA.
- La sub-sección 1.7 presenta los lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales en el contexto del ciclo de la implementación de las acciones REDD+

1.1. Políticas Operativas del Enfoque Común bajo el FCPF

Como se ha explicado anteriormente en el documento SESA y la sección introductoria de este documento, el Comité de Participantes del FCPF ha resuelto el ‘Enfoque Común de las Salvaguardas Sociales y Ambientales para los Socios Implementadores Múltiples bajo el FCPF’, o Enfoque Común, el cual constituye el marco común a ser implementado por los Socios Implementadores (DP, por sus siglas en inglés) a través del cual se

alcanzará equivalencia sustantiva de las Políticas Operacionales de Salvaguardas Sociales y Ambientales establecidas bajo el Banco Mundial (BM), como entidad fiduciaria del FCPF.¹⁷

El documento del Enfoque Común precisa que cuando las políticas de un DP puedan no ser tan estrictas o protectoras como las del Banco Mundial, se debe alcanzar la “equivalencia sustancial” que significa equivalencia con las políticas los procedimientos de salvaguardas ambientales y sociales del BM aplicables al Fondo Readiness del FCPF, lo cual no implica sustituir las políticas del DP sino aplicarlas de igual manera pero llenando lagunas selectivamente dentro de sus propio marco normativo. Asimismo, si las políticas y los procedimientos de salvaguarda del DP son más rigurosos y/u ofrecen más protección que los del BM, el DP aplicará sus políticas y procedimientos a las actividades realizadas en el marco del Fondo Readiness del FCPF.

Las Políticas Operativas de Salvaguardas Sociales y Ambientales del Banco Mundial aplicables para el enfoque común del FCPF incluyen:

- a. Evaluación Ambiental;
- b. Hábitats naturales;
- c. Bosques;
- d. Reasentamiento involuntario;
- e. Pueblos Indígenas; y
- f. Recursos físicos y culturales.

En Guatemala, el socio implementador es el BID. De acuerdo al BIC¹⁸ y a un estudio independiente hecho para el FCPF¹⁹, la mayoría de los requisitos de las políticas de salvaguardas del BID, son semejantes (o menos rigurosos) a los del Banco Mundial.

A continuación, la tabla 4, detalla qué salvaguardas (del BID y del BM) se aplican al ESMF de Guatemala, de acuerdo con los temas y directrices del Enfoque Común del FCPF.

¹⁷ Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), Fondo Readiness Enfoque Común para las Salvaguardas Ambientales y Sociales

https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2011/Sp.%20FCPF%20Enfoque%20Comun_060611.pdf

¹⁸ Políticas de Salvaguardia Socio Ambiental y Enfoque Común del FCPF, Bank Information Center, Agosto 2013.

http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Politicade-Salvaguardia-Socio-Ambientaly-Enfoque-Comun-del-FCPF_BankInformationCenter_agosto2013.pdf

¹⁹ Independent Assessment of IDB's Background Information for the FCPF Common Approach to Environmental and Social Safeguards, 2011.

<https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2011/Summary%20Memo%20and%20Gap%20Analysis%20of%20IDB%20Background%20Info%20110603.pdf>

<http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2011/Summary%20Memo%20and%20Gap%20Analysis%20of%20IDB%20Background%20Info%20110603.pdf>

| Política del Banco Mundial | Política del BID y análisis en relación a la Política del BM | Aplicabilidad para el ESMF de Guatemala |
|--|---|--|
| <p>Evaluación Ambiental (4.01): El Banco exige que todos los proyectos propuestos para obtener financiamiento se sometan a una Evaluación Ambiental (EA) con el fin de garantizar su solidez y sostenibilidad ambiental, y mejorar así el proceso de toma de decisiones. La extensión, profundidad y tipo de análisis del proceso dependen de la naturaleza, la escala y el posible impacto ambiental del proyecto propuesto. En la EA se evalúan los posibles riesgos y repercusiones ambientales de un proyecto en su zona de influencia; se examinan alternativas para el proyecto; se identifican formas de mejorar la selección, ubicación, planificación, diseño y ejecución de los proyectos mediante la prevención, reducción al mínimo, mitigación o compensación de las repercusiones ambientales adversas y la maximización de los impactos positivos, e incluye, el proceso de mitigación y gestión de las repercusiones ambientales adversas durante la ejecución del proyecto. Siempre que sea factible, el Banco favorece las medidas preventivas en</p> | <p>La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (703) del BID aborda este tema para las actividades del BID.</p> <p>Sin embargo, de acuerdo con varios estudios comparativos²⁰, esta política del BID tiene algunas limitaciones en comparación a la Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM.</p> <p>La política 703 del BID prevé la Directiva B6 relativa a las consultas misma que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recomienda, pero no requiere consultas a lo largo de la implementación de proyectos. El principio 15 de la PO 401 del BM requiere consultas a lo largo de proyecto²¹. - El BID no requiere evaluaciones elaboradas por peritos/as independientes, para proyectos de alto riesgo. A diferencia del principio 4 de la PO 401 del BM requiere contratar expertos independientes para proyectos de alto riesgo²². | <p>Por lo tanto, cuando un impacto negativo identificado se vincula con el tema de 'Evaluación Ambiental' definido bajo el Enfoque Común, se activarán:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (703) del BID, y • los principios 15 y 4 la Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM. |

²⁰ Ibid

²¹ PO 401 BM. Página 6, principio 15: "el prestatario consulta a dichos grupos durante toda la ejecución del proyecto, según sea necesario, para atender los asuntos relativos a la EA que los afecten"

²² PO 401 del BM. Pagina 2, Principio 2 : « El prestatario es responsable de realizar la EA. En los proyectos de la categoría A5, el prestatario, para llevar a cabo la EA6, contrata los servicios de expertos en EA independientes y no afiliados al proyecto. »

| | | |
|--|---|---|
| vez de las medidas de mitigación o compensación. | | |
| <p>Hábitats naturales (OP 4.01): promueve el desarrollo sostenible en armonía con el ambiente, a través de la protección, conservación, mantenimiento y rehabilitación de hábitats naturales y sus funciones</p> <p>El Banco promueve y apoya la conservación de los hábitats naturales y un mejor aprovechamiento del suelo mediante el financiamiento de proyectos dirigidos a integrar, en las políticas de desarrollo nacional y regional, la conservación de los hábitats naturales y el mantenimiento de las funciones ecológicas que éstos cumplen. Además, fomenta la rehabilitación de los hábitats naturales degradados. Esta política resguarda la prohibición de financiamiento de proyectos que degraden o perturben hábitats naturales críticos, apoyando aquellos que no afecten dichos hábitats y que cuenten con alternativas viables y adecuadas de mitigación.</p> | <p>La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (703) del BID aborda este tema para las actividades del BID.</p> <p>De acuerdo con varios estudios comparativos²³, esta política incluye disposiciones que equivalen todos los requisitos fundamentales de la Política sobre Hábitats Naturales del BM.</p> | <p>Por lo tanto, cuando un impacto negativo identificado se vincula con el tema de 'Hábitats Naturales' definido bajo el Enfoque Común, se activará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (703) del BID |
| <p>Bosques (4.36): La finalidad de esta OP es asistir a los prestatarios a aprovechar el potencial de los bosques para reducir la</p> | <p>La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (703) del BID aborda este tema para las actividades del BID.</p> | <p>Por lo tanto, cuando un impacto negativo identificado se vincula con el tema de</p> |

²³ Independent Assessment of IDB's Background Information for the FCPF Common Approach to Environmental and Social Safeguards, 2011.

<https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2011/Summary%20Memo%20and%20Gap%20Analysis%20of%20IDB%20Background%20Info%20110603.pdf>

Políticas de Salvaguardia Socio Ambiental y Enfoque Común del FCPF, Bank Information Center, Agosto 2013.

http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Políticas-de-Salvaguardia-Socio-Ambiental-y-Enfoque-Comun-del-FCPF_BankInformationCenter_agosto2013.pdf

| | | |
|--|---|--|
| <p>pobreza en forma sostenible, integrarlos efectivamente en el proceso de desarrollo económico sostenible, y proteger sus valores y servicios ambientales a nivel local y global. En los casos en que es preciso proceder a la restauración y plantación para alcanzar estos objetivos, el Banco ayuda a los prestatarios en actividades de restauración forestal, que contribuyan a mantener o fomentar la funcionalidad de los ecosistemas. Asimismo, proporciona asistencia a los prestatarios en el establecimiento y manejo sostenible de plantaciones, ecológicamente apropiadas, socialmente beneficiosas y económicamente viables, para ayudar a atender la demanda creciente de bienes y servicios forestales. Esta política se aplica a los siguientes tipos de proyectos de inversión financiados por el Banco: i) Los que tienen o puedan tener impactos en la salud y calidad de los bosques; ii) Los que afectan a los derechos y el bienestar de las personas y a su nivel de dependencia de los bosques o a su interacción con ellos, y iii) Aquellos cuya finalidad es generar cambios en el manejo, la protección</p> | <p>Sin embargo, de acuerdo con varios estudios comparativos²⁴, esta política del BID tiene algunas limitaciones en comparación a la Política Operacional de Bosques (4.36) del BM. La PO 4.36 del BM va más allá en algunos temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9a: requiere que todo proyecto de tala forestal comercial a nivel industrial sea independientemente certificado, según una serie de criterios definidos.²⁵ - 12: Promueve apoyar explotaciones realizadas por pequeños propietarios y comunidades locales en regímenes de manejo comunitario²⁶ - 14: Pide dar preferencia a enfoques de manejo en pequeña escala o de alcance comunitario²⁷ - 10: requiere el uso de sistemas de certificación forestal que cumpla con una lista de criterios²⁸ | <p>‘Bosques’ definido bajo el Enfoque Común, se activarán:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (703) del BID • Los principios 9a, 10, 12 y 14 de la Política Operacional de Bosques (4.36) del BM. |
|--|---|--|

²⁴ Ibid

²⁵ PO 4.36 del BM. Pagina 3, principio 9a: “para que operaciones de explotación comercial a escala industrial sean elegibles por el Banco, deben también: ser certificadas por un sistema independiente de certificación forestal que el Banco considere aceptable, de que cumple las normas de ordenación y uso responsable de los bosques”.

²⁶ PO 4.36 del BM. Pagina 4, principio 12: “El Banco puede financiar operaciones de explotación realizadas por pequeños propietarios de tierras , por comunidades locales en régimen de manejo forestal comunitario o por dichas entidades conjuntamente

²⁷ PO 4.36 del BM. Pagina 4, principio 14: “ en lo que respecta a la gestión debe dar preferencia a enfoques de manejo en pequeña escala, de alcance comunitario cuando se consideren el instrumento óptimo para aprovechar el potencial de los bosques para reducir la pobreza en forma sostenible »

²⁸ PO 4.36. Pagina 3, principio 10

| | | |
|---|--|---|
| o la utilización de los bosques naturales o las plantaciones, sean de propiedad pública, privada o comunal. | | |
| <p>Reasentamiento involuntario (4.12): Esta política abarca los efectos económicos y sociales directos resultantes de los proyectos de inversión financiados por el Banco y causados por i) La privación involuntaria de tierras, que da por resultado i.1) El desplazamiento o la pérdida de la vivienda; i.2) La pérdida de los activos o del acceso a los activos, o i.3) La pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no, o ii) La restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la Ley como parques o zonas protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la subsistencia de las personas desplazadas. Los objetivos generales de esta OP son los siguientes: i) En la medida de lo posible, los reasentamientos involuntarios deben evitarse o reducirse al mínimo, para lo cual deben estudiarse todas las opciones viables de diseño del proyecto, ii) Cuando el</p> | <p>La Política de Reasentamiento Involuntario (710) del BID aborda este tema para las actividades del BID.</p> <p>De acuerdo con varios estudios comparativos²⁹, esta política del BID tiene requisitos más rigurosos que el BM. El BM requiere que los pueblos indígenas provean su “amplio apoyo” para cualquier reubicación, a través de la consulta libre, previa e informada, mientras que el BID les obliga a los pueblos indígenas a proveer su “consentimiento informado”, y es obligatorio plenamente reconocer y compensar los derechos consuetudinarios de éstos.</p> <p>Sin embargo, la Política Operacional de Reasentamiento Involuntario (4.12) del BM va más allá que la PO 710 del BID en algunos temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.b: Requiere la participación de las partes afectadas en todas las actividades de reasentamiento (incluyendo la determinación de beneficio)³⁰ | <p>Por lo tanto, cuando un impacto negativo identificado se vincula con el tema de ‘Reasentamiento Involuntario’ definido bajo el Enfoque Común, se activarán:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Política de Reasentamiento Involuntario (710) del BID • Los principios 2b, 6a, 6b y 10 de la Política Operacional de Reasentamiento Involuntario (4.12) del BM |

²⁹ Independent Assessment of IDB’s Background Information for the FCPF Common Approach to Environmental and Social Safeguards, 2011.

<https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2011/Summary%20Memo%20and%20Gap%20Analysis%20of%20IDB%20Background%20Info%20110603.pdf>

Políticas de Salvaguardia Socio Ambiental y Enfoque Común del FCPF, Bank Information Center, Agosto 2013.

http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Políticas-de-Salvaguardia-Socio-Ambiental-y-Enfoque-Comun-del-FCPF_BankInformationCenter_agosto2013.pdf

³⁰ PO 4.12. Página 1, principio 2.b: Cuando el reasentamiento resulte inevitable, las actividades de reasentamiento se deben concebir y ejecutar como programas de desarrollo sostenible, que proporcionen recursos de inversión suficientes para que las personas desplazadas por el proyecto puedan participar en los beneficios del mismo. Es preciso celebrar consultas satisfactorias con las personas desplazadas y darles la oportunidad de participar en la planificación y ejecución de los programas de reasentamiento.

| | | |
|---|---|--|
| <p>reasentamiento resulte inevitable, las actividades de reasentamiento se deben concebir y ejecutar como programas de desarrollo sostenible, que proporcionen recursos de inversión suficientes para que las personas desplazadas por el proyecto puedan participar en los beneficios del mismo y en ese contexto, es preciso celebrar consultas satisfactorias con las personas desplazadas y darles la oportunidad de participar en la planificación y ejecución de los programas de reasentamiento y iii) Se debe ayudar a las personas desplazadas en sus esfuerzos por mejorar sus medios de subsistencia y sus niveles de vida, o al menos devolverles, en términos reales, los niveles que tenían antes de ser desplazados o antes del comienzo de la ejecución del proyecto, cuando sea que presentaban los niveles más altos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 6.a: Requiere Informar las personas desplazadas acerca de sus opciones y derechos³¹ - 6.a: Requiere una compensación efectiva y rápida equivalente al costo total de reposición³² - 6.b: Reasentamiento y compensación en tierras para personas desplazadas cuyos medios de subsistencia dependen del uso de la tierra³³ - 10: Requiere que se haga el reasentamiento o la restricción de acceso únicamente una vez que se hayan pagado las compensaciones. ³⁴ | |
|---|---|--|

³¹ PO 4.12. Página 2, principio 6.a.i : se le informe a las personas desplazadas acerca de sus opciones y derechos relacionados con el reasentamiento;

³² PO 4.12. Página 3, principio 6. a. ii y iii : se les consulte y se les dé a elegir entre distintas opciones técnicas y económicos viables de reasentamiento, y se les otorgue una indemnización rápida y efectiva equivalente al costo total de reposición por las pérdidas de activos atribuibles directamente al proyecto

³³PO 4.12. Página 3, principio 6b : Si entre los efectos se incluye el traslado físico, en el plan de reasentamiento o en el marco de políticas de reasentamiento se deberán prever medidas que garanticen que las personas desplazadas i) recibirán asistencia (como subsidios de traslado) durante el traslado, y ii) recibirán viviendas o sitios para vivienda, o, según el caso, sitios agrícolas cuyo potencial productivo, ubicación y otros factores sean, como mínimo, equivalentemente ventajosos en conjunto a los del sitio antiguo.

³⁴ PO 4.12. Página 4, principio 10 : la privación de tierras y otros activos conexos sólo podrá ocurrir una vez que se haya pagado la indemnización y, cuando corresponda, una vez que se hayan proporcionado sitios de reasentamiento y subsidios de traslado a las personas desplazadas.

| | | |
|--|--|--|
| <p>Pueblos Indígenas (4.10): Esta OP tiene como propósito, asegurar que los proyectos que se ejecutan con la participación del BM, respeten la dignidad, los derechos humanos, economías y culturas de los Pueblos Indígenas, evitando posibles impactos negativos por parte de los proyectos y proporcionando beneficios sociales y económicos que sean culturalmente adecuados. En los proyectos financiados por el Banco se incluyen medidas para i) Evitar posibles efectos adversos sobre las comunidades indígenas, o ii) Cuando éstos no puedan evitarse, reducirlos lo más posible, mitigarlos o compensarlos. Los proyectos deben diseñarse de manera que los Pueblos Indígenas reciban beneficios sociales y económicos que sean culturalmente apropiados e inclusivos. Asimismo, en todos los proyectos propuestos para financiamiento por el Banco que afectan a Pueblos Indígenas, el Banco exige que el prestatario lleve a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada. El Banco sólo otorga financiamiento al proyecto cuando las</p> | <p>La Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID aborda este tema para las actividades del BID.</p> <p>De acuerdo con varios estudios comparativos³⁵, esta política del BID tiene requisitos más rigurosos que el BM en cuanto a la consulta. El BM requiere “consultas libres, previas e informadas” que llevan al “amplio apoyo comunitario” para proyectos que afectan a los pueblos indígenas, mientras que el BID requiere “negociaciones en buena fe” para proyectos con impactos negativos, y “acuerdos verificados” para programas o proyectos altamente riesgosos. Ni el BM, ni el BID requieren el CLPI, para proyectos que afectan a los pueblos indígenas.</p> <p>Sin embargo, en el tema del reparto equitativo de los beneficios la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM es más fuerte³⁶. Si un proyecto restringe el acceso de pueblos indígenas a áreas protegidas que éstos han utilizado tradicionalmente, el BM requiere que los pueblos indígenas “compartan equitativamente” los beneficios de dichas áreas protegidas. El BID requiere que los pueblos</p> | <p>Por lo tanto, cuando un impacto negativo identificado se vincula con el tema de ‘Pueblos Indígenas’ definido bajo el Enfoque Común, se activarán:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID • El Principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM |
|--|--|--|

³⁵ Independent Assessment of IDB’s Background Information for the FCPF Common Approach to Environmental and Social Safeguards, 2011.

<https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2011/Summary%20Memo%20and%20Gap%20Analysis%20of%20IDB%20Background%20Info%20110603.pdf>

Políticas de Salvaguardia Socio Ambiental y Enfoque Común del FCPF, Bank Information Center, Agosto 2013.

http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Políticas-de-Salvaguardia-Socio-Ambiental-y-Enfoque-Comun-del-FCPF_BankInformationCenter_agosto2013.pdf

³⁶ PO 4.10 del BM. Página 10, principio 21: El marco de procedimiento establece las directrices para la elaboración, durante la ejecución del proyecto, de un plan de gestión de cada parque y zona protegida y asegura que los Pueblos Indígenas tomen parte en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de gestión, y que reciban una participación equitativa en los beneficios que generen los parques y las zonas protegidas.

| | | |
|---|--|--|
| <p>consultas dan lugar a un amplio apoyo comunitario al mismo por parte de la población indígena afectada.</p> | <p>indígenas participen en “el aprovechamiento, la administración y la conservación” de dichas áreas, y que “cuando sea posible” participen en los beneficios del proyecto. Sin embargo, no requiere el reparto equitativo de los beneficios.</p> | |
| <p><u>Recursos físicos y culturales (4.11):</u> en términos generales, contiene lineamientos para evitar y/o mitigar los impactos adversos sobre los recursos culturales físicos de proyectos, incluyendo bienes muebles o inmuebles, sitios, estructuras, grupos de estructuras y, características naturales y paisajes que tienen un significado cultural arqueológico, paleontológico, histórico, arquitectónico, religioso, estético o de otro tipo. Su interés cultural puede estar en el nivel local, provincial o nacional, o dentro de la comunidad internacional. Los Recursos culturales físicos son importantes como fuente de valiosa información científica e histórica, como activos para el desarrollo económico y social, y como parte integrante</p> | <p>La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (703) del BID aborda este tema en la Directiva B.9. Hábitats naturales y sitios culturales al indicar que “El Banco no apoyará operaciones y actividades que en su opinión conviertan o degraden significativamente hábitats naturales críticos o que dañen sitios de importancia cultural crítica.” Para efectos de esta política, “Los sitios culturales son todas aquellas áreas naturales o edificadas, estructuras, características naturales y/u objetos valorados por un pueblo o que se encuentren asociados a él y que se consideren de significación espiritual, arqueológica o histórica. Si bien es posible que haya remanentes materiales notables, por lo general serán mínimos o inexistentes.”</p> | <p>Por lo tanto, cuando un impacto negativo identificado se vincula con el tema de ‘Recursos físicos y culturales’ definido bajo el Enfoque Común, se activarán:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Política Operacional sobre Recursos Físicos y Culturales (OP 4.11) del BM. • La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (703) del BID Directiva B.9. Hábitats naturales y sitios. |

| | | |
|--|--|--|
| de la identidad y las prácticas culturales de un pueblo. | | |
|--|--|--|

Más allá del enfoque común aplicarían también las siguientes políticas y los procedimientos del BID:

Política de acceso a la información op-102

Esta política tiene por objetivo procura maximizar el acceso a la información que genera y, por tanto, divulga cualquier información que no figura en la lista de excepciones. La política se basa en los siguientes principios: Máximo acceso a la información; Excepciones claras y delimitadas; Acceso sencillo y amplio a la información; y Explicaciones de las decisiones y derecho a revisión.

Política de igualdad de género– op-761

El objetivo último de la Política es promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y contribuir a impulsar las prioridades institucionales y acelerar el proceso de desarrollo económico y social.

Política de riesgo de desastres naturales op-704

tiene por propósito orientar la acción de la institución para asistir a sus prestatarios en la reducción de riesgos derivados de amenazas naturales y en la gestión de desastres, a fin de favorecer el logro de sus objetivos de desarrollo económico y social.

1.2. Aplicación de las salvaguardas de la CMNUCC

Considerando que el gobierno de Guatemala busca dar cumplimiento a sus compromisos internacionales bajo la CMNUCC, y el hecho que el enfoque metodológico del Fondo de Carbono del Banco requiere que los países den cumplimiento a las salvaguardas adoptadas por la CMNUCC (en adelante, salvaguardas de Cancún), esta sub-sección presenta el alcance de las salvaguardas de Cancún. Esta información brinda el contexto para la identificación de las salvaguardas de Cancún en la sección 1.4., y que con el fin de destacar que son consideradas relevantes para el abordaje de los impactos adversos identificados.

Si bien las Salvaguardas de Cancún no se vinculan o activan directamente por impactos, conforme a las decisiones relevantes de la CMNUCC todos los países participando en REDD+ y que buscan acceder al pago por resultados deben tomar medidas para asegurar que las siete salvaguardas de Cancún sean observadas en la implementación de su Estrategia Nacional REDD+. Por lo tanto, para cada impacto adverso priorizado del SESA se identifican las Salvaguardas de Cancún relevantes, ya que las medidas que el país tome para asegurar el cumplimiento con estas Salvaguardas podrán ayudar a abordar el impacto adverso.

Las siete salvaguardas de Cancún son:

- a) La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales sobre la materia
- b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacionales
- c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
- d) La participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular, la de los pueblos indígenas y las comunidades locales, en las acciones mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la presente decisión
- e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, velando por que las que se indican en el párrafo 70 de la presente decisión no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino que sirvan, en cambio, para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los servicios derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales
- f) Acciones para hacer frente a los riesgos de reversión

g) Acciones para reducir el desplazamiento de emisiones

A continuación, brindamos una breve explicación sobre el alcance de cada una de ellas.

Salvaguarda (a) de Cancún

Con el fin de abordar y cumplir la salvaguarda (a), se espera que los países aseguren que sus actividades de REDD+ sean coherentes con sus programas nacionales de bosques, así como también con sus convenciones y acuerdos internacionales relevantes. Esto significa que los países que implementan las actividades de REDD+ deberán identificar claramente las convenciones y los acuerdos internacionales, y los programas nacionales de bosques, vigentes y relevantes, y deberán analizar de qué modo las actividades propuestas de REDD+ son coherentes con dichos documentos o los complementan.

Los elementos constitutivos orientativos e ilustrativos de esta salvaguarda son los siguientes:

1. coherencia con los objetivos de los programas o los planes nacionales de bosques para combatir la deforestación y la degradación de bosques;
2. coherencia con los objetivos de las convenciones y los acuerdos internacionales relevantes.

Salvaguarda (b) de Cancún

La salvaguarda (b) se centra en las estructuras nacionales de gobernanza de los bosques, especialmente con respecto a la “transparencia” y la “eficacia”. Las estructuras de gobernanza transparentes están relacionadas con el derecho a acceder a la información, especialmente en el caso de los grupos vulnerables como los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Entre las características de las estructuras de gobernanza eficaces generalmente se incluyen las siguientes: leyes y regulaciones relacionadas con la gobernanza y el uso sostenible de los bosques, y el cumplimiento de dichas leyes; la integración de consideraciones sociales y medioambientales, incluidos los derechos humanos, en la toma de decisiones; la participación pública en la toma de decisiones y procesos relacionados; derechos claros de propiedad y posesión (tenencia de la tierra), incluida la propiedad tradicional y consuetudinaria; y acuerdos de distribución justa y equitativa de los beneficios. Además, está relacionado con el acceso a procedimientos judiciales o administrativos, los que pueden proporcionar una solución eficaz para los casos de incumplimiento de los derechos y para resolver disputas, especialmente en el caso de los pueblos indígenas.

Los elementos constitutivos orientativos e ilustrativos de esta salvaguarda son los siguientes:

1. estructuras nacionales transparentes de gobernanza de los bosques;
 - a. acceso a la información
 - b. responsabilidad
2. estructuras nacionales eficaces de gobernanza de bosques;
 - a. tenencia de la tierra
 - b. distribución equitativa de beneficios
 - c. igualdad de género
 - d. cumplimiento del estado de derecho
 - e. marco institucional
 - f. acceso adecuado a la justicia
 - g. integración de las consideraciones sociales, económicas y medioambientales
 - h. coordinación entre los diferentes sectores

Salvaguarda (c) de Cancún

La salvaguarda (c) se centra en el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. De este modo, las actividades de REDD+ deben ejecutarse de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales, así como a las circunstancias nacionales relevantes, con respecto tanto a los pueblos indígenas como a las comunidades locales. Se espera que estos derechos se apliquen a nivel individual y a nivel grupal, lo que incluye entre otros: el respeto por el conocimiento tradicional; el respeto y la protección de los derechos relacionados con la tenencia de la tierra; la autodeterminación; la no discriminación; la distribución de beneficios; la participación; y el consentimiento libre, previo e informado.

Los elementos constitutivos orientativos e ilustrativos de esta salvaguarda son los siguientes:

1. definición/determinación de los pueblos indígenas y las comunidades locales;
3. definición/determinación del conocimiento tradicional;
4. reconocimiento e implementación de derechos, de acuerdo con la legislación internacional;
 - a. no discriminación
 - b. autodeterminación
 - c. derechos relacionados con la cultura

d. tenencia colectiva de la tierra

Salvaguarda (d) de Cancún

La interpretación del concepto de “participación plena y efectiva” generalmente está asociada con el reconocimiento y la implementación de derechos procesales (también conocidos como derechos de acceso), como el acceso a la información, la participación y la justicia en relación con los procesos de toma de decisiones. Teniendo en cuenta que los pueblos indígenas y las comunidades locales poseen identidades, culturas, idiomas e instituciones diferentes, el hecho de asegurar que puedan participar de forma plena y efectiva está relacionado con procedimientos o medidas especiales, incluido el consentimiento libre, previo e informado.

Los elementos constitutivos orientativos e ilustrativos de esta salvaguarda son los siguientes:

1. regulación de la participación plena y efectiva;
2. entorno de apoyo para una participación efectiva;
 - a. identificación de los actores relevantes
 - b. acceso a información para la toma de decisiones
 - c. mecanismos de participación
 - d. acceso a la justicia/mecanismos de resolución de conflictos para la toma de decisiones
 - e. consultas/consentimiento libre, previo e informado

Salvaguarda (e) de Cancún

El objetivo general de la salvaguarda (e) es que las acciones de REDD+ sean coherentes con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica. Específicamente, las actividades de REDD+ no se deben usar para la transformación de bosques naturales y se debe incentivar la protección de los bosques naturales y los servicios derivados de sus ecosistemas. En general, se entiende que el objetivo de las acciones debería ser contribuir a la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, entre lo que se incluye: identificación, mapeo y monitoreo de los bosques naturales y la biodiversidad, regulación de la biodiversidad, apoyo a la investigación en materia de conservación, concientización y la integración de las inquietudes sobre biodiversidad en otros sectores nacionales. Para incentivar la conservación, es fundamental que las actividades de REDD+ también promuevan la maximización de los beneficios sociales y medioambientales, como los servicios medioambientales y los medios de vida sustentables.

Los elementos constitutivos orientativos e ilustrativos de esta salvaguarda son los siguientes:

1. transformación de bosques naturales;
 - a. identificación de bosques naturales, la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos
 - b. regulación de la conversión de bosques naturales
2. protección y conservación de los bosques naturales y la biodiversidad;
 - a. identificación o mapeo de bosques naturales y biodiversidad
 - b. medidas para proteger la biodiversidad y los bosques naturales
 - c. investigación y concientización sobre la conservación
 - d. integración de la biodiversidad en políticas intersectoriales

Salvaguardas (f) y (g) de Cancún

En las salvaguardas (f) y (g), se exige a los países que tomen medidas para "hacer frente a los riesgos de reversión" y para "reducir el desplazamiento de las emisiones". El objetivo de estas salvaguardas es asegurar que los procesos de reducción o eliminación de las emisiones sea duradero y real; es decir, que el beneficio neto de una acción se mantenga durante un largo período de tiempo (lo que significa que no se revierta, lo que se suele conocer como "permanencia"), o que la actividad no se traslade a otra ubicación; por ejemplo, que un agente de deforestación se traslade a otra ubicación, pero que siga generando la misma cantidad de emisiones (esto hace referencia al desplazamiento de emisiones, también conocido como "fuga"). Estas dos inquietudes a menudo se manejan a través de reglas de contabilidad.

Adicionalmente, las medidas sociales y medioambientales que se usan para implementar las otras salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC pueden ser extremadamente relevantes para las salvaguardas (f) y (g), en términos de reducir el desplazamiento y los riesgos de que la reducción y eliminación de las emisiones forestales no dure por mucho tiempo. Entre los ejemplos se incluyen la transparencia de la tenencia de la tierra; la promoción de medios de subsistencia alternativos; la administración y el uso sostenible de los bosques; la planificación responsable; lo que incluye las actividades de REDD+ o los objetivos de desarrollo de planes a nivel nacional y subnacional, la generación de conciencia y el fortalecimiento de los marcos regulatorios y de gobernanza institucional, la coordinación e integración de los diferentes sectores, así como también el hecho de garantizar la participación y la distribución equitativa de los beneficios sostenibles de REDD+.

Los elementos constitutivos orientativos e ilustrativos de la salvaguarda (f) son los siguientes:

- a. análisis del riesgo de desplazamiento
- b. acciones específicas llevadas a cabo para reducir desplazamientos
- c. desplazamiento detectado e informado a través del sistema nacional de monitoreo forestal

Los elementos constitutivos orientativos e ilustrativos de la salvaguarda (g) son los siguientes:

- a. análisis de los riesgos de reversión
- b. acciones específicas llevadas a cabo para reducir los riesgos de reversión
- c. Reversiones detectadas e informadas a través del SNMF

1.3. Legislación nacional y convenciones relevantes al EMSF y vinculadas a las políticas operativas del FCPF

Esta sub-sección presenta la legislación nacional relevante al ESMF y vinculada a las políticas operativas aplicables. Se considera que el marco jurídico del país será un componente clave para evitar, mitigar, y minimizar impactos adversos sociales y ambientales, y, por tanto, será utilizado para dar respuesta a las políticas operativas aplicables.

La tabla 5 a continuación proporciona una descripción del marco jurídico relevante y vinculado a las temáticas cubiertas por las políticas operativas aplicables. Se destaca que esta sub-sección y tabla brinda el contexto e información sobre el marco jurídico aplicable, y deberá ser examinado en combinación con la sub-sección 1.4.

Tabla 5: Legislación relevante al ESMF

| Categoría | Política Operativa del Banco Mundial y BID | Marco Jurídico | Descripción |
|-----------|--|----------------|-------------|
|-----------|--|----------------|-------------|

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| <p>Pueblos Indígenas</p> | <p>La Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID</p> <p>El Principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM</p> | <p>Constitución Política de la República de Guatemala.</p> <p>Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo</p> <p>Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto número 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala</p> <p>Código Municipal, Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala</p> | <p>La Carta Fundamental del Estado de Guatemala, se cimienta sobre la protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.</p> <p>Dicho convenio se establece sobre el marco de la protección a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial.</p> <p>La mencionada ley, parte de un Sistema de Consejos de Desarrollo, los cuales permiten ser el medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca.</p> <p>De acuerdo al mandato del Código Municipal, establece que las comunidades de los pueblos indígenas, son formas de cohesión social natural y como tales tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, debiendo inscribirse en el registro civil de la municipalidad correspondiente, con respeto de su organización y administración interna que se rige de conformidad con sus normas, valores y procedimientos propios, con sus respectivas autoridades tradicionales reconocidas y respetadas por el Estado, de acuerdo a disposiciones constitucionales y legales. Además, contiene principios relacionadas a las Alcaldías indígenas, ya que el gobierno del municipio debe reconocer, respetar y promover las alcaldías indígenas, cuando éstas existan, incluyendo sus propias formas de funcionamiento administrativo.</p> <p>Regula las tierras comunitarias y establece que: “El gobierno municipal establecerá previa consulta con las autoridades comunitarias, los mecanismos que garanticen a los miembros de las comunidades el uso, conservación y administración de las tierras comunitarias cuya administración se haya encomendado tradicionalmente al gobierno municipal; en todo caso, los mecanismos deben basarse en lo indicado en el Título IV, capítulo I de este Código.³⁷</p> <p>El artículo 17 Derechos y Obligaciones de los vecinos, inciso k) establece:</p> |
|---------------------------------|--|--|--|

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| Reasentamiento involuntario | <p>la Política de Reasentamiento Involuntario (710) del BID</p> <p>Los principios 2b, 6a, 6b y 10 de la Política Operacional de Reasentamiento Involuntario (4.12) del BM</p> | <p>Constitución Política de la República de Guatemala</p> <p>Ley de Expropiación, Decreto Número 529 del Congreso de la República de Guatemala</p> <p>Código Municipal, Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala</p> | <p>Al efecto, la Constitución Política de la República de Guatemala, parte de la protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.</p> <p>Dicho cuerpo legal establece claramente qué se entiende por “utilidad o necesidad pública o interés social”, para los efectos de esta ley, todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o espiritual. La declaración a que se refiere el objeto de esta ley , debe realizarse con referencia precisa, siempre que fuere posible, a los bienes afectados, determinando el objeto de la expropiación con términos que no permitan extender la acción expropiatoria a otros bienes que a aquellos que sean necesarios para lograr la satisfacción colectiva que se procura llevar a cabo. La expropiación debe limitarse a la porción necesaria para construir la obra pública o satisfacer la necesidad colectiva, salvo el caso de que para su realización o su financiación, sea necesaria la expropiación de todo el bien o de una porción mayor, o de otro bien adyacente, extremos que deberán ser establecidas en la declaración respectiva</p> <p>El referido Código Municipal, parte de la premisa en cuanto a las sesiones que llevan los Concejos municipales, con miras a contar con sesiones que tomen en cuenta con carácter obligatorio los temas relativos a servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda, Artículo 36 del referido cuerpo legal.</p> <p>El referido cuerpo legal se relaciona con aspectos de reasentamiento, en virtud que el municipio en el ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República garantiza al mismo, éste elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes</p> |
|------------------------------------|---|--|---|

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>Ley de Desarrollo Social, Decreto No. 42-2001 del Congreso de la República de Guatemala</p> <p>Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto No. 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala</p> <p>Ley de Transformación Agraria, Decreto No. 1551 del Congreso de la República de Guatemala</p> | <p>coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda. Ninguna ley o disposición legal puede contrariar, disminuir o tergiversar la autonomía municipal establecida en la Constitución Política de la República; por ende, los temas de reasentamiento, son aspectos que por gobernanza municipal deben llevarse a cabo como agenda principal de las autoridades locales, como principal objetivo de desarrollo local existente.</p> <p>La presente Ley tiene por objeto la creación de un marco jurídico que permita implementar los procedimientos legales y de políticas públicas para llevar a cabo la promoción, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones gubernativas y del Estado, encaminadas al desarrollo de la persona humana en los aspectos social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos de especial atención. El referido cuerpo legal se relaciona con aspectos de reasentamiento desde un punto de vista que el Estado debe ser el garante en proporcionar normas jurídicas para que la población se sienta beneficiada, segura y protegida por el Estado, como un medio muy importante para que el Estado adquiera legitimidad, pues del poder público debe emanar la justicia y la equidad hacia la población guatemalteca, actuando dentro de las gestiones de reasentamiento, con herramientas y normas jurídicas sólidas que permitan un desarrollo social justo.</p> <p>El Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca. Es por medio de dichas instancias en donde puede llevarse a cabo acciones que permitan lograr resultados positivos e inclusivos a nivel social dentro de las gestiones de reasentamientos, buscando con ello participación inclusiva y democrática.</p> <p>La misma parte de la garantía constitucional a la propiedad privada, las condiciones indispensables para que el propietario alcance en el más alto índice el desarrollo y utilización de sus bienes, y que regule al mismo tiempo las obligaciones y limitaciones a la propiedad que sean adecuadas</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos, Decreto No. 120-96 del Congreso de la República de Guatemala</p> <p>Ley de Fondo de Tierras, Decreto No. 24-99 del Congreso de la República de Guatemala</p> <p>Ley de Registro de Información Catastral, Decreto No. 41-2005 del Congreso de la República de Guatemala</p> | <p>para la transformación de la tierra ociosa, la protección del patrimonio familiar y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de la Nación, precisándose el concepto de tierra ociosa y el gravamen que pesará sobre éstas, regulándose la expropiación y proporcionándose medios para el desarrollo agrario del país, todo de acuerdo con las condiciones y características de cada región, estableciéndose los procedimientos y los órganos para su aplicación, a fin de llevar al campesinado guatemalteco la justicia Social.</p> <p>La referida Ley, tiene como objeto, apoyar, fortalecer, fomentar y regular las acciones del Estado y los habitantes de la República, con el fin de desarrollar el sector vivienda y asentamientos humanos para establecer las bases institucional, técnica y financiera, que permitan a la familia acceder a una solución habitacional digna y adecuada</p> <p>El referido cuerpo legal, pretende dar cumplimiento a los enunciados y principios a que se refieren los considerandos anteriores y sentido práctico a los acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, se hace imperativa la creación de un Fondo de Tierras, por lo que deben dictarse las disposiciones legales correspondientes, emitiendo una ley que cree una entidad estatal, descentralizada con autonomía funcional. Así también, dicha institución tiene estrecha relación en el aspecto de reasentamiento, en virtud que es la institución gubernamental encargada de la atención de las solicitudes de acceso a las tierras inscritas a favor del Estado, con miras a proporcionar a las personas que se encuentran en proceso de un reasentamiento, certeza espacial, jurídica, legalidad y acceso a propiedad en forma individual u organizada, que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley del Fondo de Tierras.</p> <p>Dicha ley, contiene principalmente la creación del Registro de Información Catastral como una autoridad competente en materia catastral, que tiene por objeto establecer, mantener y actualizar el catastro nacional, según lo preceptuado en la presente Ley y sus reglamentos. Todas sus actuaciones y registros son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en un tiempo prudencial, con las formalidades de ley y sin limitación alguna, informes, copias,</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| | | | reproducciones y certificaciones de las actuaciones a costa del interesado. |
| Bosques | la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (703) del BID Los principios 9a, 10, 12 y 14 de la Política Operacional de Bosques (4.36) del BM. | Constitución Política de la República de Guatemala | La Constitución Política de la República de Guatemala, contiene el mandato de la reforestación. Por tanto, declara de urgencia nacional y de interés social, la reforestación del país y la conservación de los bosques. La ley determinará la forma y requisitos para la explotación racional de los recursos forestales y su renovación, incluyendo las resinas, gomas, productos vegetales silvestres no cultivados y demás productos similares, y fomentará su industrialización. La explotación de todos estos recursos, corresponderá exclusivamente a personas guatemaltecos, individuales o jurídicas. Los bosques y la vegetación en las riberas de los ríos y lagos, y en las cercanías de las fuentes de aguas, gozarán de especial protección. |
| | | Ley Forestal, Decreto número 101-96 del Congreso de la República de Guatemala. | Con la presente ley, se declara de urgencia nacional y de interés social la reforestación y la conservación de los bosques, propiciando el desarrollo forestal y su manejo sostenible, mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos: a) Reducir la deforestación de tierras de vocación forestal y el avance de la frontera agrícola, a través del incremento del uso de la tierra de acuerdo con su vocación y sin omitir las propias características de suelo, topografía y el clima; b) Promover la reforestación de áreas forestales actualmente sin bosque, para proveer al país de los productos forestales que requiera; c) Incrementar la productividad de los bosques existentes, sometiéndolos a manejo racional y sostenido de acuerdo a su potencial biológico y económico, fomentando el uso de sistemas y equipos industriales que logren el mayor valor agregado a los productos forestales; d) Apoyar- promover e incentivar la inversión pública y privada en actividades forestales para que se incremente la producción, comercialización, diversificación, industrialización y conservación de los recursos forestales; e) Conservar los ecosistemas forestales del país, a través del desarrollo de programas y estrategias que promuevan el cumplimiento de la legislación respectiva; y f) Propiciar el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades al aumentar al aumentar la provisión de bienes y servicios provenientes del bosque para satisfacer las necesidades de leña, vivienda infraestructura rural y alimentos. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>Ley de Áreas Protegidas, Decreto número 4-89 del Congreso de la República de Guatemala</p> <p>Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala - PROBOSQUE-. Decreto número 2-2015 del Congreso de la República de Guatemala.</p> <p>Ley de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal -PINPEP-. Decreto 51-2010, del Congreso de la República de Guatemala.</p> <p>Reglamento para el aprovechamiento del Mangle, Resolución No. 01.25.98. del Instituto Nacional de Bosques.</p> <p>Reglamento de la Ley de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal -PINPEP-, Resolución No. JD. 01.12.2011</p> | <p>La ley declara de Interés Nacional la conservación de la diversidad biológica, ya que la misma es parte integral del patrimonio natural de los guatemaltecos y, por lo tanto, se declara de interés nacional su conservación por medio de áreas protegidas debidamente declaradas y administradas.</p> <p>La presente Ley tiene por objeto aumentar la cobertura forestal del país con la creación y aplicación del Programa de Incentivos para el Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques, a través del cual se otorgarán los incentivos contemplados en esta Ley. Este programa, para los efectos de la presente Ley, se denomina PROBOSQUE.</p> <p>La presente Ley tiene por objeto la creación del programa de incentivos forestales para poseedores de pequeñas extensiones de tierra de vocación forestal o agroforestal, el cual podrá abreviarse PINPEP, para los efectos de aplicación de esta Ley.</p> <p>El presente reglamento dicta las normas para la adecuada aplicación del mandato contenido en la Ley Forestal en cuanto al aprovechamiento de árboles del ecosistema manglar, como parte integral del manejo sostenido de este tipo de ecosistemas.</p> <p>Dicho reglamento desarrolla las disposiciones contenidas en la Ley de Incentivos Forestales para poseedores de pequeñas extensiones de tierra de vocación forestal o agroforestal, Decreto número 51-2010 del Congreso de la República de Guatemala, regulando sus procedimientos y gestiones para la toma de decisiones de los actores involucrados en el mismo.</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>Reglamento del PINFOR, INAB, Resolución No. JD.03.31.2014.</p> <p>Reglamento para el Manejo de Plantaciones y Áreas Productoras de Semilla de Pinabete</p> <p>Reglamento de Ley PROBOSQUE, Resolución No. JD.03.28.2017, Instituto Nacional de Bosques (INAB).</p> <p>Normas para el Otorgamiento de Concesiones de Aprovechamiento y Manejo de Recursos Naturales Renovables en la Zona de Uso Múltiple de la Reserva de Biosfera Maya.</p> <p>Normativo para la Administración de Garantías de Recuperación Forestal en Áreas Protegidas</p> | <p>El reglamento en mención, regula el Programa de Incentivos Forestales, basando su actuación en su Plan Estratégico para su implementación, con miras a mantener y mejorar la producción forestal sostenible, incorporando tierras de vocación forestal desprovistas de bosque a la actividad forestal, por medio del establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales o regeneración natural.</p> <p>El mismo tiene como objeto regular el registro de plantaciones, áreas productoras de semillas y viveros de Abies guatemalensis Rehder y Abies religiosa (hunth) Schltd, así como el aprovechamiento de productos y subproductos de dichas especies; teniendo como objeto preservar el patrimonio natural de la nación.</p> <p>El reciente reglamento, tiene como objeto regular los procedimientos de la Ley PROBOSQUE, en cumplimiento a lo establecido en su Decreto Legislativo de creación, siendo además un instrumento de observancia general y de aplicación en todo el territorio nacional.</p> <p>El objetivo del normativo en mención, tiene como objeto regular y facilitar, dentro del marco jurídico existente, el mecanismo de adjudicación de concesiones para el aprovechamiento y manejo de recursos naturales renovables en la Zona de Uso Múltiple (ZUM), de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM).</p> <p>EL referido normativo, tiene como objeto el seguimiento de las garantías de recuperación forestal, con la finalidad de asegurar que cualquier persona individual o colectiva que realice aprovechamiento de recursos renovables, cumpla con el compromiso de recuperación forestal correspondiente, todo en el marco de las áreas protegidas que conforman el SIGAP.</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Hábitats naturales | La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (703) del BID | <p>Constitución Política de la República de Guatemala</p> <p>Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB)</p> <p>Convención de RAMSAR</p> | <p>Según mandato constitucional, se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna y la flora que en ellos exista. Además, recalca que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación.</p> <p>Constituye un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. La conservación de la diversidad biológica es un interés común de toda la humanidad. El CDB cubre la diversidad biológica a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos genéticos. También cubre la biotecnología a través del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. De hecho, cubre todos los posibles dominios que están directa o indirectamente relacionados con la diversidad biológica y su papel en el desarrollo, desde la ciencia, la política y la educación hasta la agricultura, los negocios, la cultura y mucho más.</p> <p>La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida en forma abreviada como Convenio de Ramsar, fue firmada en la ciudad de <u>Ramsar (Irán)</u> el 18 de enero de 1971 y entró en vigor el 21 de diciembre de 1975. Su principal objetivo es «la conservación y el uso racional de los <u>humedales</u> mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo.</p> |
|---------------------------|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural – patrimonio UNESCO</p> | <p>La Convención se encuentra enfocada en salvaguardar aquellos bienes de patrimonio cultural o natural que presentan un interés excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera. Además, los principales lineamientos de la Convención, consideran como “patrimonio natural”, aquellos “bienes o sitios” que se ostenten alguna de las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista estético o científico, • formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista estético o científico, • lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural, |
| | | <p>Convención Internacional de Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre</p> | <p>La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia.</p> |
| | | <p>Ley de Áreas Protegidas, Decreto número 4-89 del Congreso de la República de Guatemala</p> | <p>Establece que la diversidad biológica, es parte integral del patrimonio natural de los guatemaltecos y, por lo tanto, se declara de interés nacional su conservación por medio de áreas protegidas debidamente declaradas y administradas.</p> |
| | | <p>Ley Forestal, Decreto 101-96, del Congreso de la República de Guatemala</p> | <p>Con la presente ley se declara de urgencia nacional y de interés social la reforestación y la conservación de los bosques, para lo cual se propiciará el desarrollo forestal y su manejo sostenible.</p> |
| | | <p>Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto número 68-86 del Congreso de la República de Guatemala</p> | <p>La misma parte especialmente del principio que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, propiciarán el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico.</p> |

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| | | | Por lo tanto, la utilización y aprovechamiento de la fauna, la flora, el suelo, subsuelo y el agua, deberán realizarse racionalmente. |
| Evaluación Ambiental | <p>la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (703) del BID,</p> <p>los principios 15 y 4 la Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM.</p> | <p>Constitución Política de la República de Guatemala</p> <p>Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo</p> <p>Ley de Áreas Protegidas, Decreto número 4-89 del Congreso de la República de Guatemala</p> | <p>Según mandato constitucional, se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna y la flora que en ellos exista. Además, recalca que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación.</p> <p>Dicha Convención incluye dos aspectos medulares relacionados a los instrumentos ambientales, ya que la consulta y participación, constituyen la razón del Convenio 169. No es raro que el referido convenio tenga tantas repercusiones en Guatemala, y en especial en América Latina, en virtud que es una región donde los pueblos indígenas presentan los peores indicadores socioeconómicos y laborales.</p> <p>Cabe resaltar que la consulta previa prevista en el Convenio señala principalmente qué medidas legislativas y administrativas pueden afectar directamente a los pueblos indígenas, o aquellas relacionadas con la exploración o explotación de recursos minerales o del subsuelo en los territorios donde habitan. Este último ha sido el tema más debatido en la región. Pero estos debates tienen la virtud de que apuntan a lograr soluciones.</p> <p>El mismo parte que para realizar actividades dentro de las Áreas Protegidas, las empresas públicas o privadas que tengan actualmente, o que en el futuro desarrollen instalaciones o actividades comerciales, industriales, turísticas, pesqueras, forestales, agropecuarias, experimentales o de transporte dentro del perímetro de las áreas protegidas, celebrarán de mutuo acuerdo con el CONAP, un contrato en el que se establecerán las condiciones y normas de operación, determinadas por un estudio de impacto ambiental, presentado por el</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto número 68-86 del Congreso de la República de Guatemala</p> <p>Código Municipal, Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala.</p> <p>Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, La Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero. Decreto No. 7-2013, del Congreso de la República de Guatemala</p> | <p>interesado al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el cual con su opinión lo remitirá a la Comisión Nacional del Medio Ambiente para su evaluación, siempre y cuando su actividad sea compatible con los usos previstos en el plan maestro de la unidad de conservación de que se trate</p> <p>El objeto de la ley en cuanto a la evaluación ambiental, parte que para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características puede producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del impacto ambiental, realizado por técnicos en la materia y aprobado por la Comisión del Medio Ambiente. El funcionario que omitiere exigir el estudio de Impacto Ambiental de conformidad con este Artículo, será responsable personalmente por incumplimiento de deberes, así como el particular que omitiere cumplir con dicho estudio de Impacto Ambiental será sancionado con una multa de Q5,000.00 a Q100,000.00. En caso de no cumplir con este requisito en el término de seis meses de haber sido multado, el negocio será clausurado en tanto no cumpla.</p> <p>Parte de las competencias propias del municipio. Las competencias propias deberán cumplirse por el municipio, por dos o más municipios bajo convenio, o por mancomunidad de municipios, especialmente en la autorización de las licencias de construcción de obras, públicas o privadas, en la circunscripción del municipio.</p> <p>El referido cuerpo legal, parte del cumplimiento de este mandato que contribuye a dotar a las dependencias de Estado, centralizadas, descentralizadas y autónomas, de las capacidades, instrumentos y herramienta que permitan contribuir al proceso de adaptación forzosa y mitigación obligada ante los efectos del cambio climático, coadyuvando al equilibrio de los bienes naturales y servicios ambientales, promoviendo su mejor aprovechamiento para el desarrollo sostenible tendente a mejorar las condiciones de vida de toda la población guatemalteca.</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Acuerdo Gubernativo Número 137-2016</p> | <p>El referido cuerpo legal, parte con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, contenida en el Decreto Número 68-86 del Congreso de la República de Guatemala, corresponde al Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional propiciar el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico; y por su parte la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, establece que es función del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo, cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.</p> |
| | | <p>Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos, Acuerdo Gubernativo No. 236-2006</p> | <p>El objeto del presente Reglamento es establecer los criterios y requisitos que deben cumplirse para la descarga y reúso de aguas residuales, así como para la disposición de lodos. Lo anterior para que, a través del mejoramiento de las características de dichas aguas, se logre establecer un proceso continuo que permita: a) Proteger los cuerpos receptores de agua de los impactos provenientes de la actividad humana. b) Recuperar los cuerpos receptores de agua en proceso de eutrofización. c) Promover el desarrollo del recurso hídrico con visión de gestión integrada.</p> |
| | | <p>Guía Operativa para la Implementación de la Consulta a los Pueblos Indígenas</p> | <p>La Guía Operativa para la implementación de la consulta a pueblos indígenas, es una herramienta para el funcionario obligado de llevar a cabo una consulta como resultado de los diálogos realizados. Además, la misma se ciñe a lo resuelto por la Corte de constitucionalidad en el caso Oxec y Oxec II, a efecto de activar la institucionalidad del Estado para dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT. Dicha guía es un producto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la cual fue construida con los sectores más vulnerables del país, además de ser trabajada con los sectores gubernamentales competentes. Cabe mencionar que la guía es un documento que no cuenta con instrumento jurídico que la haya aprobado, únicamente constituye un documento administrativo que orienta a la administración pública, en el marco de sus compromisos o procedimientos que conllevan los procedimientos de consulta correspondiente.</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Recursos físicos y culturales</p> | <p>La Política Operacional sobre Recursos Físicos y Culturales (OP 4.11) del BM.</p> <p>La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (703) del BID Directiva B.9. Hábitats naturales y sitios.</p> | <p>Constitución Política de la República de Guatemala</p> <p>Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural</p> <p>Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales</p> <p>Convención de la OEA sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas, Convención de San Salvador</p> <p>Convención Centroamericana para la Restitución y el Retorno de objetos Arqueológicos, Históricos y Artísticos</p> | <p>El mismo parte por mandato constitucional de la protección al patrimonio cultural, ya que el mismo forma parte del patrimonio cultural de la Nación, los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. Prohibiendo su enajenación, exportación o alteración salvo los casos que determine la ley.</p> <p>Tratado internacional que reconoce la obligación por identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico.</p> <p>Tratado internacional en donde los Estados Partes reconocen que la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales constituyen una de las causas principales del empobrecimiento del patrimonio cultural de los países de origen de dichos bienes, y que una colaboración internacional constituye uno de los medios más eficaces para proteger sus bienes culturales respectivos contra todos los peligros que entrañan aquellos actos.</p> <p>Tratado internacional que tiene como objeto la identificación, registro, protección y vigilancia de los bienes que integran el patrimonio cultural de las naciones americanas, para: a) impedir la exportación o importación ilícita de bienes culturales; y b) promover la cooperación entre los Estados americanos para el mutuo conocimiento y apreciación de sus bienes culturales.</p> <p>Tratado internacional en donde los Estados parte se comprometen en lo individual y, según el caso, conjuntamente a coordinar sus acciones y recursos para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, así como a coordinar acciones para reclamar, frente a terceros países, el retorno y la</p> |
|---|--|---|--|

| | | | |
|---------------------------|---|---|--|
| | | <p>Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación Decreto Número 26-97 y sus reformas, Reformado por el Decreto Número 81-98 del Congreso de la República de Guatemala.</p> <p>Ley Protectora de la Ciudad de la Antigua Guatemala</p> | <p>restitución del Patrimonio Cultural que haya sido sustraído o exportado ilícitamente.</p> <p>Dicha Ley regula la protección, defensa, investigación, conservación y recuperación de los bienes que integran el Patrimonio Cultural de la Nación. Correspondiéndole al Estado cumplir con estas funciones por conducto del Ministerio de Cultura y Deportes.</p> <p>El referido cuerpo legal declara de utilidad pública y de interés nacional la protección, conservación y restauración de La Antigua Guatemala y áreas circundantes que integran con ella una sola unidad de paisaje, cultura y expresión artística.</p> |
| Igualdad de Género | <p>Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo. La Política aplica al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Fondo Multilateral de Inversiones, abarcando las estrategias de país, así como las intervenciones de desarrollo del Banco a través de sus operaciones financieras en los sectores público y privado (con y sin garantía soberana) y de cooperación técnica incluyendo los insumos operativos, y los productos de conocimiento y de formación de capacidad institucional.</p> <p>El objetivo de la Política es fortalecer la respuesta del Banco a los objetivos y compromisos de sus países miembros en América Latina y el Caribe de promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Al</p> | <p>Constitución Política de la República de Guatemala</p> <p>Acuerdo Gubernativo 260-2013 del Presidente de la República de Guatemala, (creación de Unidades de Género del Ejecutivo).</p> | <p>La constitución Política del la República de Guatemala, parte principalmente de los postulados de la Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí.</p> <p>Todos los Ministerios y Secretarías del Organismo Ejecutivo, deberán implementar dentro de su estructura organizativa, adscrita al Despacho Superior, una Unidad de Género, la cual deberá ser el órgano de coordinación y enlace técnico con el Gabinete Específico de la Mujer.</p> <p>La Política Ambiental de Género del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, busca propiciar la equidad e inclusión de mujeres y hombres que trabajan por la protección, conservación y mejoramiento de los bienes y servicios naturales, a través de incorporar más efectivamente el enfoque de género en las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos e instrumentos ambientales de este Ministerio.</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>fortalecer su respuesta, el Banco espera contribuir al cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el tema de esta Política. Asimismo, las acciones en cumplimiento de esta Política contribuirán a impulsar las prioridades institucionales y la misión del Banco de acelerar el proceso de desarrollo económico y social de sus países miembros regionales. La Política identifica dos líneas de acción: (i) la acción proactiva, que promueve activamente la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de todas las intervenciones de desarrollo del Banco; y (ii) la acción preventiva, que integra salvaguardas a fin de prevenir o mitigar los impactos negativos sobre mujeres u hombres por razones de género, como resultado de la acción del Banco a través de sus operaciones financieras.</p> | <p>Política de Equidad de Género en el Sector de la Gestión Ambiental y Plan de Acción 2003 - 2008.</p> | |
|--|---|--|--|

1.4 Recomendaciones para abordar deficiencias legales e institucionales relevantes al ESMF

Esta sub-sección presenta recomendaciones producto del análisis de las deficiencias legales e institucionales vinculadas a los potenciales impactos adversos derivados de la implementación de las Opciones de la Estrategia Nacional REDD+.⁴⁶ Considerando que el marco jurídico del país será utilizado para reducir, minimizar y mitigar los impactos adversos, consideramos importante considerar y abordar las siguientes recomendaciones vinculadas a deficiencias legales e institucionales.

Las recomendaciones se presentan conforme a las siguientes categorías temáticas:

- Reconocimiento y respeto de derechos de tenencia de la tierra
- Participación de actores relevantes en los programas y políticas relevantes
- Distribución justa de beneficios

Reconocimiento y respeto de derechos de tenencia de la tierra

1.4.1. Regularizar la “posesión”

Los “poseedores” son idóneos para participar en PINPEP, los “poseedores legales” pueden tener y negociar unidades de reducción de emisiones según lo estipula la LMCC, y el reglamento sobre manglares de 1998 es pertinente para los “poseedores legítimos”. La Ley del Registro de Información Catastral contempla una definición de poseedor. La diferencia entre estas formulaciones, de haberla, no queda muy clara.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET), concuerdan en que esta última entidad puede certificar la tenencia en las Reservas Territoriales del Estado como poseedores, aunque se desconoce si otros entes pueden hacer algo similar en el caso de las demás categorías de tierras. La posesión también parece ser la categoría de tenencia que mejor se aplica a otros contextos, pero no se menciona de forma específica. Por ejemplo, los integrantes de los asentamientos antiguos en las áreas protegidas, a los cuales se les impide inscribir las tierras para pasar a ser propietarios, podrían considerarse como “poseedores”. De forma similar, Probosque incluye algunas clases de beneficiarios comunales, pero no especifica el tipo de tenencia que deben tener. Todo parece indicar que serían poseedores. Por estas razones, convendría que todas las entidades correspondientes se reúnan y acuerden un enfoque común para la definición y el tratamiento que se da a la “posesión”. En este caso, se podrían adherir a la definición establecida en la Ley del Registro de Información Catastral en el artículo 23 inciso p) “Poseedor: Quien sin ser el propietario ejerce sobre un predio todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. No es poseedor el que posee en nombre o representación del propietario o quien disfruta del predio por actos puramente facultativos o de simple tolerancia

⁴⁶ Producto 9 Deficiencias legales e institucionales relevantes a la preparación del Marco de Gestión Social y Ambiental ; y Kuper, J. (2014). Guatemala Resource Tenure and Sustainable Landscapes Assessment. Washington, D.C.: USAID Tenure and Global Climate Change Program. (Evaluación sobre la tenencia de recursos y paisajes sostenibles en Guatemala. Washington, D.C.: Programa de USAID sobre tenencia y cambio climático mundial).

permitida por el propietario.

Entre otras cosas, las instituciones relacionadas con el tema agrario y ambiental deberían armonizar el concepto de posesión para que se pudieran solventar estas lagunas legales:

- Aclarar que la posesión significa que el poseedor carece de la inscripción de un título, no que la tierra no está inscrita;
- Clarificar que el CONAP como ente rector dentro de las áreas protegidas, tiene derecho a certificar la posesión en áreas protegidas;
- Acordar una terminología consensuada con respecto a la tenencia de tierra;
- Aclarar que el término “poseedor legal” equivale a lo mismo que “poseedor”, y
- Estar de acuerdo en los criterios de valoración de la prueba referentes a la posesión, y acordar si la entidad relevante reconoce o declara esa posesión.

1.4.2. INAB – Clarificar los criterios de tenencia para Probosque

La incorporación explícita de los beneficiarios comunales a Probosque representa una ampliación bien recibida de la elegibilidad en comparación con PINFOR. No obstante, el INAB podría considerar la posibilidad de clarificar el tipo de tenencia y la evidencia requerida que será aceptable para comprobarla. ¿Serán los “poseedores” comunales elegibles para Probosque? O bien, ¿de qué forma difiere la elegibilidad para Probosque de la “posesión” bajo la Ley del RIC?

1.4.3. RIC – Permitir a las autoridades comunitarias fijar el método de consulta para decidir el tipo de título

Al momento de aplicar el Reglamento de la Ley del RIC para la identificación y la declaración de una propiedad comunal, se recomienda que el RIC sólo debería constatar la existencia de la comunidad y la legitimidad de las autoridades comunitarias. El hecho de buscar opiniones individuales sobre si se debe realizar o no una titulación comunal podría considerarse como una violación al derecho de autogobierno de la comunidad y habría oposición al proceso de la titulación comunitaria.

1.4.4. MAGA, MARN, CONAP, RIC, SEGEPLAN y municipalidades – Priorizar las áreas con iniciativas tempranas de REDD+ y las regiones sub-nacionales de referencia para el RIC, los estudios de suelos y la planificación del uso de la tierra

La falta de un catastro actualizado dificulta la identificación de los titulares de derechos y aumenta la probabilidad de que surjan impactos adversos y conflictos sociales al momento de ejecutar las actividades REDD+. De igual forma, la falta de mapas detallados de los suelos dificulta la gestión proactiva de los asentamientos humanos y de la agricultura.

1.4.5. Fortalecer el INAB en el ámbito regional

Los incentivos forestales representan una importante carga administrativa para el INAB, especialmente el PINPEP, ya que está compuesto por un gran volumen de transacciones de bajo valor. Las asignaciones presupuestarias para gastos fijos del INAB se establecen con base en porcentajes de los fondos que administra, no con relación a la cantidad de proyectos individuales.

Esta carga es particularmente pesada en las oficinas regionales que administran un alto número de proyectos de PINPEP, por lo cual se recomienda fortalecer la capacidad institucional del INAB y su presupuesto en conformidad a la cantidad de proyectos que administra.

1.4.6. INAB– Establecer requisitos en los planes de gestión para identificar los derechos consuetudinarios y los sitios sagrados

Actualmente no existe ninguna garantía de que un propietario de bosques tomará en cuenta a los titulares de derechos consuetudinarios. El INAB podría considerar la posibilidad de incluir un requisito para obligar a todos quienes presentan planes de gestión forestal o que solicitan incentivos forestales a identificar y divulgar cualquier derecho consuetudinario sobre el bosque en cuestión. Esto podría ir acompañado de un acuerdo para que tales derechos no resulten afectados, o bien por un proceso que tendría que acatarse para obtener el consentimiento de los titulares de derechos.

1.4.7. CONAP – Armonizar los instrumentos correspondientes con relación a la zonificación dentro de áreas protegidas

El sistema actual para el ordenamiento territorial de las áreas protegidas es complejo y contradictorio. El CONAP podría intentar lograr una armonización entre la Ley de Áreas Protegidas, su reglamento, las políticas para los asentamientos humanos y las directrices para la elaboración de planes maestros en áreas protegidas, a fin de establecer la categorización más sencilla posible, la cual deberá a su vez aplicarse de forma universal. Con esto se deberá detallar claramente cuáles son las actividades y las categorías de tenencia que se tendrán en cada zona y cuál sería el proceso para la resolución de disputas.

Asimismo, recomienda que se haga disponible una amplia variedad de formatos que la población en general pueda comprender fácilmente (incluidas diversas versiones traducidas en idiomas indígenas, según sea pertinente), describiendo claramente los derechos que tienen y cuáles están condicionados a los acuerdos que se suscriban con el CONAP.

1.4.8. CONAP, FONTIERRAS – Abordar el tema de los asentamientos antiguos en las áreas de núcleo

En cuanto a la propiedad privada y como examinamos en la sección I, se observa en la Ley de Áreas Protegidas una contradicción fundamental, ya que por un lado el propietario mantiene plenamente sus derechos, sin importar la categoría del manejo, pero por otro debe gestionar su propiedad de acuerdo a las normas y regulaciones pertinentes. Ninguna de las políticas del CONAP aborda claramente cómo es que este ente intentará resolver tal contradicción. Por ejemplo, ¿qué sucede si al propietario no le interesa firmar un acuerdo de cooperación o insiste en permanecer en un área zonificada como núcleo?

El objetivo deberá ser otorgar la mayor certeza posible a los asentamientos antiguos en lo que se refiere a sus derechos y obligaciones. La incertidumbre jurídica actual es injusta y contraproducente, y genera poco interés entre los propietarios para ajustarse a los límites descritos en el plan maestro de cada una de las áreas protegidas. Adicionalmente, la distinción

actual entre los asentamientos antiguos que iniciaron sus trámites legales antes o después de la declaración de un área protegida parece tener poco fundamento jurídico.

Una recomendación a considerar sería reformar la ley de FONTIERRAS con el fin de permitir que los asentamientos antiguos puedan obtener un título inscrito. Las restricciones acordadas de uso podrían incluirse en el título como servidumbres a favor de la propiedad del Estado que se encuentre dentro de la zona núcleo.

Si los asentamientos antiguos no pueden obtener títulos inscritos, entonces el CONAP podría certificarlos como poseedores para permitirles solicitar incentivos para el manejo de bosques naturales (de protección o producción, según sea el caso). El INAB podría dar prioridad a esas áreas para otorgar los incentivos.

El Artículo 40 de la Constitución Política de la República de Guatemala permite la expropiación de la propiedad privada mediante una indemnización previa. El CONAP podría solicitar una opinión jurídica referente a la aplicación de esta cláusula, ya sea un trámite de oficio o que se utilice como sanción en casos de incumplimiento de las normas y los reglamentos del SIGAP, del Plan Maestro o de un acuerdo de cooperación.

1.4.9. CONAP – Establecer un proceso diferenciado de atención a las poblaciones indígenas

Actualmente, las comunidades indígenas que precedieron la declaración de áreas protegidas reciben el mismo trato que el de cualquier otro asentamiento antiguo. Sin embargo, el Artículo 67 de la Constitución sugiere que se deben tratar de forma diferente.

Se recomienda que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, con fundamento en la literal b) del Artículo 69 de la Ley de Áreas Protegidas, pueda emitir un normativo o reglamento que permita definir los pasos para atención a casos de comunidades que se encontraban asentadas previo a cualquier declaratoria de área protegida, en virtud que según al citado artículo, le corresponde aprobar los reglamentos y las normas de funcionamiento del Sistema Guatemalteco de Áreas protegidas. Además, se considera viable que el Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas establezca un proceso diferenciado de atención a las poblaciones indígenas y que dicho proceso sea elaborado y socializado con la participación de los representantes de dichas poblaciones indígenas.

1.4.10 Brindar el apoyo institucional necesario al RIC

Un gran número de comunidades indígenas no cuentan con seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, lo cual les permitirían defender sus derechos frente a terceros y ser elegibles para participar en los beneficios de REDD+.

La Ley del RIC establece la obligación de identificar y declarar las tierras en posesión o propiedad de comunidades indígenas. Asimismo, esta ley contiene disposiciones que reconocen como comunales aquellas tierras que tradicionalmente han estado bajo regímenes comunales, aunque estén registradas a nombre del Estado, de municipalidades o de personas individuales. Sin embargo, la conflictividad agraria que acompaña la desigual distribución de la tierra y la inseguridad jurídica sobre su tenencia, persisten en la actualidad. A ello se suman la falta de

reconocimiento en la legislación de los sistemas de tenencia y transmisión propios de los pueblos indígenas. Por lo mismo, estos en la mayoría de casos permanecen en la informalidad.

Se recomienda brindar apoyo institucional necesario al RIC para finalizar con el catastro nacional del territorio e identificar y declarar las tierras en posesión o propiedad de comunidades indígenas.

Participación de actores relevantes en los programas y políticas relevantes

1.4.11 Normativizar el proceso de consulta de acuerdo a los compromisos internacionales del país

Partiendo de que ya fue presentada una propuesta de reglamentar la Consulta a los pueblos indígenas basado en el Convenio 169 por parte del Ejecutivo al Congreso, es necesario que esta propuesta sea socializada a los pueblos indígenas y que no sea solamente una propuesta unilateral.

1.4.12 Institucionalizar el funcionamiento del GBBCC

A fin de que el GBBCC cumpla su doble función de servir como plataforma de diálogo sobre REDD+ y supervisar las labores de los grupos de trabajo, es necesario que se reúna con regularidad y que cuente con reglamentos internos y criterios de afiliación bien definidos.

1.4.13 Abordar deficiencias de la participación en el GBBCC

REDD+ supondrá la imposición de más restricciones a la extracción en los bosques y un mayor control en las áreas protegidas. Por consiguiente, este mecanismo no sólo incidirá en el amplio sector campesino, sino que la capacidad de REDD+ para lograr la reducción de emisiones dependerá en parte de tal sector. Por ello, se deberá exhortar a los grupos del movimiento campesino, tales como la CONIC y el CUC, a que participen en el GBBCC, especialmente ya que, en caso contrario, con el tiempo podría intensificarse el antagonismo que ya se manifiesta en torno a REDD+. También se debe invitar a la Red Nacional de Comunidades Organizadas Beneficiarias del PINPEP a participar en el GBBCC.

Hacer especial énfasis en el fortalecimiento de la participación indígena. Entre las posibles acciones a considerar se encuentran las siguientes:

- Hacer un esfuerzo gubernamental para identificar a las autoridades indígenas;
- Ofrecer apoyo a la Red Nacional de Autoridades y Organizaciones Indígenas en su intento por identificar y organizar a las autoridades indígenas tradicionales;
- Involucrar al Consejo de los Pueblos del Occidente (CPO) e invitarlo a participar en el GBBCC;
- Con base en la identificación de las autoridades tradicionales, trabajar con las organizaciones indígenas para establecer sistemas regionales de representación;
- Empezar a trabajar de forma participativa en la elaboración de la Ley Indígena que Guatemala está comprometida a promulgar según la Constitución de 1985; y

- Preparar materiales de información pública en idiomas indígenas, dando preponderancia a los grupos lingüísticos con mayor presencia en las regiones sub-nacionales priorizadas en la ER-PIN.

1.4.14 GBBCC, GCI, representantes comunitarios e indígenas, Comité de Salvaguardas – Desarrollar una estrategia para el CLPI

Recomienda especificar criterios bien definidos y justificados para distinguir entre las poblaciones a las que se les solicitará su consentimiento y aquellas a las que simplemente se consultarán o asegurara su participación plena y eficaz.

Esto puede lograrse mediante el desarrollo de una estrategia para la aplicación del CLPI en conformidad con el convenio 169 de la OIT, a través de una hoja de ruta con un cronograma claro. Esto deberá hacerse con la plena participación de los grupos comunitarios e indígenas, a fin de lograr un consenso en torno a los temas que deben estar sujetos a un consentimiento y por parte de quién.

Las directrices de ONU-REDD sobre el CLPI pueden ser una fuente útil sobre los pasos a seguir.

Distribución justa de beneficios

1.4.15 MARN, CNCC – Definir al poseedor legal

La LMCC se refiere al poseedor legal –un término que no se había utilizado, con anterioridad en la legislación guatemalteca sobre la tierra. Se deberá clarificar el significado de “poseedor legal” en el reglamento de la LMCC. La opción más sencilla sería explicar que significa lo mismo que “poseedor”, según lo define la Ley del RIC.

1.4.16 MARN, CNCC – Simplificar el vínculo entre la propiedad de la tierra y la propiedad de las unidades de reducción de emisiones

El Artículo 22 de la Ley Marco sobre el Cambio Climático (LMCC) norma los “proyectos para el mercado de carbono” y es el principal artículo que aborda la naturaleza de los derechos afines. Por su importancia para este análisis, a continuación, se cita en su totalidad el artículo en mención:

“Las actividades y proyectos que generen certificados de remociones o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, podrán tener acceso a los mercados voluntarios y regulados de carbono, así como a otros mecanismos bilaterales y multilaterales de compensación y pago por servicios ambientales.

Los derechos, tenencia y negociación de unidades de reducción de emisiones de carbono u otros gases de efecto invernadero, así como los certificados pertenecerán a los dueños titulares de los proyectos generadores a que se hace referencia en el párrafo anterior, los cuales para el efecto deberán inscribirse en el Registro que cree el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Podrán ser dueños titulares de proyectos las personas individuales o jurídicas y el Estado, que sean propietarios o poseedores legales de las tierras o bienes en que se realizan los proyectos.

En el plazo máximo de dieciocho (18) meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, tomando en cuenta las propuestas del Consejo Nacional de Cambio Climático creado por esta ley, deberá emitir la normativa necesaria para la creación y funcionamiento del Registro de Proyectos de Remoción o Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, para los procedimientos de divulgación, promoción, registro, validación, monitoreo y verificación de proyectos.”

La LMCC indica claramente que los beneficios se otorgan a los propietarios de proyectos y éstos a su vez deben ser propietarios o poseedores legales de la tierra. No obstante, una revisión minuciosa del Artículo 22 presenta las siguientes consideraciones:

- Parece condicionar la propiedad de las unidades de reducción de emisiones a que sean del propietario de un proyecto inscrito, y
- No hay certeza sobre cuál es la diferencia, de haberla, entre “el poseedor legal” de la tierra, según el Artículo 22, y el “poseedor”, según se utiliza en otra legislación.

Claramente, el Artículo 22 intenta establecer un vínculo entre la propiedad de la reducción de emisiones con la propiedad o la posesión de la tierra. No obstante, esto lo hace de una forma compleja, centrándose más bien en los proyectos: “derechos, tenencia y negociación de unidades de reducción de emisiones de carbono u otros gases de efecto invernadero, así como los certificados pertenecerán a los dueños titulares de los proyectos”, quienes, a su vez, deben ser propietarios o poseedores legales del área del proyecto. En otras palabras, solamente los propietarios de proyectos tienen un derecho claramente definido de poseer las unidades de reducción de emisiones. Parece que el hecho de ser propietario o poseedor legal de la tierra no es suficiente.

También, parece que este artículo se redactó con la idea de que los proyectos de REDD+ se presentan en propiedades individuales por parte del propietario de las tierras. Importante considerar que iniciativas tempranas, tal como REDD+ Caribe, se componen de diversas propiedades bajo titulares de derechos municipales, comunales, privados y estatales, en calidad de propietarios, poseedores y/o tenedores.

De acuerdo a lo planteado en el R-PP y el ER-PIN, Guatemala vislumbra la distribución de beneficios de REDD+ a través de las iniciativas tempranas y los incentivos forestales, y lo que considera el uso de las áreas sub-nacionales de referencia. El nivel de referencia nacional se está desarrollando progresivamente sobre la base de la elaboración de sub- niveles de referencia nacionales para las cinco regiones diferentes de REDD+. La propuesta actual del Programa de RE considerará todo el país en su área de contabilidad con las actividades diferenciales y tratamiento de las regiones REDD+.

Esto quiere decir que, según el Artículo 22, habrá que considerar la propiedad de las unidades de reducción de emisiones en tres diferentes tipos de áreas: (i) las áreas de las iniciativas tempranas; (ii) las áreas que reciben incentivos forestales; y (iii) las zonas restantes dentro de un área sub-nacional de referencia que no forman parte de una iniciativa temprana ni reciben incentivos forestales.

En lo que corresponde a las iniciativas tempranas, parece que esta cláusula puede interpretarse de dos maneras:

- Los propietarios de los proyectos deben ser los propietarios o poseedores legales del área total de éstos, en cuyo caso cada uno de los propietarios o poseedores legales de las tierras que conforman el área del proyecto de la iniciativa temprana también tendría que ser copropietario del proyecto, o;
- Los propietarios de proyectos deben ser propietarios o poseedores legales solamente de una parte del área del proyecto, en cuyo caso, el proyecto puede tener una menor cantidad de propietarios.

En cualquiera de los casos, surge la pregunta acerca de la forma en que los propietarios de proyectos pueden adquirir la propiedad de las unidades de reducción de emisiones provenientes del resto del área del proyecto de la cual no son propietarios o poseedores legales.

Con respecto a los incentivos forestales, parece que es necesario que cada uno de los participantes en el esquema de incentivos se reconozca como propietario de un proyecto inscrito. Es decir, tendría que ser bajo alguna de las situaciones siguientes:

- Que se trate a cada participante como copropietario de un solo proyecto inscrito, o bien;
- Que cada participante sea propietario de un proyecto inscrito por separado.

En lo que corresponde a la reducción de emisiones en las áreas restantes que no reciben incentivos forestales y que se encuentran fuera de las iniciativas tempranas (por ejemplo, como producto de un mayor control de la deforestación a nivel de los paisajes), el Artículo 22 parece presentar dos dificultades:

- Que los propietarios o los poseedores legales de tierras no serán propietarios de las unidades de reducción de emisiones, puesto que no serían los propietarios de proyectos inscritos, y
- Que las unidades de reducción podrían no existir puesto que esas áreas no formarían parte de un proyecto inscrito.

Estudios relevantes realizados antes de la promulgación de la LMCC⁴⁷, concluyen que, dentro del Código Civil, los servicios ambientales constituyen los “frutos naturales” de la tierra y por consiguiente pasan a ser del propietario o poseedor legítimo de la misma.⁴⁸

Sin embargo, el Artículo 22 de la LMCC establece el requisito de ser propietario del proyecto para ser propietario de las unidades de reducción de emisiones. Como se examinó, el lenguaje de este artículo presenta ciertas ambigüedades y dificultades que puede generar impactos adversos en términos de falta de reconocimiento a la titularidad de los derechos de carbono por parte de propietarios o poseedores legal de las tierras. Será necesario que el reglamento de la LMCC proporcione las clarificaciones pertinentes.

⁴⁷ Sobenes y Scofield (2010): Informe final de la consultoría sobre carbono forestal en la Reserva de la Biósfera Maya, elaborado para Rainforest Alliance en setiembre de 2010. Rainforest Alliance (2013): Análisis jurídico sobre las implicaciones de la LMCC en la R-PP de REDD+, elaborado para Rainforest Alliance en setiembre de 2013. Ideads (2013): Figura legal y mecanismo financiero para el proyecto GuateCarbón de REDD+, elaborado para Rainforest Alliance en octubre de 2013. Sobenes (2013) – Análisis del impacto de la LMCC, elaborado para Rainforest Alliance en octubre de 2013.

⁴⁸ Código Civil, indica que “el suelo, el subsuelo, los árboles y las plantas mientras estén unidos a la tierra, y los frutos no cosechados” son “bienes inmuebles” (Artículo 445) y que “el propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuanto se incorpora por accesión” (Artículo 471). A su vez, el Artículo 712 confirma esta interpretación, ya que supone que “el usufructo de una heredad se extiende a sus bosques y arboledas, pero el usufructuario debe conservarlos...”

Se recomienda que la propuesta de Reglamento LMCC esclarezca el hecho de que basta ser el propietario o poseedor legal de las tierras dentro del área de un proyecto inscrito. En caso contrario, se deberá clarificar cómo se vincula la propiedad de un proyecto con la propiedad/posesión de la tierra. Se recomienda considerar que el MARN debe buscar opiniones jurídicas sobre la forma en que puede establecer de forma más directa el vínculo entre la posesión/propiedad de la tierra y el derecho a ser propietario de la reducción de emisiones, sin contradecir la LMCC.

1.4.17 CNCC – Velar por que los titulares de derechos consuetudinarios/reivindicados participen en los beneficios de REDD+

La LMCC y los programas de incentivos forestales condicionan los beneficios de REDD+ al hecho de ser propietario o poseedor de la tierra, lo cual significa que probablemente los titulares de derechos consuetudinarios o reivindicados queden excluidos. Se recomienda definir y compensar estos derechos, no sólo desde una perspectiva de la equidad, sino también porque frecuentemente podrían llegar a menoscabar la reducción de emisiones si sus titulares no resultan beneficiados. Ellos podrían recibir los beneficios no financieros dentro de las iniciativas tempranas de REDD+. En el ámbito regional subnacional, existe la posibilidad de que se compensen mediante el uso de: (i) parte de la diferencia entre el valor de los incentivos forestales que se pagan y los ingresos por la venta de la reducción de emisiones; o (ii) los ingresos (de haberlos) por concepto de venta de las unidades de reducción de emisiones que surjan de las reducciones a nivel de los paisajes.

1.5. Medidas específicas para reducir, mitigar o contrarrestar los potenciales impactos ambientales y sociales adversos de la implementación de la Estrategia REDD+

Esta sub-sección presenta las medidas específicas para reducir, mitigar o contrarrestar los potenciales impactos adversos ambientales y sociales derivados de la implementación de la Estrategia Nacional REDD+, y que fueron identificados a través del SESA.

Considerando que el ESMF es un producto del SESA, se ruega notar que esta sección está organizada por Opción siguiendo la misma estructura y lógica empleada durante el SESA. A través del SESA y proceso de participación con partes relevantes, se identificaron y priorizaron los potenciales impactos a nivel de Opción (denotando el vínculo con las actividades y acciones REDD+ propuestas), y las potenciales medidas de mitigación fueron discutidos con las partes relevantes.

Por lo tanto, esta sub-sección se presenta en vinculación a cada una de las siete opciones estratégicas de la Estrategia Nacional REDD+ y en conformidad con el análisis ejecutado en el proceso SESA. La información se presenta en formato tabular, y se estructura de la siguiente manera:

- Columna 1: presenta los potenciales impactos ambientales y sociales adversos y priorizados durante el proceso SESA.⁴⁹
- Columna 2: identifica las Salvaguardas de Cancún relevantes a cada impacto;
- Columna 3: identifica las políticas operacionales del FCPF que se activan para cada impacto adverso;
- Columna 4: identifica el instrumento de gestión del impacto
- Columna 5: propone medidas para reducir, mitigar o contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos derivados de la implementación de las Opciones de la Estrategia REDD+ identificadas y priorizadas a través del SESA.⁵⁰

⁴⁹ Además de los impactos identificados y priorizados durante el proceso SESA, la Columna 1 incluye algunos impactos adversos para la igualdad de género añadidos durante la fase de retroalimentación del presente documento

⁵⁰ Estas medidas fueron complementadas y retroalimentadas con insumos de participantes en los seis talleres regionales ESMF.

Opción 1: Armonización del marco de políticas, planes e instrumentos, de sectores vinculados al uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la gestión forestal-ambiental

Vinculado (pero no limitado)⁵¹ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos.

Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques.

Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros.

| Impacto adverso priorizados | Salvaguarda Cancún relevante | Salvaguarda del Banco aplicable | Instrumento de gestión | Medidas para reducir, mitigar o contrarrestar impacto |
|--|---|---|--|--|
| 1. La armonización y priorización de políticas en respuesta a causas de la deforestación estructurales puede resultar incompatible con las políticas de uso de tierra (Catastro, RIC, FONTIERRAS, OCRET, conflictividad –SAA). A su vez esto podría resultar en incrementar la falta de certeza jurídica en la tenencia y propiedad de las tierras, lo que constituye un factor limitante para el desarrollo forestal, | <ul style="list-style-type: none"> - Salvaguarda A - Salvaguarda B - Salvaguarda D | <p>Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (PO703) del BID</p> <p>Principios 9a, 10, 12 y 14 de la Política Operacional de Bosques (4.36) del BM.</p> | Lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales (sección 1.7) | <ul style="list-style-type: none"> • Se sugiere procurar foros de participación para asegurar la coordinación con todos los sectores y actores relevantes en el proceso de armonización y priorización de políticas, asegurando la participación de todos los pueblos y de la mujer. • El GCI como ente coordinador podrá contribuir a asegurar la consistencia a nivel nacional en cuanto a la aplicación de enfoques y la coherencia de la armonización de políticas. • Apoyar técnicamente a través del fortalecimiento de capacidades a las dependencias encargadas de la implementación de la Estrategia Nacional REDD+, a fin de obtener una comprensión integral de cómo se enmarcan las políticas de uso de la tierra en la aplicación de la Estrategia Nacional REDD+. Asimismo, se sugiere que el proceso de armonización sea |

⁵¹ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

| | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|---|
| porque por un lado limita el acceso a las fuentes de financiamiento (PINPEP, etc.) y por otro crea incertidumbre a las inversiones privadas en actividades de largo plazo como la silvicultura. | | | | informado por la ejecución de estudios particulares sobre la compatibilidad de los cambios propuestos con los objetivos y alcance de las políticas existentes de uso de la tierra. |
| 2. La armonización y priorización de políticas en respuesta a causas de la deforestación estructurales puede resultar incompatible con las economías locales o con prácticas tradicionales. Puede tener impactos negativos en la salud, la vivienda, empleo, educación y alimentación, en particular para los más vulnerables (comunidades rurales, especialmente mujeres y niños) | Salvaguarda A Salvaguarda C | Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM | Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (sección 2.1) | <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación de instancias gubernamentales con la ALMG, Parlamento XINXA y pueblo garífuna a fin de que la perspectiva de los pueblos y los conocimientos ancestrales sean considerados durante el proceso de armonización y priorización de políticas. Asimismo, a fin de asegurar que información relevante sea transmitida adecuadamente. Coordinación de instancias gubernamentales con partes interesadas: actores locales, todos los pueblos y mujeres, para que la perspectiva de todos sea considerada durante el proceso de armonización y priorización de políticas. • Apoyar técnicamente a través del fortalecimiento de capacidades a las dependencias encargadas de la implementación de la Estrategia Nacional REDD+, a fin de obtener una comprensión integral de cómo este proceso de armonización debe considerar los derechos e intereses de todos los pueblos y comunidades locales. Esto puede acompañarse por una sensibilización forestal ambiental sobre los beneficios del bosque y en particular a los territorios. • Promover la armonización de políticas en el sentido de conservar los recursos naturales en equilibrio con la economía local, asegurando que los beneficios de las acciones REDD+ vayan a las familias en los territorios afectados. |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| <p>3. Cambios en la normativa vigente para la legalización de la tenencia de la tierra podría derivar en desplazamientos físicos o desalojos de comunidades locales y pueblos indígenas. Asimismo, la armonización de reformas de los regímenes de propiedad aumente la tensión e inseguridad por la tenencia de la tierra.</p> | <p>Salvaguarda A</p> <p>Salvaguarda C</p> | <p>Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID</p> <p>El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM</p> | <p>Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (sección 2.1)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Previo al proceso de armonización de políticas, establecer o implementar en colaboración con los representantes de los pueblos originarios, un proceso que garantice la protección efectiva de sus derechos de la tenencia y posesión de tierras que reconozca las tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de tierras de los pueblos originarios, considerando la opción de ordenamiento territorial. • Realizar diálogos locales para asegurar la participación de comunidades locales y pueblos indígenas en el proceso de armonización y priorización de políticas, considerando la opción de ordenamiento territorial, para asegurar que los cambios en la normativa no perjudiquen sus derechos de tenencia de la tierra. Es importante que los diálogos y la transmisión del conocimiento sea con personal capacitado con pertinencia local/cultural. • Apoyar técnicamente a través del fortalecimiento de capacidades a las dependencias encargadas de la implementación de la Estrategia Nacional REDD+, articulando el fortalecimiento de partes interesadas, a fin de obtener una comprensión integral sobre cómo la armonización de la normativa no debe resultar en desplazamientos (Capacitación sobre procesos de desalojo y respeto a los derechos (humanos e indígenas). • Tomar en consideración las deficiencias legales existentes en el proceso de armonización, en particular, aquellas que perjudican a los pueblos indígenas y comunidades locales. |
| | | <p>Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (PO703) del BID</p> <p>Los principios 15 y 4 la Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM.</p> | <p>Lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales (sección 1.7)</p> | |
| | | <p>Política de Reasentamiento Involuntario (710) del BID</p> <p>Los principios 2b, 6a, 6b y 10 de la Política Operacional de Reasentamiento</p> | <p>Marco para reasentamiento involuntario y/o restricción y pérdida de acceso a recursos naturales (sección 2.2)</p> | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|
| | | Involuntario (4.12) del BM) | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|

Opción 2: Fortalecimiento de las capacidades institucionales de vigilancia y protección forestal, operación de justicia y control de la tala ilegal

Vinculado (pero no limitado)⁵² a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros.

Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas.

| Impacto adverso priorizados | Salvaguarda Cancún aplicable | Salvaguarda del Banco aplicable | Instrumento de gestión | Medidas para reducir, mitigar o contrarrestar impacto |
|--|------------------------------|--|---|--|
| 1. Detrimento a la economía local debido a reforzamiento de medidas de protección y control forestal sobre actividades de tala ilegal, si no se ofrecen medios de vida alternativos para operadores artesanales o ilegales. Esto puede también crear migraciones campo-ciudad. | Salvaguarda C | Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM | Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (sección 2.1) | <ul style="list-style-type: none"> • Acompañar el reforzamiento de medidas de protección y control forestal sobre actividades de tala ilegal con proyectos productivos innovadores que ofrezcan alternativas de medios de vida para la economía de las comunidades. • Considerar generar opciones de actividades productivas que mejoren los ingresos de las familias, a corto, mediano y largo plazo. Mejorar los servicios básicos de las comunidades locales (educación, saneamiento, salud, asistencia legal). • Diseñar medias de protección y control forestal y de diversidad biológica que consideren medios de vida alternativos para operadores artesanales. Revisión del marco legal para mejorar la operación de justicia y su aplicabilidad. |
| | | Política de Reasentamiento Involuntario (710) del BID Los principios 2b, 6a, 6b y 10 de la Política Operacional de Reasentamiento | Marco para reasentamiento involuntario y/o restricción y pérdida de acceso a recursos naturales (sección 2.2) | |

⁵² Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|---|---|
| | | Involuntario del BM (4.12) | | <ul style="list-style-type: none"> • Considerar involucrar actores locales en medidas de protección y control forestal, por ejemplo, implementando brigadas de bomberos forestales a nivel comunitario, contratando personal a nivel local. Revisión del marco legal para mejorar la operación de justicia y su aplicabilidad. • Promover registros accesibles para las comunidades que deseen llevar a cabo actividades de producción a pequeña escala (flora no maderable), como una medida excepcional para incentivar otras actividades que permitan a las comunidades tener medios alternativos económicos; Esto ayudará a restar presión sobre los recursos maderables y la desincentivar actividades ilícitas con los productos de flor maderable. Las entidades gubernamentales deberán tomar en cuenta requisitos sencillos para dichas personas con la finalidad de incentivar sus actividades, sin dejar de lado los requisitos legales necesarios, aplicando en todo momento los principios que rigen el actuar de la administración pública, como lo son la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. |
| 2. Exclusión o limitada participación de actores relevantes locales, incluyendo mujeres, en actividades de vigilancia y protección forestal. | Salvaguarda C Salvaguarda D | Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos | Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (sección 2.1) | <ul style="list-style-type: none"> • Acompañar el reforzamiento de medidas de protección y control forestal con las organizaciones gubernamentales encargadas, así como impulsar la creación de acuerdos para manejo y control local (Convocatoria abierta para transparencia). |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>Indígenas (4.10) del BM</p> <p>Política sobre Igualdad de género en el Desarrollo (761) del BID</p> | | <ul style="list-style-type: none"> • Para reforzar medidas de protección y control forestal, formar y apoyarse en comités forestales comunitarios (o fortalecer los comités comunitarios ya desarrollados) coordinadamente con las autoridades locales. • Acompañar el reforzamiento de medidas de protección y control forestal con el fortalecimiento de organizaciones locales y creación de alianzas locales para actividades de protección forestal (entre instituciones públicas, autoridades locales, organizaciones comunitarias, iglesias y escuelas en actividades de educación, capacitación, vigilancia y control), a través de innovación tecnológica y herramientas técnicas. • Integrar "leñeros", aserraderos y troceros en organizaciones locales para vigilancia, control, capacitación y concientización. • A fin de evitar la exclusión de actores locales de actividades de vigilancia y protección forestal, acompañar el reforzamiento de estas medidas con capacitaciones y asistencia técnica a comunitarios para aumentar conocimiento sobre importancia de del bosque, de la biodiversidad y su protección. Toda actividad de capacitación debe tener pertinencia cultural y de género. |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--------------|---|---|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Promoción de acuerdos, convenios, cartas, u otros mecanismos de obligación conjunta y de coordinación, que permitan formar alianzas entre entidades gubernamentales y sociedad civil, así como asociaciones, para la búsqueda de exitosos mecanismos de control y vigilancia. |
| 3. Nuevo personal y tecnología podría reemplazar las formas tradicionales de actuar o transmitir conocimiento monitoreo de amenazas. | Salvuardas C | <p>Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID</p> <p>El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM</p> | Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (Sección 2.1) | <ul style="list-style-type: none"> • Durante el reforzamiento de medidas de protección y control forestal, fortalecer capacidades técnicas, manejo de equipo y procesos de denuncia en concordancia con las formas y prácticas tradicionales de comunidades en el control y vigilancia de tala, incendios, manejo, transporte, etc. • Fortalecer también las capacidades de las instituciones relacionadas con vigilancia y protección forestal, operación de justicia y control de la tala ilegal (CONAP, INAB, MP, juzgados, ONGs, etc.) e implementar programas educativos sobre los conocimientos y prácticas tradicionales. La innovación tecnológica y herramientas técnicas complementará y fortalecerá las prácticas y conocimientos tradicionales. • En esfuerzos de reforzamiento de medidas de protección y control forestal, profesionalizar al personal de la institución encargada del control forestal (en concordancia con los comités forestales comunitarios) DIPRONA, DMM, OFM, MARN, en temas de tala, manejo del fuego, transporte, planes de manejo, uso de leña, legislación y ambiental normativa. |

| | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Promover la estabilidad laboral del personal de las instituciones relacionadas con vigilancia y protección forestal, operación de justicia y control de la tala ilegal. • Asegurar durante el reforzamiento de medidas de protección y control forestal la inclusión de las comunidades locales (con enfoque de género), en vigilancia y control forestal. Incluir OMM y lideresas en prevención, vigilancia y control por su relación con leña. • Protocolos interinstitucionales que permitan tener una coordinación rápida, eficiente e inmediata; dichos protocolos deben estar combinados con tecnología que permita tener una respuesta inmediata ante una amenaza latente. Además, los protocolos pueden contemplar estados de alarma que permitan filtrar los procedimientos para la no duplicidad de esfuerzos gubernamentales. |
| 4. Desplazamiento o fugas de emisiones a otras áreas o regiones con menos vigilancia y control; | Salvaguardas F y G, que tienen por objetivo evitar el desplazamiento y reversión de emisiones | OP-703, Directiva B9 | | <ul style="list-style-type: none"> • Identificar y fortalecer las medidas de vigilancia y control que han sido efectivas en la protección forestal y que sean legitimadas, replicadas y promovidas en todos los territorios relevantes, evitando regiones o áreas con una menor aplicación. • Durante el reforzamiento de medidas de protección y control forestal, considerar asegurar que las medidas de vigilancia y control sean aplicadas, evitando regiones o áreas con una menor aplicación, apoyándose de los grupos locales, medidas de tala, |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | | | <p>comercio de leña, transporte etc., basado en la normativa ambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promover el desarrollo de medidas de vigilancia y control con innovación tecnológica • Identificar y fortalecer las medidas de vigilancia y control que han sido efectivas en la protección forestal y legitimarlos, replicarlas y promoverlas a nivel nacional, evitando regiones o áreas con una menor aplicación. • Desarrollo de campañas de sensibilización ambiental |
| 5. Promoción de la destrucción de bosques por imposición de medidas de vigilancia y control, y temor a desalojos | <p>Salvaguarda E, que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad.</p> <p>Salvaguarda C</p> | <p>Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (PO703) del BID</p> <p>Los principios 15 y 4 la Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM.</p> <p>Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID</p> <p>El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos</p> | <p>Lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales (sección 1.7)</p> <p>Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (Sección 2.1)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Durante el reforzamiento de medidas de protección y control forestal, diseñar medidas de protección y control forestal que consideren medio de vida alternativos para operadores artesanales, a fin de evitar destrucción a los bosques, debido al temor a desalojos y pérdida de ingreso económico. • Durante el reforzamiento de medidas de protección y control forestal, desarrollar capacitaciones en aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, marcos normativos y sanciones. • Promover la aplicación efectiva de la ley en la tala ilegal y destrucción de los bosques • Asegurar que los programas de capacitación sean dirigidos tanto a comunidades locales como a operadores de justicia. |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|
| | | Indígenas (4.10) del BM | | |
|--|--|----------------------------|--|--|

Opción 3: Promoción y Fortalecimiento del Ordenamiento Territorial en Guatemala

Vinculado (pero no limitado)⁵³ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos.

Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques.

Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros

| Impacto adverso priorizados | Salvaguarda Cancún relevante | Salvaguarda del Banco aplicable | Instrumento de gestión | Medidas para reducir, mitigar o contrarrestar impacto |
|--|-------------------------------------|---|---|--|
| 1. Situaciones de reasentamiento y desalojo y/o limitaciones sobre el acceso y uso de tierras y recursos para Pis, mujeres y comunidades locales. La falta de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra puede propiciar situaciones de desalojo de comunidades indígenas y no indígenas que no cuentan con un título registrado en áreas protegidas (solo su derecho consuetudinario). | Salvaguarda C Salvaguarda E | Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM Los principios 15 y 4 la Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM. Política de Medio Ambiente y | Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (sección 2.1) Lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales (sección 1.7) | <ul style="list-style-type: none"> Junto con promover y fortalecer el ordenamiento territorial, es importante abordar deficiencias legales concernientes a la falta de certeza jurídica y protección de los derechos de tenencia de la tierra de pueblos indígenas, comunidades locales. Con especial enfoque en los derechos que garanticen la igualdad de género. Facilitar la información pertinente acerca del registro y formas de acceso a las tierras. Se sugiere que FONTIERRA actualice expedientes con base de datos en línea Fortalecer la coordinación interinstitucional entre el CONAP y FONTIERRA, a manera de coordinar y atender las problemáticas que se dan en cuanto a la tenencia de tierras dentro de áreas protegidas. Se hace necesario impulsar una estrategia conjunta entre ambas instituciones, con la finalidad de |

⁵³ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

| | | | | |
|--|---------------|---|---|--|
| | | <p>Cumplimiento de Salvaguardas (PO703) del BID</p> <p>Política sobre Igualdad de género en el Desarrollo (761) del BID</p> | | <p>atender las problemáticas sociales identificadas, las cuales se consideren relevantes por el incremento de sus casos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delegar responsabilidad a las instituciones nacionales públicas (RIC, FONTIERRA, SAA, RGP) para que den soluciones claras e inmediatas. |
| 2. Falta de alternativas de subsistencia y pérdida de recursos económicos para comunidades locales y pueblos indígenas debido a cambios en la planificación territorial incompatibles con su economía local y prácticas ancestrales. | Salvaguarda C | <p>Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID</p> <p>El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM</p> | Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (sección 2.1) | <ul style="list-style-type: none"> • Durante el fortalecimiento del ordenamiento territorial, implementar campaña de sensibilización y socialización acompañada de diálogo, negociación y alternativas con pertinencia cultural y enfoque de género para diferenciar ordenamiento y expulsión territorial. Mesas de diálogo con dirigentes CUC, CONIC, organizaciones campesinas, para sensibilizar sobre el ordenamiento territorial • Acompañar el fortalecimiento del ordenamiento territorial con formación mediada, con pertinencia cultural y enfoque de género a instituciones de gobierno, líderes y comunidades en ordenamiento y expulsión territorial. • Asistencia técnica y financiera a comunitarios desplazados y no desplazados para actividades productivas. Implementación de sistemas agroforestales (bosque + cultivos anuales) |

| | | | | |
|--|---------------|---|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Asegurar una planificación participativa e implementación del ordenamiento territorial de con pertinencia cultural y enfoque de género. • Promover acuerdos de permanencia ente CONAP, comunidades y asentamientos humanos, con la visión de alcanzar la certeza jurídica de la tierra y obligaciones equitativamente. • Áreas comunales específicas para el establecimiento de cultivos anuales (maíz, frijol etc.), respetando tierras que han permanecido. |
| 3. Limitaciones y/o exclusión de productores y sectores económicos locales, grupos vulnerables y mujeres durante la planeación estratégica territorial, su implementación y seguimiento. Esto puede crear incompreensión, tensiones y conflicto. | Salvaguarda D | <p>Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID</p> <p>El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM</p> <p>Política sobre Igualdad de género en el Desarrollo (761) del BID</p> | Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (sección 2.1) | <ul style="list-style-type: none"> • En el proceso de fortalecimiento del ordenamiento territorial, crear e implementar un proceso metodológico con participación plena y efectiva de hombres, mujeres y pueblos indígenas. Apoyar a participantes rurales y excluidos financieramente y técnicamente para que puedan participar en planeación de ordenamiento territorial. • Normar cuotas de participación ciudadana (30% mujeres, 30% Pueblos indígenas), e irlas incrementando gradualmente. Empoderar a la mujer para que participe plenamente • Acciones afirmativas para empoderamiento de la mujer en tenencia de la tierra ordenamiento territorial. |
| 4. Falta de reconocimiento de los derechos colectivos e individuales sobre la tierra | Salvaguarda C | Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID | Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (sección 2.1) | <ul style="list-style-type: none"> • Es importante que durante el proceso de cambios al ordenamiento territorial se asegure que el proceso de adjudicación de los derechos de los pueblos indígenas |

| | | | | |
|---|---------------|---|---|--|
| de los Pls sobre los territorios y recursos naturales sujeto a los cambios en el ordenamiento territorial. Esto puede afectar el esquema cultural de los pueblos indígenas del manejo del bosque y agricultura. | | El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM | | <p>concernientes a sus tierras, territorios y recursos garantice la protección efectiva de sus derechos de tenencia y posesión, con debido reconocimiento debido de las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de tierras de los pueblos indígenas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RIC, FONTIERRAS, deben normar el reconocimiento de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, de acuerdo a las estructuras culturales de pueblos indígenas y comunidades locales. • Promover en las municipalidades, donde hay ejidos municipales, CONAP en áreas protegidas en zona núcleo, la estructuración e implementación del ordenamiento territorial (presupuesto, oficinas, personal etc.), con respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Respeto a los procesos de consulta comunitaria en el tema de ordenamiento territorial. |
| <p>5. Desplazamiento interno de las poblaciones más vulnerables (inmigración) por falta de alternativa de sobrevivencia humana, lo cual puede causar un desplazamiento de emisiones.</p> <p>5.1 Generar polarización social</p> | Salvaguarda C | <p>Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID</p> <p>El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM</p> | Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (sección 2.1) | <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de fortalecimiento territorial deberá considerar el pago de incentivos de manera permanente, creado en ley, los derechos e intereses de las comunidades locales y pueblos indígenas dependientes de los bosques, a fin de que las actividades y acciones no resulten en impactos adversos en sus derechos e intereses. |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| 5.2 Violación a derechos humanos | | <p>Política de Reasentamiento Involuntario (710) del BID</p> <p>principios 2b, 6a, 6b y 10 de la Política Operacional de Reasentamiento Involuntario (4.12) del BM</p> | <p>Marco para reasentamiento involuntario y/o restricción y pérdida de acceso a recursos naturales (sección 2.2)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se hagan cambios al ordenamiento territorial es importante implementar nuevas alternativas productivas para mejorar la economía local (apriscos, verduras etc.) para evitar desplazamientos de poblaciones vulnerables. Por ejemplo, fortalecer las capacidades de los agricultores en el manejo integrado (frutales, bosque, cultivos agrícolas) de sus fincas, sobre la rentabilidad del bosque (plantas medicinales, agua, endemismo, servicios ambientales), en la comercialización de sus cultivos y en el manejo y la protección ambiental (bosques, agua, manejo de basura, flora, fauna). • Acompañamiento institucional en el proceso productivo de los bosques |
|----------------------------------|--|--|--|--|

Opción 4: Fortalecimiento de los programas existentes y creación de nuevos mecanismos de incentivos para actividades (económicas y no económicas) de conservación, protección y manejo de los bosques, sistemas agroforestales y producción forestal energética

- Vinculado (pero no limitado) ⁵⁴ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:
- Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos.
 - Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.
 - Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas.
 - Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.
 - Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques.
 - Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros

| Impacto priorizados | adverso | Salvaguarda Cancún relevante | Salvaguarda del Banco aplicable | Instrumento de gestión | Medidas para reducir, mitigar o contrarrestar impacto |
|------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|
|------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|

⁵⁴ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| <p>1. Limitación/exclusión de ciertos titulares de derechos para acceder a incentivos y mecanismos financieros, si deficiencias existentes no son abordados exitosamente⁵⁵. Asimismo, puede ser que no se incentivan a todas las personas u organizaciones que protegen el bosque natural, incluidas las mujeres, lo cual podría generar descontento y conflictos (inequidad).</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Salvaguarda C - Salvaguarda D | <p>Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID</p> <p>El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM</p> <p>Política sobre Igualdad de género en el Desarrollo (761) del BID</p> | <p>Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (sección 2.1)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse que los procesos de fortalecimiento de los programas existentes y creación de nuevos, sean incluyentes y se hagan esfuerzos en asegurar que todos los actores relevantes participen en dichos procesos de fortalecimiento. Se debe incentivar la participación de las mujeres y grupos vulnerables. • Asegurarse que el MIAQ tenga competencia y pueda lidiar con conflictos sociales que puedan surgir en vinculación al acceso y distribución de beneficios que puedan surgir del proceso de fortalecimiento o creación de programas de incentivos. • Garantizar que los procesos de fortalecimiento de los programas de incentivos existentes y |
|---|--|---|--|---|

⁵⁵ Potenciales problemas para acceder al PINPEP: los poseedores de propiedades registradas son inelegibles, un problema particularmente para aquellos poseedores de tierras municipales registradas y los poseedores de tierras que llevan muchos (con frecuencia cientos) de años registradas, pero que nunca fueron ocupadas por el propietario inscrito. Potenciales problemas para acceder al PROBOSQUE: no vincula explícitamente la elegibilidad a una categoría de tenencia y al leerse junto con las exclusiones es difícil determinar qué comunidades, que no habrían sido elegibles para participar en PINPEP, sí se beneficiarían bajo estos criterios.

| | | | | |
|--|-----------------|---|--|---|
| | | <p>Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (PO703) del BID</p> <p>los principios 15 y 4 la Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM.</p> | <p>Lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales (sección 1.7</p> | <p>creación de nuevos contemplen condiciones mínimas que los derechos de titulación y otros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse que los procesos de fortalecimiento de los programas de incentivos existentes y creación de nuevos aborden falencias históricas (titulación de propiedad, sostenibilidad de proyectos, falta de presupuesto, etc), en particular, garantizar que todos los actores interesados puedan acceder a dichos incentivos. • Brindar asistencia institucional para acceder a programas de incentivos durante los procesos de fortalecimiento de los programas existentes y creación de nuevos contemplen. Brindar asistencia Jurídica para agilizar y viabilizar los procesos. • Asegurarse que durante los procesos de fortalecimiento de los programas existentes y creación de nuevos se consideren incrementar y fortalecer el personal técnico (organización, capacitación y asistencia técnica) y capacidades institucionales (aportando equipo e infraestructura). • Regularizar el procedimiento para certificaciones municipales a nivel nacional. |
| 2. El aumento del número de incentivos podría crear condiciones de corrupción. | - Salvaguarda B | Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM | Lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales (sección 1.7) | <ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse que los procesos de fortalecimiento de los programas de incentivos existentes y creación de nuevos, integren mecanismos de rendición de cuentas en el manejo de los |

| | | | | |
|---|-----------------|---|---|---|
| | | los principios 15 y 4 la Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM. | | <p>programas y mecanismos de incentivo. Establecer códigos de conducta para prevenir los conflictos de intereses, y mecanismos para el cumplimiento de dichos códigos. Esto incluye la publicación de los activos de los funcionarios y la difusión de los procesos de contratación pública (asegurar que las personas a cargo de certificar incentivos sean funcionarios o la existencia de medidas de control en caso de ser externos).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la auditoría de proyectos en campo. • Promover y mejorar las capacidades de los beneficiarios sobre los derechos y obligaciones de los incentivos y lo que puedan exigir. • Promover y reforzar los mecanismos existentes para prevenir, detectar, penalizar y erradicar la corrupción y delitos conexos en las esferas de la operación del MARN, INAB, CONAP y MAGA públicas y privadas. Esto incluye crear, mantener y fortalecer las autoridades que estarán encargadas de afrontar la corrupción en el marco de la implementación de REDD+. |
| 3. Reforzamiento/resurgimiento de conflictos sociales asociados a estructuras de gobernanza internas débiles y/o no transparentes respecto del acceso a beneficios de los incentivos. | - Salvaguarda B | <p>Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID</p> <p>El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM</p> | Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (sección 2.1) | <ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse que los procesos de fortalecimiento de los programas existentes y creación de nuevos, integren mecanismos que promuevan la distribución justa y transparente de los beneficios. • Asegurarse que el MIAQ tenga competencia y pueda lidiar con conflictos sociales que puedan surgir en vinculación al acceso y distribución de beneficios que puedan surgir del proceso de fortalecimiento o creación de programas de incentivos. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Durante el proceso de fortalecimiento o creación de nuevos programas de incentivos, implementar en colaboración con los pueblos indígenas interesados (Inclusión y empoderamiento de líderes comunitarios, a través de capacitación), un proceso de adjudicación de los derechos de los pueblos indígenas concernientes a sus tierras, territorios y recursos, en las regiones REDD+, y que garantice la protección efectiva de sus derechos de tenencia y posesión, y por tanto elegibilidad para acceder a incentivos. Se recomienda fortalecer la aplicación de la Ley del RIC, con miras que los pueblos indígenas en territorios REDD+ no permanezcan en la informalidad. El proceso debe garantizar el reconocimiento debido de las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de tierras de los pueblos indígenas. Se deberán tomar en consideración que las siguientes formas de tenencia indígenas colectivas que aún tienen problemas de regularización por la inexistencia de leyes sobre la materia: <ul style="list-style-type: none"> - Tierras comunales y ejidales (formalmente protegidas por los artículos 66, 67 y 70 de la Constitución y el Convenio 196 de la OIT). - Tierras municipales (consisten en tierras públicas que pertenecen a las municipalidades y que tienen títulos coloniales que no han sido formalmente inscritos, y que muchas veces están en conflicto con las tierras comunales indígenas). |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Tierras asignadas a la población desarraigada, especialmente en El Petén y la Franja Transversal del Norte. - Promover ordenamiento territorial y catastro en áreas de conservación y restauración. |
| 4. Incremento de riesgo de apropiación de tierras y conversión bosques naturales para plantaciones, y reducción de cobertura boscosa natural vs monocultivos | <ul style="list-style-type: none"> - Salvaguarda A - Salvaguarda E | <p>Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (PO703) del BID</p> <p>Los principios 15 y 4 la Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM.</p> | Lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales (sección 1.7) | <ul style="list-style-type: none"> • Asegurar que el diseño de mecanismos e incentivos prohíban la conversión de bosques naturales por plantaciones o monocultivos. • Los procesos de fortalecimiento de los programas existentes y creación de nuevos deben considerar fomentar la conservación de la diversidad biológica y los bosques naturales. • Implementación de mecanismos de control para conservar bosques y limitar la expansión de la frontera agrícola, con el apoyo comunitario (monitoreo y control comunitario). • Fortalecimiento institucional en los temas de catastro y legalización de tierras. • En la creación de nuevos incentivos se consideren PSA y se reinvierta en el área (y biodiversidad). • Elaborar una estrategia nacional conjunta (MARN, MAGA, CONAP e INAB), relativa a los temas álgidos de monocultivos a gran escala, con miras a manejar un desarrollo económico sostenible y amigable con el medio ambiente. |
| | | Los principios 9a, 10, 12 y 14 de la Política Operacional de Bosques (4.36) del BM. | | |

| | | | | |
|---|-----------------|--|--|---|
| 5. Sobre-demanda de incentivos en área no priorizada o inadecuada priorización geográfica en la de incentivos, que ignoren las causas y focos de deforestación. | - Salvaguarda E | Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (PO703) del BID Los principios 15 y 4 la Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM. | Lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales (sección 1.7) | <ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda la ejecución de un estudio y priorización geográfica de dichas causas y focos de deforestación y degradación como parte del proceso de fortalecimiento de los programas existentes y creación de nuevos, conforme a la política de medio ambiente. • El diseño de los mecanismos e incentivos deben considerar una adecuada priorización geográfica de acuerdo a las causas y focos de deforestación y degradación. • Se sugiere acompañar la creación de nuevos incentivos con programas de educación y reforestación con pertinencia geográfica. Trabajar las tres modalidades: protección, plantación y agroforestería. • Se sugiere fortalecer el monitoreo de cobertura boscosa a nivel nacional y regional, además del fortalecimiento de la gobernanza de bosques en distintos niveles: Articulación de Sistemas de Información georreferenciada entre los diferentes niveles de gobierno; Generación y distribución de información de monitoreo de cambios en la cobertura de bosques; Desarrollo de capacidades técnicas y equipamiento para el monitoreo en diferentes niveles, etc. • Se recomienda considerar el pago por servicios ambientales, ecoturismo, etc. |
| | | Los principios 9a, 10, 12 y 14 de la Política Operacional de Bosques (4.36) del BM. | | |

Opción 5: Desarrollo del marco regulatorio y la institucionalidad relacionada con el reconocimiento económico de los bienes y servicios ambientales, incluyendo el carbono forestal

Vinculado (pero no limitado)⁵⁶ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques.

| Impacto adverso priorizados | Salvaguarda Cancún relevante | Salvaguarda del Banco aplicable | Instrumento de gestión | Medidas para reducir, mitigar o contrarrestar impacto |
|--|-------------------------------------|--|--|---|
| 1. Detrimento a la economía local asociados a la falta de reconocimiento a la titularidad de los derechos de carbono, en particular, para Pls y comunidades locales. | Salvaguarda C Salvaguarda D | Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM | Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (sección 2.1)) | <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar un proceso del desarrollo dentro del marco regulatorio relativo a la titularidad de los derechos sobre el carbono y el fortalecimiento institucional que considere el adecuado involucramiento de los pueblos indígenas y comunidades locales interesadas en REDD+. |
| 2. Falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades, y mujeres en | Salvaguarda C Salvaguarda D | Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM | Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (sección 2.1) | <ul style="list-style-type: none"> Velar por que los titulares de derechos consuetudinarios/reivindicados participen en los beneficios de REDD+, asegurándose de esclarecerlo en el reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático y en |

⁵⁶ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| particular, en cuanto a los derechos de tenencia y uso de la tierra y recursos naturales y los derechos al carbono forestal reducido en modelo concesionario y bosques comunales | | Política sobre Igualdad de género en el Desarrollo (761) del BID | | <p>otras leyes y políticas relevantes. La LMCC y los programas de incentivos forestales condicionan los beneficios de REDD+ al hecho de ser propietario o poseedor de la tierra, lo cual significa que probablemente los titulares de derechos consuetudinarios o reivindicados queden excluidos, o en el caso de las mujeres que no se reconocen sus derechos. Se recomienda definir y compensar estos derechos, no sólo desde una perspectiva de la equidad, sino también porque frecuentemente podrían llegar a menoscabar la reducción de emisiones si sus titulares no resultan beneficiados. Ellos podrían recibir los beneficios no financieros dentro de las iniciativas tempranas de REDD+. En el ámbito regional sub-nacional, existe la posibilidad de que se compensen mediante el uso de:</p> <p>(i) parte de la diferencia entre el valor de los incentivos forestales que se pagan y los ingresos por la venta de la reducción de emisiones; o (ii) los ingresos (de haberlos) por concepto de venta de las unidades de reducción de emisiones que surjan de las reducciones a nivel de los paisajes.</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--------------|--|--|---|
| 3. Riesgos de acciones de reversión debido a la falta de reconocimiento a la titularidad de los derechos de carbono. | Salvuardas F | Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvuardas (PO703) del BID Los principios 15 y 4 la Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM. | Lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales (sección 1.7) | <ul style="list-style-type: none"> Reconocer y normar los derechos de carbono en conformidad con el reconocimiento de los derechos estatutarios y consuetudinarios de tenencia de la tierra. y contratos realizados entre el Estado y grupos organizados respecto a tenencia y uso de la tierra, recursos naturales y carbono forestal. Crear compromisos en aquellas instituciones involucradas en los temas de reconocimiento d en los derechos consuetudinarios y tenencia de la tierra, para velar o dar seguimiento a la estrategia REDD+ y evitar la reversión. |
| | | Política Operacional Bosques (4.36) del BM | | |
| 4. Inadecuado reconocimiento y valorización económica de los bienes y servicios ambientales asociados a los bosques. | Salvuarda E | Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvuardas (PO703) del BID Los principios 15 y 4 la Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM. | Lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales (sección 1.7) | <ul style="list-style-type: none"> Normar los derechos sobre los beneficios de los servicios ambientales (incluye carbono) con base en análisis de valoración económica de los mismos, que sirva de insumo para el financiamiento de los incentivos ambientales. Promover la investigación científica en bosques, a fin de obtener nuevos conocimientos y experiencias, para una mayor valoración económica de bienes y servicios ambientales. Promover divulgación, sensibilización, intercambio de conocimientos |
| | | Los principios 9a, 10, 12 y 14 de la Política Operacional de Bosques (4.36) del BM. | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>relacionados al valor de bienes y servicios asociados al bosque.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promover que las instituciones responsables de la ciencia y tecnología, sean proactivas en éstos temas (SENACYT, IARNA, DIGI etc.) en relación a promover y divulgar resultados de investigaciones relativas al bosque, valorización económica de bienes y servicios ambientales asociados. |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|----------------------|---|--|---|
| <p>5. Limitaciones para la participación ciudadana durante el proceso de reconocimiento legal de los servicios ambientales asociados a los bosques</p> | <p>Salvaguarda D</p> | <p>Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID</p> <p>El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM</p> <p>Política sobre Igualdad de género en el Desarrollo (761) del BID</p> | <p>Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (sección 2.1)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • El proceso de desarrollo del marco regulatorio deberá involucrar a todos los actores relevantes, debe considerar las particularidades y condiciones de cada territorio, con equidad de género • Crear, fortalecer y actualizar programas de educación forestal y ambiental a nivel rural sobre servicios ambientales asociados a los bosques • Priorizar el desarrollo de los marcos regulatorios sobre los servicios ambientales, por parte de la gobernanza actual sobre cambio climático |
|--|----------------------|---|--|---|

Opción 6: Fomento de actividades productivas y medios de vida compatibles con la conservación y manejo sostenible de los bosques y paisajes agroforestales

Vinculado (pero no limitado)⁵⁷ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques.

| Impacto adverso priorizados | Salvaguarda Cancún relevante | Salvaguarda del Banco aplicable | Instrumento de gestión | Medidas para reducir, mitigar o contrarrestar impacto |
|---|------------------------------------|--|---|--|
| 1. Limitaciones para la participación efectiva o incidencia de actores claves, en particular, pueblos indígenas y comunidades locales en la definición y priorización de actividades productivas, de conservación y uso sostenible de los recursos; | Salvaguarda C Salvaguarda D | Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM Política sobre Igualdad de género en el Desarrollo (761) del BID | Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (sección 2.1) | <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades de los pueblos indígenas reconociendo sus conocimientos locales sobre la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques, a fin de que puedan participar en la priorización de actividades productivas, de conservación y uso sostenible de los recursos. Proporcionar apoyo institucional y financiar el rol de actores claves en la priorización de actividades productivas, de conservación y uso sostenible de |

⁵⁷ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>los recursos naturales por medio de programas educativos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento de las estructuras del estado: a través de Extensión rural oficinas forestales municipales. Fiscalías de delitos ambientales basado en estructura local y social de la región. Fortalecimiento y capacitación a las instituciones y organizaciones locales en innovaciones de mercado, desarrollo de productos, cadena de negocios, en el potencial productivo local • Asistencia técnica por medio (ONGs, Asociaciones o grupo locales etc.) y buen sistema de control y monitoreo. • Empoderamiento de los procesos de los medios de vida compatibles con la conservación y manejo sostenible de los bosques y paisajes agroforestales. • Revisión de procedimiento y tiempos para la resolución de |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | | | | actividades y acciones del GCI que permitan la participación e implementación efectiva. |
| 2. Conflictividad social por la resistencia al cambio (Grupos productivos). | Salvaguarda B Salvaguarda C Salvaguarda D | Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM | Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (sección 2.1) | <ul style="list-style-type: none"> • Proporcionar acceso al MIAQ en idioma pertinente, informando los beneficios a obtener. • Fomentar acuerdos en toda la comunidad para establecer si es necesario realizar un cambio, para mantener armonía, con la facilitación de las organizaciones por medio de intercambio de experiencias. • Fortalecimiento del diálogo entre comunitarios. • Reglamentación y normativa clara y eficiente, para las actividades productivas propuestas, respetando la organización local y social • Políticas públicas armonizadas con las tradiciones y costumbres locales |

| | | | | |
|---|---------------|---|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo y participación en ferias demostrativas de nuevos productos locales, en relación al fomento de actividades y búsqueda de otros mercados. |
| 3. Falta de equilibrio entre actividades productivas y de medios de vida tradicionales, que afecten las economías locales y prioricen a los sectores productivos. | Salvaguarda C | <p>Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID</p> <p>El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM</p> | Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (sección 2.1) | <ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse que el proceso de armonización de la ley y el diseño de mecanismos e incentivos forestales tome en consideración las economías locales y los medios de vida tradicionales. • Asegurar la inclusión de actores relevantes en la priorización de actividades productivas, de conservación y uso sostenible de los recursos, con equidad de género y participación efectiva. • Capacitación técnica en planes de negocios (administración) a grupos comunitarios y mujeres de acuerdo a sus prioridades. • Mejorar y fortalecer capacidades técnicas del personal institucional |

| | | | | |
|--|---------------|--|--|---|
| | | | | <p>(MAGA, MARN, CONAP, INAB) para dar asistencia técnica a comunidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generar proyectos agroforestales dirigidos a mujeres y comunidades indígenas que permitan y fomenten la economía familiar, la armonía y conservación del bosque. |
| <p>4. Fomento de actividades productivas puede causar alteración del ecosistema y daño a ciertas especies forestales de interés comercial.</p> | Salvaguarda E | <p>Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (PO703) del BID</p> <p>Los principios 15 y 4 la Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM.</p> <p>Los principios 9a, 10, 12 y 14 de la Política Operacional de Bosques (4.36) del BM.</p> | Lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales (sección 1.7) | <ul style="list-style-type: none"> • Identificar, monitorear y regular los procesos y actividades que ponen en peligro a los bosques naturales y a la biodiversidad. Promover estrategias y planes de manejo de ordenamiento territorial y de fincas para mantener la biodiversidad local. • Promover sistemas de producción sostenibles, como los métodos y conocimientos tradicionales de la agricultura, la agrosilvicultura, la silvicultura, el alcance y manejo de vida silvestre, que utilicen, mantengan o aumenten la biodiversidad. |

| | | | | |
|--|--------------|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Socializar leyes, reglamentos y procedimientos adecuados para la protección y preservación de la flora y fauna dentro de las jurisdicciones nacionales y locales. • Regular el uso sostenible de la diversidad biológica y productos forestales, incluyendo el comercio de este tipo de recursos. |
| 5. Desplazamiento de emisiones provocado por la priorización de actividades productivas a implementar. | Salvuardas G | <p>Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvuardas (PO703) del BID</p> <p>Los principios 15 y 4 la Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM.</p> <p>Los principios 9a, 10, 12 y 14 de la Política Operacional de Bosques (4.36) del BM.</p> | Lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales (sección 1.7) | <ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la aplicación efectiva de la ley y normas locales para combatir y erradicar las prácticas ilegales relacionadas con los bosques. • Diseñar programas que permitan fortalecer las capacidades sobre la gestión sostenible de los recursos naturales. • Facilitar el acceso de las comunidades locales y los pueblos indígenas a los recursos forestales y a los mercados pertinentes con el fin de apoyar los medios de vida y la diversificación de los ingresos de la gestión forestal. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Que las oficinas ambientales municipales promuevan la reforestación de terrenos privados ociosos a través de acuerdos municipales-privados (público – privado) • Reglamentar la compensación de daños o aprovechamientos de los recursos naturales. |
|--|--|--|--|--|

Opción 7: Desarrollo e Implementación de una Estrategia para Uso Sostenible de Leña como fuente energética

Vinculado (pero no limitado)⁵⁸ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos.

Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros

| Impacto adverso priorizados | Salvaguarda Cancún relevante | Salvaguarda del Banco aplicable | Instrumento de gestión | Medidas para reducir, mitigar o contrarrestar impacto |
|---|-------------------------------------|--|--|---|
| 1. Desplazamiento de emisiones debido a restricciones en el uso de recursos forestales. | Salvaguardas G | <p>Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (PO703) del BID</p> <p>Los principios 15 y 4 la Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM.</p> <p>Los principios 9a, 10, 12 y 14 de la Política Operacional de Bosques (4.36) del BM.</p> | Lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales (sección 1.7) | <ul style="list-style-type: none"> El desarrollo e implementación de la Estrategia para el uso sostenible de la leña considere establecer y mantener programas de educación y capacitación científica y técnica relativos a las medidas de identificación, conservación y utilización sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. El desarrollo e implementación de la Estrategia para el uso sostenible de la leña considere promover medios de vida |

⁵⁸ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>alternativos y la mejora de los entornos económicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El desarrollo e implementación de la Estrategia para el uso sostenible de la leña considere proporcionar asistencia técnica para dar a conocer las especies. • El desarrollo e implementación de la Estrategia para el uso sostenible de la leña considere la priorización participativa de actividades, planes programas y proyectos. • El desarrollo e implementación de la Estrategia para el uso sostenible de la leña considere desarrollo o ejecución de proyectos amigables (estufas mejoradas, solares). • Agilizar y facilitar las licencias forestales para uso de leña • Establecer y mantener programas de educación y capacitación técnica, relativos al uso sostenible de los recursos naturales y la |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>biodiversidad, considerando los conocimientos ancestrales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endurecer la aplicación de la ley para los actores ilegales de leña. • Desarrollo de nuevas alternativas que disminuyan el consumo de leña (estufas mejoradas, solares, etc.), amigables con el medio ambiente. • Promover medios de vida alternativos y la mejora de los entornos económicos nacionales, con miras a reforzar los programas orientados al manejo sostenible de los recursos naturales. • Establecimiento de plantaciones de bosques energéticos nativos en las áreas • Desarrollo o ejecución de proyectos amigables (estufas mejoradas, solares). • Promover y desarrollar actividades alternativas |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|---------------|--|---|--|
| | | | | económicas (plantas medicinales, producción de miel, hongos, frutales, etc.) que disminuya la venta y consumo de leña. |
| 2. Desplazamiento forzoso y/o limitaciones sobre el acceso y uso de tierra y recursos para PIs y comunidades locales asociadas a vacíos de regularización de tenencia de la tierra, frente a potencial competencia por acceso a tierras y recursos para producción de energía. | Salvaguarda C | <p>Política de Reasentamiento Involuntario (710) del BID</p> <p>Política Operacional de Reasentamiento Involuntario (4.12)</p> <p>Política sobre Pueblos Indígenas (765) del BID</p> <p>El principio 21 de la Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM</p> | <p>Marco para reasentamiento involuntario y/o restricción y pérdida de acceso a recursos naturales (sección 2.2)</p> <p>Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (sección 2.1)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • En el desarrollo e implementación de la Estrategia para el uso sostenible de la leña establecer los medios a través de los cuales los pueblos indígenas interesados puedan participar de decisiones vinculadas al acceso de la tierra y recursos forestales. • Los pueblos indígenas no ‘deberán’ ser desplazados ‘por la fuerza’ de sus tierras o territorios. No se debería proceder a ningún traslado sin el Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas interesados, y sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, involucrando a los COCODES. • Celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por |

| | | | | |
|---|---------------|--|---|--|
| | | | | <p>conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su Consentimiento Libre Previo e Informado antes de aprobar cualquier actividad bajo el marco de la Estrategia para el uso sostenible de la leña que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos.</p> |
| <p>3. Promover la producción de leña puede incrementar de apropiación de tierras para plantaciones.</p> | Salvaguarda E | <p>Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (PO703) del BID</p> <p>Los principios 15 y 4 la Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM.</p> <p>Los principios 9a, 10, 12 y 14 de la Política Operacional de Bosques (4.36) del BM.</p> | <p>Lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales (sección 1.7)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Monitorear, reducir y eliminar los patrones de producción y consumo que no sean sostenibles y promover políticas e instrumentos adecuados en el marco de la estrategia para el uso sostenible de la leña. • Mejorar o de ser necesario crear disposiciones legales faltantes en materia de cambio de uso de suelo. • Políticas de producción de leña deben tener por objetivo mantener y aumentar la cubierta forestal y la productividad forestal de una forma ecológica, económica y socialmente a través de la rehabilitación, reforestación y restablecimiento de los árboles y los bosques en tierras |

| | | | | |
|---|---------------|--|--|--|
| | | | | <p>improductivas, degradadas y deforestadas, y a través de la gestión de los recursos forestales existentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promover la producción de leña con especies energéticas, vinculadas a PROBOSQUE (asistencia técnica). • Normar y regular los lineamientos que aseguren que las tierras con fines de producción energética, no tengan ningún conflicto de tenencia • Evaluar la opción de privilegiar los proyectos de producción sostenible de leña comunitarios, sobre los proyectos de empresas. • Fomento y/o fortalecimiento de vigilancia comunitaria |
| 4. Fomento de actividades asociadas a la producción de leña como fuente de energía puede ser al detrimento de la conservación y manejo sostenible de los recursos forestales. Puede | Salvaguarda E | <p>Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (PO703) del BID</p> <p>Los principios 15 y 4 la Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM.</p> <p>Los principios 9a, 10, 12 y 14 de la Política Operacional de Bosques (4.36) del BM.</p> | Lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales (sección 1.7) | <ul style="list-style-type: none"> • El desarrollo de la estrategia para el uso sostenible de la leña sea informado por los estudios disponibles sobre los focos de deforestación y degradación, a fin de asegurarse que promueva actividades sostenibles, y áreas adecuadas. • Promover un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas |

| | | | | |
|--|---------------|---|--|---|
| provocar desmedida deforestación y degradación de bosques. | | | | <p>adyacentes a las áreas protegidas, con miras a fomentar la protección de estas áreas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer las capacidades con respecto a árboles energéticos, para uso de leña, en especial a las mujeres • Organización y fortalecimiento comunitario para ejercer una auditoría social participativa • El uso de tecnología apropiada (estufas mejoradas, hornos solares y otros) • Promover tecnologías alternativas para mujeres, incluyendo en las capacitaciones a las familias completas, dando acompañamiento y monitoreo del uso adecuado (que esto no solo sea dirigido a los jefes del hogar sino a toda la familia, incluidos los niños). • Promover el uso y el manejo del bosque energético para la sostenibilidad del hogar, vinculado a cultivos asociados. |
| 5. La preparación del suelo para la regeneración natural puede aumentar el | Salvaguarda E | Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (PO703) del BID | Lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales (sección 1.7) | <ul style="list-style-type: none"> • Identificar y vigilar, mediante el muestreo y otras técnicas, los componentes de la diversidad biológica y la calidad de los bosques a nivel |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| <p>potencial erosivo del suelo, principalmente mientras el mismo esté desnudo. Las cosechas frecuentes y extracción/limpieza de la cobertura vegetal en el suelo también pueden aumentar la erosión de suelos</p> | | <p>Los principios 15 y 4 la Política Operacional de Evaluación Ambiental (401) del BM.</p> <p>Los principios 9a, 10, 12 y 14 de la Política Operacional de Bosques (4.36) del BM.</p> | | <p>nacional y sub-nacional, y mantener y organizar los datos que se produzcan de dicha identificación, y las actividades de seguimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adoptar medidas efectivas para prevenir la degradación del suelo. Para tales efectos, deberán desarrollar estrategias integrales de largo plazo para la conservación y gestión sostenible de los recursos de la tierra, incluyendo el suelo, la vegetación y los procesos hidrológicos relacionados. través de un reglamento municipal y el apoyo de instituciones competentes en el tema (CONAP, INAB y otros) curvas de nivel, cercas vivas, agroforestería, abono de cobertura, terrazas, programas de incentivos por conservación de suelos y agua • Adoptar medidas efectivas para prevenir la degradación del suelo. Desarrollar estrategias integrales de largo plazo para la conservación y gestión sostenible de los recursos de la tierra, incluyendo el suelo, la |
|---|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | vegetación y los procesos hidrológicos relacionados. |
|--|--|--|--|---|

1.6 Medidas para potenciar los impactos ambientales y sociales positivos de la implementación de la Estrategia REDD+.

La siguiente sección presenta medidas para potenciar los impactos ambientales y sociales positivos derivados de la implementación de las Opciones de la Estrategia REDD+, y que fueron identificados y priorizados a través del SESA.

Opción 1: Armonización del marco de políticas, planes e instrumentos, de sectores vinculados al uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la gestión forestal-ambiental

Vinculado (pero no limitado)⁵⁹ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos.

Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques.

Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros.

| Impacto positivo | Salvaguarda Cancún relevante | Medidas para potenciar el impacto |
|---|---|---|
| 1. La armonización de políticas, planes e instrumentos legales podrá abordar deficiencias legales, incluyendo contradicciones en la legislación que generan impactos adversos. Esto propiciará una mejor coordinación institucional y reducción de traslapes e incoherencia entre políticas sectoriales asociadas al uso del suelo y sector forestal (fortalecimiento de la gobernanza forestal y de uso de suelo); | Salvaguarda B, en términos de asegurar transparencia y efectividad de las estructuras de gobernanza forestal. | <ul style="list-style-type: none">• Tomar en consideración las deficiencias legales existentes en el proceso de armonización, con el fin de propiciar una mejor coordinación institucional y reducción de traslapes e incoherencia entre políticas sectoriales asociadas al uso del suelo y sector forestal.• Procurar foros de participación para asegurar la coordinación con todos los sectores y actores relevantes en el proceso de armonización y priorización de políticas, y que sus intereses y derechos sean tomados en consideración. |

⁵⁹ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

| | | |
|---|--|--|
| 2. Mejor reconocimiento y aplicación del derecho de tenencia a la tierra. Esta opción estratégica otorga la oportunidad de trabajar en brindar certeza jurídica en cuanto a la tenencia y propiedad de la tierra, lo cual mejora el acceso a financiamiento (ej.: PINPEP), contribuye a una distribución de beneficios más justa, y da más certidumbre para inversiones privadas a largo plazo; | Salvaguarda B, en términos de asegurar transparencia y efectividad de las estructuras de gobernanza forestal. Salvaguarda C en términos de asegurar el reconocimiento y respeto de los pueblos indígenas y comunidades locales. | <ul style="list-style-type: none"> • Tomar en consideración las deficiencias legales existentes en el proceso de armonización, en particular, las deficiencias legales que perjudican a los pueblos indígenas y comunidades locales. |
| 3. Reducción de tensiones y conflictos sobre el acceso y uso de recursos naturales por una armonización y clarificación de normas sobre el derecho y acceso a tierras y recursos naturales. | Salvaguarda C en términos de asegurar el reconocimiento y respeto de los pueblos indígenas y comunidades locales. | <ul style="list-style-type: none"> • Tomar en consideración las deficiencias legales existentes en el proceso de armonización, en particular, las deficiencias legales que perjudican a los pueblos indígenas y comunidades locales. |
| 4. Mayor y mejor aplicación de las normas vigentes de cambio de uso de la tierra (p.e. Art. 47 de la ley forestal). | Salvaguarda B, en términos de asegurar transparencia y efectividad de las estructuras de gobernanza forestal. | <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer la capacidad institucional para poder dar seguimiento a la implementación de la nueva normativa. |
| 5. Regularización y reducción de la expansión del sector agropecuario (agricultura) en áreas boscosas. | Salvaguarda B, en términos de asegurar transparencia y efectividad de las estructuras de gobernanza forestal. | <ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse que en el proceso de armonización se involucre al sector agropecuario y agroindustria, con el fin de definir medidas que podrán exitosamente abordar su expansión. |
| 6. Reducción de la brecha de inequidad en la tenencia de la tierra y el acceso a los recursos naturales. | Salvaguarda C en términos de asegurar el reconocimiento y respeto de los pueblos indígenas y comunidades locales. | <ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse que el proceso de armonización tome en consideración el estado de inequidad en cuanto a la tenencia de la tierra y acceso a recursos naturales, y se oriente dicho proceso a propiciar una reducción significativa o total. |

Opción 2: Fortalecimiento de las capacidades institucionales de vigilancia y protección forestal, operación de justicia y control de la tala ilegal Vinculado (pero no limitado) ⁶⁰ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

⁶⁰ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros.

Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas.

| Impacto positivo | Salvaguarda Cancún relevante | Medidas para potenciar el impacto |
|---|---|---|
| 1. Disminución de la degradación y de la pérdida de la biodiversidad debido a un mejor control y fortalecimiento de la protección y vigilancia. Asimismo, una mejor implementación/aplicación de normas puede traer un mejoramiento de condiciones de biodiversidad, la conservación del suelo, y recursos hídricos en cuanto a la cantidad, calidad, y regulación de agua por estar vigilando las condiciones de las áreas de bosques naturales, sistemas agroforestales, áreas reforestadas, y plantaciones forestales; | Salvaguarda E, que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> • Diseñar medidas de protección y control forestal que consideren las prioridades nacionales para la protección de la biodiversidad y los bosques naturales. • Implementar incentivos económicos, sociales y de otra índole adecuados a fin de fomentar la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos biológicos. • Fortalecimiento de la vigilancia y monitoreo a través de capacitaciones y equipamiento |
| 2. Reducción de incidencia y eventualidades de incendios forestales; | Salvaguarda E, que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> • Crear conciencia sobre los temas de protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales |
| 3. Disminución de la tala ilegal; | Salvaguarda E, que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> • Implementar incentivos económicos, sociales y de otra índole adecuados a fin de fomentar la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos biológicos. |
| 4. Mejora de la gobernanza forestal y seguimiento a delitos ambientales; | <p>Salvaguarda B que tiene por objetivo mejorar las estructuras de gobernanza forestal.</p> <p>Salvaguarda E, que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Coordinar los esfuerzos para erradicar las actividades relacionadas con la caza furtiva, y adoptar medidas concertadas y enérgicas, para controlarlas y supervisarlas, particularmente en los hábitats transfronterizos |
| 5. Motivación del personal involucrado en el manejo forestal; | Salvaguarda B que tiene por objetivo mejorar las estructuras de gobernanza forestal. | <ul style="list-style-type: none"> • Diseñar medidas de protección y control forestal que consideren el fortalecimiento institucional y de sus funcionarios. |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| | Salvaguarda E, que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | |
| 6. Recuperación de áreas forestales. | Salvaguarda E, que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> Diseñar medidas de protección y control forestal que prioricen zonas tierras improductivas, degradadas y deforestadas. |

Opción 3: Promoción y Fortalecimiento del Ordenamiento Territorial en Guatemala

Vinculado (pero no limitado) ⁶¹ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos.

Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques.

Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros

| Impacto positivo | Salvaguarda Cancún relevante | Medidas para potenciar el impacto |
|--|---|---|
| 1. Reducción de la deforestación y mejora de la cobertura forestal; | Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> Fortalecer las instituciones existentes responsables de la conservación de la diversidad biológica, y considerar el desarrollo de mecanismos tales como institutos o centros nacionales sobre diversidad biológica |
| 2. Reducción de la expansión de cultivos agroindustriales (palma africana y caña de azúcar), evitando la sustitución de bosques nativos por cultivos agroindustriales; | Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> Promover políticas agrícolas equitativas que promuevan, según proceda, el desarrollo y el mantenimiento de los diversos sistemas de cultivo que favorezcan la utilización sostenible de la diversidad biológica agrícola y de otros recursos naturales. |

⁶¹ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

| | | |
|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> La promoción de las políticas antes aludidas, deberán realizarse entre las entidades: MARN, CONAP, INAB y MAGA, con la finalidad de tomar ejes y compromisos interinstitucionales palpables a corto, mediano y largo plazo. |
| 3. Reducción de desplazamientos de la expansión urbana, evitando la sustitución de bosques nativos por desarrollo de viviendas. | Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> Promover que el desarrollo de las políticas de ordenamiento territorial considere las presiones sobre los bosques nativos derivadas de la expansión urbana, y estén orientadas a brindar alternativas para el desarrollo de viviendas cerca de los bosques nativos. |
| 4. Ofrecer opciones de desarrollo económico como alternativa a la agroindustria. | Salvaguarda B, que tiene por objetivo fomentar la efectividad de las estructuras de gobernanza forestal. | <ul style="list-style-type: none"> Promover actividades generadoras de ingresos, como el turismo sostenible, para mejorar la infraestructura y los servicios sociales, en particular para proteger los medios de subsistencia de las comunidades locales y los pueblos indígenas |
| 5. Mejor entendimiento de agricultores sobre servicios ambientales de los bosques y el manejo sostenible; | Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> Proteger y alentar el uso consuetudinario de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con la conservación. Crear conciencia sobre los temas de protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales |

Opción 4: Fortalecimiento de los programas existentes y creación de nuevos mecanismos de incentivos para actividades (económicas y no económicas) de conservación, protección y manejo de los bosques, sistemas agroforestales y producción forestal energética

Vinculado (pero no limitado)⁶² a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos.

Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

⁶² Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques.

Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros

| Impacto positivo | Salvaguarda Cancún relevante | Medidas para potenciar el impacto |
|---|--|--|
| <p>1. Reducción de la presión sobre los bosques y aumento de la cobertura forestal gracias a diversificación de los ingresos económicos promoviendo la conservación, protección y manejo de los bosques. Disminución de la deforestación, degradación y de la pérdida de biodiversidad, y de sustitución de bosques nativos por plantaciones y cambios en el ecosistema.</p> | <p>Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • El diseño de los mecanismos e incentivos debe estar orientado a mantener y aumentar la cubierta forestal y la productividad forestal de una forma ecológica, económica y socialmente coherente; a través de la rehabilitación, reforestación y restablecimiento de los árboles y los bosques en tierras improductivas, degradadas y deforestadas, y a través de la gestión de los recursos forestales existentes. • Implementar incentivos económicos, sociales y de otra índole adecuados a fin de fomentar la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos biológicos. Esto incluye la promoción de los sistemas de producción sostenibles, como los métodos tradicionales de la agricultura, la agrosilvicultura, la silvicultura, el alcance y manejo de vida silvestre, que utilicen, mantengan o aumenten la Biodiversidad |
| <p>2. Incentivar la reforestación diversificada y el manejo sostenible de plantaciones puede crear hábitat nuevo para varias especies forestales, preservar la diversidad de especies, mejorar la calidad de suelo y prevenir la erosión, especialmente en áreas previamente degradadas y/o desprovistas de vegetación nativa, como por ej. en tierras de cultivos o en plantaciones no manejadas en una manera sostenible.</p> | <p>Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • El diseño de los mecanismos e incentivos debe estar orientado a incentivar una reforestación diversificada. • Llevar a cabo esfuerzos para mantener y aumentar la cubierta forestal y la productividad forestal de una forma ecológica, económica y socialmente a través de la rehabilitación, reforestación y restablecimiento de los árboles y los bosques en tierras improductivas, degradadas y deforestadas, y a través de la gestión de los recursos forestales existentes. |
| <p>3. Desarrollo económico y disminución de emigración hacia las ciudades debido a la diversificación de fuentes de ingresos rurales, nuevos recursos, y la generación de fuentes de empleo. Reducción de la pobreza.</p> | <p>Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad y la promoción de incentivos socio económicos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • El diseño de los mecanismos e incentivos debe estar orientado a dar respuesta a las necesidades económicas y medios de vida de los usuarios de los bosques. • Aplicar políticas agrícolas equitativas que promuevan, según proceda, el desarrollo y el mantenimiento de los diversos sistemas de cultivo que favorezcan la utilización sostenible de la diversidad biológica agrícola y de otros recursos naturales. |

| | | |
|---|---|---|
| 4. Mejor entendimiento de agricultores y actores relevantes sobre servicios ambientales y en el manejo sostenible y cambio de conducta de las personas para el manejo sostenibles del bosque natural. | Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> El diseño de los mecanismos e incentivos debe estar orientado a proteger y alentar el uso consuetudinario de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con la conservación. |
| 5. Seguridad alimentaria. | Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> El diseño de los mecanismos e incentivos debe estar orientado a brindar seguridad alimentaria |

Opción 5: Desarrollo del marco regulatorio y la institucionalidad relacionada con el reconocimiento económico de los bienes y servicios ambientales, incluyendo el carbono forestal

Vinculado (pero no limitado) ⁶³ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques

| Impacto positivo | Salvaguarda Cancún relevante | Medidas para potenciar el impacto |
|--|---|---|
| 1. Claridad sobre la propiedad de los servicios ambientales, incluyendo los derechos de carbono. | Salvaguarda C en términos de asegurar el reconocimiento y respeto de los pueblos indígenas y comunidades locales. | <ul style="list-style-type: none"> El desarrollo del marco regulatorio e institucionalidad en relación al reconocimiento económico de bienes y servicios ambientales, debe buscar aplicar y mejorar la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades |
| 2. Valoración de bosques y ecosistemas boscosos, y sus servicios, frente a otros usos del suelo. | Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad y la promoción de incentivos socio económicos. | <ul style="list-style-type: none"> El proceso de desarrollo del marco regulatorio e institucionalidad en relación al reconocimiento económico de bienes y servicios ambientales debe buscar valorar bosques y ecosistemas boscosos |

⁶³ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

| | | |
|---|---|--|
| 3. Claridad sobre la normativa para acceder a mecanismos de financiamiento asociados a la provisión y mantenimiento de bienes y servicios eco sistémicos. | Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad y la promoción de incentivos socio económicos. | <ul style="list-style-type: none"> El desarrollo del marco regulatorio e institucionalidad en relación al reconocimiento económico de bienes y servicios ambientales debe tomar en cuenta, a fin de clarificar, la normativa para acceder a mecanismos de financiamiento |
| 4. Claridad sobre la normativa para una distribución de beneficios económicos justa asociada a la provisión y mantenimiento de bienes y servicios eco sistémicos. | <p>Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad y la promoción de incentivos socio económicos.</p> <p>Salvaguarda C en términos de asegurar el reconocimiento y respeto de los pueblos indígenas y comunidades locales.</p> <p>Salvaguarda D en términos de asegurar la participación plena y efectiva de todas las partes interesadas.</p> | <ul style="list-style-type: none"> El desarrollo del marco regulatorio e institucionalidad en relación al reconocimiento económico de bienes y servicios ambientales debe tomar en cuenta, a fin de clarificar, la normativa para una distribución de beneficios económicos. |
| 5. Poseer una identificación legal, de ser capacitado en el marco regulatorio y de REDD+. | <p>Salvaguarda C en términos de asegurar el reconocimiento y respeto de los pueblos indígenas y comunidades locales.</p> <p>Salvaguarda D en términos de asegurar la participación plena y efectiva de todas las partes interesadas.</p> | <ul style="list-style-type: none"> El proceso de desarrollo del marco regulatorio e institucionalidad en relación al reconocimiento económico de bienes y servicios ambientales debe buscar aplicar y mejorar la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades, y facilitar la participación de las partes en el proceso. |

Opción 6: Fomento de actividades productivas y medios de vida compatibles con la conservación y manejo sostenible de los bosques y paisajes agroforestales

Vinculado (pero no limitado) ⁶⁴ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques.

| Impacto positivo | Salvaguarda Cancún relevante | Medidas para potenciar el impacto |
|--|---|--|
| 1. Mejora de la calidad del suelo y reducción del riesgo de erosión en áreas degradadas. | Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> El fomento de actividades productivas y medios de vida compatibles con la conservación y manejo sostenible de los bosques debe considerar y orientarse a mejorar de la calidad del suelo y reducción del riesgo de erosión en áreas degradadas. Adoptar medidas efectivas para prevenir la degradación del suelo. Para tales efectos, deberán desarrollar estrategias integrales de largo plazo para la conservación y gestión sostenible de los recursos de la tierra, incluyendo el suelo, la vegetación y los procesos hidrológicos relacionados |
| 2. Reducción de la contaminación. | Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> El fomento de actividades productivas y medios de vida compatibles con la conservación y manejo sostenible de los bosques debe considerar y orientarse a reducir la contaminación. |
| 3. Aprovechamiento sostenible de los productos del bosque. | Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> A través del fomento de actividades productivas y medios de vida compatibles con la conservación y manejo sostenible de los bosques se debe promover el aprovechamiento sostenible de productos del bosque. Aplicar políticas agrícolas equitativas que promuevan, según proceda, el desarrollo y el mantenimiento de los diversos sistemas de cultivo que favorezcan la utilización |

⁶⁴ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>sostenible de la diversidad biológica agrícola y de otros recursos naturales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Llevar a cabo esfuerzos para mantener y aumentar la cubierta forestal y la productividad forestal de una forma ecológica, económica y socialmente a través de la rehabilitación, reforestación y restablecimiento de los árboles y los bosques en tierras improductivas, degradadas y deforestadas, y a través de la gestión de los recursos forestales existentes. |
| 4. Incremento de la biodiversidad en áreas degradadas recuperadas. | Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> • El fomento de actividades productivas y medios de vida compatibles con la conservación y manejo sostenible de los bosques debe buscar mejorar la biodiversidad en áreas degradadas recuperadas • Mapear zonas a fin de determinar actividades adaptadas a áreas degradadas. |
| 5. Reducción del avance de la frontera agrícola. | Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> • Coordinar los esfuerzos de varios sectores para asegurar que el fomento de actividades productivas y medios de vida compatibles con la conservación y manejo sostenible de los bosques permita reducir el avance de la frontera agrícola • Mapear y categorizar las tierras a fin de determinar zonas prioritarias • Llevar a cabo esfuerzos para mantener y aumentar la cubierta forestal y la productividad forestal de una forma ecológica, económica y socialmente a través de la rehabilitación, reforestación y restablecimiento de los árboles y los bosques en tierras improductivas, degradadas y deforestadas, y a través de la gestión de los recursos forestales existentes • Implementar incentivos económicos, sociales y de otra índole adecuados a fin de fomentar la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos biológicos. Esto incluye la promoción de los |

| | | |
|--|---|---|
| | | sistemas de producción sostenibles, como los métodos tradicionales de la agricultura, la agrosilvicultura, la silvicultura, el alcance y manejo de vida silvestre, que utilicen, mantengan o aumenten la Biodiversidad |
| 6. Mantenimiento de los reservorios de carbono en áreas no degradadas. | Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> • El fomento de actividades productivas y medios de vida compatibles con la conservación y manejo sostenible de los bosques debe tener como prioridad proteger las áreas no degradadas. • Mapear y categorizar los bosques de manera que se reflejen los distintos tipos de bosques naturales, la calidad del bosque y las plantaciones forestales |

Opción 7: Desarrollo e Implementación de una Estrategia para Uso Sostenible de Leña como fuente energética

Vinculado (pero no limitado) ⁶⁵ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos.

⁶⁵ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros

| Impacto positivo | Salvaguarda Cancún relevante | Medidas para potenciar el impacto |
|---|---|--|
| 1. Una Estrategia para Uso Sostenible de Leña puede llevar a un mejor uso de recursos forestales y a una reducción de presión sobre bosques naturales. | Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> • Durante el desarrollo e Implementación de la Estrategia para Uso Sostenible de leña como fuente energética, tener como objetivo fomentar un mejor uso de recursos forestales y a una reducción de presión sobre bosques naturales. |
| 2. La reforestación y el manejo sostenible de plantaciones puede mejorar la calidad del suelo y reducir el riesgo de erosión, y crear hábitat de especies, especialmente las áreas previamente degradadas y/o desprovistas de vegetación nativa, como por ejemplo en tierras de cultivos o en plantaciones no manejadas en una manera sostenible; | Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> • Durante el desarrollo e Implementación de la Estrategia para Uso Sostenible de leña como fuente energética, tener como objetivo recuperar tierras degradadas o no manejadas de manera sostenible |
| 3. Puede tener como efecto indirecto la reducción de la tala ilegal. | Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> • Durante la implementación de la Estrategia para Uso Sostenible de leña como fuente energética, aumentar esfuerzos para reducir la tala ilegal (vigilancia, medios de vida alternativos, etc.). |
| 4. El mejor uso de estufas y leña como resultado de esta opción puede reducir los riesgos a la salud de mujeres y niños guatemaltecos por consumo más eficiente de energía. | <p>Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad.</p> <p>Salvaguarda C en términos de asegurar el reconocimiento y respeto de los pueblos indígenas y comunidades locales.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Durante el desarrollo y la implementación de la Estrategia para Uso Sostenible de leña como fuente energética, considerar y monitorear los impactos positivos sobre la salud |
| 5. Provisión de energía basada en biomasa a través de la producción sostenible de leña; | Salvaguarda E que tiene por objetivo la protección de bosques naturales y la biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> • Durante el desarrollo y la implementación de la Estrategia para Uso Sostenible de leña como fuente energética, tener como objetivo la diversificación de fuentes de energía. |

1.7 Lineamientos para la gestión de riesgos medioambientales en el contexto del ciclo de la implementación de las acciones REDD+

A continuación, se presentan los lineamientos que deberán ser aplicados por todo actor/sector que lleve a cabo acciones REDD+, con el objeto de asegurar que las acciones REDD+ a implementarse sean ambientalmente sostenibles conforme a lo dispuesto por la legislación nacional y a las directrices establecidas en las políticas operativas del BID y Banco Mundial aplicables.

Se hace notar que estos lineamientos han sido desarrollados tomando como base la OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias, mismos que fueron ajustados al contexto en el que se llevarán a cabo las acciones REDD+-

Los lineamientos se estructuran en las siguientes tres fases que responden al ciclo de la implementación de las acciones REDD+:

- A. Pre-evaluación de las acciones REDD+
- B. Preparación de las acciones REDD+
- C. Implementación de las acciones REDD+

A. Pre-evaluación de las acciones REDD+

| | | Directiva del BID aplicable |
|-----|---|-----------------------------|
| A.1 | Pre-evaluar y clasificar las acciones REDD+ (asignarles categorías) según sus posibles impactos ambientales. | Directiva B.3. |
| A.2 | Identificar otros factores de riesgo adicional más allá de los identificados que puedan afectar la sostenibilidad ambiental de las acciones REDD+ | Directiva B.4. |
| A.3 | Determinar qué acciones REDD+ requerirán una evaluación ambiental, según su clasificación y nivel de riesgo. | Directiva B.5. |

A.1 Pre-evaluación y clasificación

La pre-evaluación considerará los impactos potenciales ambientales negativos, sean éstos directos o indirectos, regionales o de naturaleza acumulativa, incluyendo los impactos sociales y culturales ambientalmente relacionados de las acciones REDD+.

Las operaciones serán clasificadas de acuerdo con el nivel de impacto potencial, de modo que se puedan definir las salvaguardias ambientales y los requisitos de revisión ambiental apropiados, de la siguiente forma:

Tabla No. 1

| Categoría | Nivel de impacto ambiental | Requisito |
|----------------------|---|--|
| Categoría “A” | Cualquier operación que tenga el potencial de causar impactos ambientales negativos significativos y efectos sociales asociados, o tenga implicaciones profundas que afecten los recursos naturales. | <p>Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) cuando se trate de proyectos de inversión</p> <p>Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) para aquellos programas u operaciones financieras que involucren planes y políticas.</p> <p>Si el BID considera que las operaciones podrían generar una complejidad y sensibilidad especial en sus aspectos ambientales, sociales o de salud, se deberá crear un Panel de Expertos que asesoren el diseño y/o la ejecución de la operación en cuestiones relativas al proceso de EA, incluidas salud y seguridad.</p> <p>Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)</p> |
| Categoría “B” | <p>Aquellas operaciones que puedan causar principalmente impactos ambientales negativos localizados y de corto plazo, incluyendo impactos sociales asociados, y para los cuales ya se dispone de medidas de mitigación efectivas.</p> <p>De conformidad con los Acuerdo Ministerial 199-2016 y Acuerdo Gubernativo 137-2016, la Categoría “B” está subdividida en categoría “B1” y “B2.</p> | <p>Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) cuando se trate de proyectos de inversión.⁶⁶</p> <p>Análisis ambiental y/o social (centrado en temas específicos identificados durante el proceso de selección).</p> <p>Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)</p> |

⁶⁶ Se deberá determinar la categoría según el listado taxativo Acuerdo Ministerial 199-2016 y Acuerdo Gubernativo 137-2016, ya que algunas actividades REDD+ de la categoría B requerirán de un EIA.

| | | |
|----------------------|--|--|
| | De tal forma se deberán categorizar las actividades o acciones REDD+ de acuerdo a la magnitud de la actividad y sus impactos. pueden requerir de una EIA. Según el listado taxativo hay algunas actividades o proyectos de la categoría B que requieren de un EIA. | |
| Categoría “C” | Aquellas operaciones que no causen impactos ambientales negativos, incluyendo sociales asociados, o cuyos impactos sean mínimos. | <p>NO requieren un análisis ambiental o social más allá de lo que implique su preselección y delimitación para determinar su clasificación.</p> <p>En caso de que se considere pertinente, se establecerán requisitos de salvaguardas o supervisión.⁶⁷</p> |

A.2 Identificación de otros factores de riesgo

Además de los riesgos que representan los impactos ambientales, se debe evaluar la existencia de otros factores de riesgo que puedan afectar la sostenibilidad ambiental de las acciones REDD+, tales como:

- La capacidad de gestión de las agencias ejecutoras/patrocinadores o de terceros
- Riesgos derivados del sector
- Riesgos asociados con preocupaciones sociales y ambientales muy delicadas,
- La vulnerabilidad ante desastres.

Dado que dichos factores no son de tipo ambiental ni social realizar un EIA no sería el instrumento adecuado. Por lo tanto, el procedimiento será diferente:

- a) Se deberá evaluar y confirmar, a partir de información razonable, si dichos factores de riesgo potencial pueden generar riesgos significativos para la sostenibilidad ambiental de la acción REDD+.
- b) Se deberá identificar y proponer medidas para dar atención a tales riesgos.
- c) Dar seguimiento

A.3 Determinar qué acciones REDD+ requerirán una evaluación ambiental, según su clasificación y nivel de riesgo

⁶⁷ Como la aplicación de estándares o códigos ambientales, sanitarios y de seguridad o listas de exclusión

Dependiendo la clasificación que se otorgue a las acciones REDD+ (ver Tabla 1) y de lo previsto por la legislación nacional se deberá llevar a cabo una evaluación ambiental. La cual según el grado de impacto podrá ser una evaluación del impacto ambiental (EIA), evaluación ambiental estratégica (EAE), análisis sociocultural (AS), análisis ambiental y auditoría ambiental.

Se hace notar que toda evaluación ambiental realizada deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación nacional y como mínimo a lo dispuesto en estos Lineamientos. Asimismo, se reitera la necesidad de poner a disposición del público información relativa a las Evaluaciones Ambientales de las acciones REDD+.

A.3.1 Evaluación de Impacto Ambiental

La evaluación del impacto ambiental se realiza con el fin de detectar las consecuencias ambientales y sociales potencialmente significativas, proponer soluciones para controlarlas y medidas para evitar, mitigar o compensar las consecuencias negativas importantes e intensificar las positivas.

De esa cuenta, según lo establecido por el Decreto Número 68-86 del Congreso de la República de Guatemala “Ley de Protección y Mejoramiento al Medio Ambiente”, constituye el cuerpo normativo de carácter ordinario que regula lo relativo a los instrumentos ambientales. Por ello, para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características puede producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del impacto ambiental, el cual debe ser realizado por técnicos en la materia y aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

El proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) deberá incluir como mínimo:

- a) Pre-evaluación y caracterización de impactos;
- b) Consulta adecuada y oportuna y proceso de difusión de información;
- c) Examen de alternativas, en las que se incluye como opción la alternativa sin proyecto.

El EIA deberá:

- Incluir y estar respaldado por los análisis económicos de las alternativas al proyecto y, si aplica, por evaluaciones económicas de costo-beneficio de los impactos ambientales del proyecto y/o de las medidas de protección relacionadas.
- Contener análisis de cumplimiento de los requisitos legales pertinentes;
- Impactos directos, indirectos, regionales o acumulativos utilizando líneas de base según sea requerido;
- Planes de gestión y mitigación de impactos presentados en un PGAS;
- Incorporación de los resultados de la EA en el diseño del proyecto;
- Medidas para el adecuado seguimiento de la implementación de PGAS.

A.3.2 Evaluación Estratégica Ambiental

La evaluación ambiental estratégica (EAE) se refiere a los impactos ambientales y sociales asociados importantes que se deriven de políticas, proyectos y programas.

El EAE debería iniciarse ejecutarse conforme a la legislación nacional, y a comienzos del proceso de toma de decisiones y efectuarse antes de la implementación de políticas, planes o programas. Las recomendaciones que de allí surjan deberían incorporarse en las acciones REDD+, si fuera el caso.

A.3.3 Análisis sociocultural (AS)

Se llevará a cabo un análisis sociocultural cuando la acción REDD+ pueda causar impactos socioculturales significativos en la población afectada, que no se abordarán en otros procesos de evaluación ambiental requeridos para la operación.

- El análisis sociocultural puede formar parte de un análisis ambiental
- Debe incluir las medidas para evitar, reducir o mitigar efectos socioculturales negativos de importancia.
- Al ejecutarse se deberá:
 - (i) Llevar a cabo un análisis de partes involucradas;
 - (ii) Tomar en cuenta la cultura y la identidad de los grupos y beneficiarios previstos;
 - (iii) lograr la participación de los grupos y/o sectores pertinentes en la identificación de actividades y acciones prioritarias.

A.3.4. Análisis ambiental

El análisis ambiental se requiere para las operaciones de Categoría B. Deberá incluir:

- Una descripción de la acción REDD+ propuesta;
- Una evaluación del marco jurídico y normativo aplicable a la acción REDD+;
- Una evaluación de los impactos y riesgos ambientales y sociales potenciales;
- Un proyecto de plan de gestión, con inclusión de programas de mitigación y seguimiento para dar atención a los impactos y riesgos importantes.

A.3.5 Auditoría ambiental

Las auditorías ambientales sirven para determinar los impactos y los riesgos ambientales y sociales pasados o presentes asociados con actividades económicas existentes o pasadas, y prescribir medios para rectificarlos, cuando sea necesario.

A.3.6. Plan de gestión ambiental y social (PGAS)

Un PGAS formará parte de la evaluación del impacto ambiental o, en según sea el caso, podrá ser un documento independiente. El PGAS describirá las medidas de mitigación y requisitos de seguimiento acordados durante la evaluación ambiental y establecerá el marco de trabajo para su aplicación en las etapas posteriores del proyecto.

Los PGAS deben incluir:

- a) Una presentación de los impactos y riesgos claves de la operación propuesta, tanto directos como indirectos;
- b) El diseño de las medidas ambientales/sociales que se proponen para evitar, minimizar, compensar y/o atenuar los impactos y riesgos claves, tanto directos como indirectos;

- c) Las responsabilidades institucionales relativas a la implementación de tales medidas, incluyendo, si fuere necesario, formación de capacidades y adiestramiento;
- d) Cronograma y presupuesto asignado para la ejecución y gestión de tales medidas; programa de consulta o participación acordado para el proyecto;
- e) El marco para la supervisión de los riesgos e impactos ambientales y sociales a lo largo de la ejecución del proyecto, incluidos indicadores claramente definidos, cronogramas de supervisión, responsabilidades y costos.

B. Fase de preparación de las acciones REDD+

| | | Directiva del BID aplicable |
|-----|--|---|
| 2.1 | En caso de ser aplicable, llevar a cabo consulta requerida | Directiva B.6. |
| 2.2 | Evaluar si las acciones REDD+ podrían tener impactos transfronterizos o aumentar el riesgo de desastres naturales. | Directiva B.8 Le será aplicable la OP-704 del BID en caso de riesgo de desastres naturales |
| 2.3 | Evaluar si las acciones REDD+ podrían tener impactos sobre hábitats naturales y sitios de importancia cultural | Directiva B.9 |

B.1 En caso de ser aplicable llevar a cabo consulta requerida

Como parte del proceso de evaluación ambiental, las acciones REDD+ que sean clasificadas bajo las Categorías “A” y “B” requerirán consultas con las partes afectadas⁶⁸ y deberán considerarse sus puntos de vista. Resulta importante mencionar que si bien es cierto existen proyectos de gran impacto que pueden afectar a comunidades indígenas, existen proyectos que no siendo de las categorías antes mencionadas, pueden provocar impactos negativos en poblaciones indígenas, los cuales a su vez necesitan ser consultadas por dichas actividades. Asimismo, la PO 4.01 del BM requiere consultas durante toda la ejecución de la acción REDD+⁶⁹

Actualmente el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, establece que para Estudios de Impacto Ambiental categoría “A” es necesario realizar un Estudio de Impacto Social, con la finalidad de conocer la situación social y conflictividad del área donde se realizará el proyecto⁷⁰.

⁶⁸ De conformidad por lo dispuesto en la OP 703 del BID, se entenderá por Parte afectada a los individuos, grupos de individuos o comunidades que puedan ser impactadas directamente por una operación financiada por el Banco, en este caso por una acción REDD+

⁶⁹ PO 401 BM. Página 6, principio 15: “el prestatario consulta a dichos grupos durante toda la ejecución del proyecto, según sea necesario, para atender los asuntos relativos a la EA que los afecten”

⁷⁰ Artículo 3... inciso 32) “Evaluación de Impacto Social -EIS-: Instrumento Ambiental complementario que permite hacer una estimación de las consecuencias sociales y culturales ante cualquier proyecto, obra, industria o actividad que potencialmente afecte las poblaciones y su calidad de vida....”

De conformidad por lo dispuesto en la OP 703 del BID, se entenderá por consulta al diálogo constructivo entre las partes afectadas y el gobierno, en el cual cada participante escucha las opiniones, intereses, expectativas y propuestas de los demás. Una consulta significativa y la consideración de los puntos de vista de cada uno de los participantes implican que las partes involucradas están dispuestas a dejarse influir en sus opiniones, actividades y planes, y considerarlos en un grado razonable, de lo que emergen acciones concretas que toman en cuenta las inquietudes e intereses de las demás partes.

Procedimiento de consulta:

B.1.1 Pre-evaluación y clasificación.

Se deberá llevar a cabo la evaluación y clasificación de la acción REDD+ según la Tabla 1. En caso de ser Categoría A o B, se deberá proceder a la consulta públicas y considerar las opiniones y puntos de vista de las partes afectadas por la acción REDD+

B.1.2 Contratación de asesoramiento profesional.

Se deberá considerar la contratación de personal especializados para realizar consultas eficaces y profesionales, que cuenten con aptitudes específicas de comunicación, negociación y gestión de grupos.

B.1.3 Proceso de consulta.

Dependerá de la naturaleza de la acción REDD+:

B.1.3.1 Consultas para acción REDD+ Categoría A

- Deberá realizarse un análisis de partes involucradas,
- Deberán consultarse por lo menos dos veces con las partes afectadas durante la preparación del proyecto. La primera consulta debe realizarse durante la fase de delimitación del proceso de evaluación ambiental de la acción REDD+ y la segunda durante la revisión del impacto ambiental
- Deberá contarse con un plan de consulta pública, en el que se definirán los objetivos y la metodología para ejecutar consultas significativas con los grupos de interés.
- En caso de consultas relacionadas con la preparación de planes de reasentamiento, deberá considerarse lo dispuesto en el Marco para reasentamiento involuntario (véase sección 2.2.)

B.1.3.2 Consultas para acción REDD+ Categoría B

- Deberá realizarse al menos una consulta con las partes afectadas, preferentemente, cuando se realiza la evaluación del impacto de la acción REDD+
- Se deberá proporcionar, como mínimo, información a las partes afectadas y facilitar un diálogo sobre el alcance de la acción REDD+ y las medidas de mitigación que se propongan

B.1.4 Divulgación de información

Se deberá cumplir con lo dispuesto en la legislación nacional en la materia, así como por la Política de Disponibilidad de Información del BID OP- 102.

B.2 Evaluar si las acciones REDD+ podrían tener impactos transfronterizos

Si durante la evaluación se identifica la presencia de complicaciones ambientales y sociales transfronterizas que constituyan un motivo de preocupación potencialmente significativa deberá aplicarse lo dispuesto en la Directiva B.3 de la OP 703 del BID.

B.3 Evaluar si las acciones REDD+ podrían tener impactos sobre hábitats naturales y sitios de importancia cultural

Si durante la evaluación se identifica que las acciones REDD+ podrían tener impactos sobre hábitats naturales y sitios de importancia cultural deberá aplicarse lo dispuesto en la Directiva B.6 de la OP 703 del BID.

C. Fase de ejecución de las acciones REDD+

3.1 Supervisión y cumplimiento

- Tanto el PGAS como por el marco lógico deberán contener hitos ambientales esenciales como, por ejemplo, las fechas previstas para rendir informes sobre el cumplimiento de requisitos ambientales por indicador específico, según se requiera.
- Para acciones REDD+ Categoría A del sector público, se deberá describir las acciones de cumplimiento de las salvaguardas que se prevean durante la implementación de la acción REDD+.

Sección 2. Marcos específicos

2.1. Marco para pueblos indígenas

Esta sección se estructura de la siguiente manera:

- Objetivos y alcance
- Resumen de los potenciales impactos identificados a través del SESA y que son relevantes a los pueblos indígenas
- Identificación de las políticas operacionales del Banco Mundial y BID aplicables bajo el enfoque común del FCPF
- Marco legal aplicable en Guatemala
- Lineamientos para el desarrollo de planes de pueblos indígenas

Objetivos y alcance

La implementación de la Estrategia Nacional REDD+ en Guatemala involucrará a los Pueblos Indígenas (PI) y comunidades indígenas. Con el fin de asegurarse que la Estrategia Nacional REDD+ no cause o mitigue impactos adversos a los PI, y se maximicen los impactos positivos, se desarrolló una Evaluación Estratégica Ambiental y Social (SESA por sus siglas en inglés) que incluyó la participación de comunidades indígenas, generando insumos relevantes para la preparación de este documento.

Durante el SESA, se ha determinado la activación de la Política Operacional 765 del BID para Pueblos Indígenas, así como el principio 21⁷¹ la PO 4.10 del Banco Mundial (de acuerdo al Enfoque Común del FCPF). Ambas políticas operativas, contemplan promover el diseño de proyectos/estrategias con la participación plena y efectiva de Pueblos Indígenas de manera que fomente el respeto pleno de la dignidad de pueblos indígenas, derechos humanos, conocimiento tradicional, singularidad cultural y diversidad de manera que se promuevan beneficios sociales y económicos y se eviten efectos adversos.

Asimismo, bajo el enfoque común del FCPF se establece la elaboración e implementación de un Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI) para establecer los principios, criterios e instrumentos que deberán aplicarse para atender los impactos específicos que se puedan generar durante la implementación de la Estrategia Nacional REDD+ una vez que sean definidas las acciones y lugares específicos para la implementación de cada acción REDD+.

El propósito del presente MPPI, es proporcionar una guía para las unidades y organizaciones participantes en la ejecución de acciones REDD+ para evitar los impactos negativos y

⁷¹ En el tema del reparto equitativo de los beneficios la **Política Operacional sobre Pueblos Indígenas (4.10) del BM** es más fuerte. Si un proyecto restringe el acceso de pueblos indígenas a áreas protegidas que éstos han utilizado tradicionalmente, el BM requiere que los pueblos indígenas “compartan equitativamente” los beneficios de dichas áreas protegidas. Principio 21 (página 10 PO 4.10): El marco de procedimiento establece las directrices para la elaboración, durante la ejecución del proyecto, de un plan de gestión de cada parque y zona protegida y asegura que los Pueblos Indígenas tomen parte en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de gestión, y que reciban una participación equitativa en los beneficios que generen los parques y las zonas protegidas.

maximizar los beneficios potenciales en relación a los Pueblos Indígenas, en conformidad con las políticas operacionales y la legislación nacional. Se hace notar que este MPPI aplica a todas las acciones REDD+ propuestas que no constituyan acciones de políticas y legislación, dado que para estas corresponde seguir los procesos estipulados en la legislación relevante para su aprobación.

Se subraya que Guatemala ya cuenta con un marco legal y arreglos institucionales que son la base para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la OP 4.10 del BM y 765 del BID, tal como resume la sub-sección 2.4.

Resumen de los potenciales impactos identificados a través del SESA relevantes a los pueblos indígenas

Esta sección proporciona un resumen de los potenciales impactos adversos derivados de la implementación de la Estrategia Nacional REDD+ sobre los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Estos impactos fueron extraídos del SESA, a través del cual se identificaron los potenciales impactos adversos priorizados de la implementación de las opciones REDD+. Se incluye esta sección para apoyar en la identificación de los impactos que requerirán la implementación de los Lineamientos para el desarrollo de planes de pueblos indígenas.

Estos impactos son el resultado del proceso del SESA desarrollado a través de un proceso participativo incluyendo pueblos indígenas y comunidades locales. Este proceso se describe en detalle en el documento SESA y el producto 16 de la consultoría que incluye la sistematización del proceso de consulta.

Opción 1: Armonización del marco de políticas, planes e instrumentos, de sectores vinculados al uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la gestión forestal-ambiental

Vinculado (pero no limitado)⁷² a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos.

Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques.

Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros.

- La armonización y priorización de políticas en respuesta a causas de la deforestación estructurales puede resultar incompatible con las economías locales o con prácticas tradicionales. Puede tener impactos negativos en la salud, la vivienda, empleo, educación y alimentación, en particular para los más vulnerables (comunidades rurales, especialmente mujeres y niños)

⁷² Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

- Cambios en la normativa vigente para la legalización de la tenencia de la tierra podría derivar en desplazamientos físicos o desalojos de comunidades locales y pueblos indígenas. Asimismo, la armonización de reformas de los regímenes de propiedad aumente la tensión e inseguridad por la tenencia de la tierra.

Opción 2: Fortalecimiento de las capacidades institucionales de vigilancia y protección forestal, operación de justicia y control de la tala ilegal

Vinculado (pero no limitado) ⁷³ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros.

Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas

- Detrimento a la economía local debido a reforzamiento de medidas de protección y control forestal sobre actividades de tala ilegal, si no se ofrecen medios de vida alternativos para operadores artesanales o ilegales. Esto puede también crear migraciones campo-ciudad.
- Exclusión o limitada participación de actores relevantes locales en actividades de vigilancia y protección forestal.
- Nuevo personal y tecnología podría reemplazar las formas tradicionales de actuar o transmitir conocimiento monitoreo de amenazas.

Opción 3: Promoción y Fortalecimiento del Ordenamiento Territorial en Guatemala

Vinculado (pero no limitado) ⁷⁴ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos.

Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques.

Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros

- Situaciones de reasentamiento y desalojo y/o limitaciones sobre el acceso y uso de tierras y recursos para Pls y comunidades locales. La falta de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra puede propiciar situaciones de desalojo de comunidades indígenas y no indígenas que no cuentan con un título registrado en áreas protegidas (solo su derecho consuetudinario).
- Falta de alternativas de subsistencia y pérdida de recursos económicos para comunidades locales y pueblos indígenas debido a cambios en la planificación territorial incompatibles con su economía local y prácticas *ancestrales*.

⁷³ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

⁷⁴ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

- Limitaciones y/o exclusión de productores y sectores económicos locales, grupos vulnerables y mujeres durante la planeación estratégica territorial, su implementación y seguimiento. Esto puede crear incompreensión, tensiones y conflicto.
- Falta de reconocimiento de los derechos colectivos e individuales sobre la tierra de los Pls sobre los territorios y recursos naturales sujeto a los cambios en el ordenamiento territorial. Esto puede afectar el esquema cultural de los pueblos indígenas del manejo del bosque y agricultura.
- Desplazamiento interno de las poblaciones más vulnerables (inmigración) por falta de alternativa de sobrevivencia humana, lo cual puede causar un desplazamiento de emisiones.

Opción 4: Fortalecimiento de los programas existentes y creación de nuevos mecanismos de incentivos para actividades (económicas y no económicas) de conservación, protección y manejo de los bosques, sistemas agroforestales y producción forestal energética

Vinculado (pero no limitado)⁷⁵ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos.

Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques.

Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros

- Limitación/exclusión de ciertos titulares de derechos para acceder a incentivos y mecanismos financieros, si deficiencias existentes no son abordados exitosamente⁷⁶. Asimismo, puede ser que no se incentivan a todas las personas u organizaciones que protegen el bosque natural, lo cual podría generar descontento y conflictos (inequidad).
- Reforzamiento/ resurgimiento de conflictos sociales asociados a estructuras de gobernanza internas débiles y/o no transparentes respecto del acceso a beneficios de los incentivos.

Opción 5: Desarrollo del marco regulatorio y la institucionalidad relacionada con el reconocimiento económico de los bienes y servicios ambientales, incluyendo el carbono forestal

⁷⁵ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

⁷⁶ Potenciales problemas para acceder al PINPEP: los poseedores de propiedades registradas son inelegibles, un problema particularmente para aquellos poseedores de tierras municipales registradas y los poseedores de tierras que llevan muchos (con frecuencia cientos) de años registradas, pero que nunca fueron ocupadas por el propietario inscrito. Potenciales problemas para acceder al PROBOSQUE: no vincula explícitamente la elegibilidad a una categoría de tenencia y al leerse junto con las exclusiones es difícil determinar qué comunidades, que no habrían sido elegibles para participar en PINPEP, sí se beneficiarían bajo estos criterios.

Vinculado (pero no limitado) ⁷⁷ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques.

- Detrimento a la economía local asociados a la falta de reconocimiento a la titularidad de los derechos de carbono, en particular, para PIs y comunidades locales.
- Falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades, en particular, en cuanto a los derechos de tenencia y uso de la tierra y recursos naturales, y los derechos al carbono forestal reducido en modelo concesionario y bosques comunales
- Limitaciones para la participación ciudadana durante el proceso de reconocimiento legal de los servicios ambientales asociados a los bosques

Opción 6: Fomento de actividades productivas y medios de vida compatibles con la conservación y manejo sostenible de los bosques y paisajes agroforestales

Vinculado (pero no limitado) ⁷⁸ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques.

- Limitaciones para la participación efectiva o incidencia de actores claves, en particular, pueblos indígenas y comunidades locales en la definición y priorización de actividades productivas, de conservación y uso sostenible de los recursos;
- Conflictividad social por la resistencia al cambio (Grupos productivos).
- Falta de equilibrio entre actividades productivas y de medios de vida tradicionales, que afecten las economías locales y prioricen a los sectores productivos.

Opción 7: Desarrollo e Implementación de una Estrategia para Uso Sostenible de Leña como fuente energética

Vinculado (pero no limitado) ⁷⁹ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos.

Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

⁷⁷ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

⁷⁸ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

⁷⁹ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros

- Desplazamiento forzoso y/o limitaciones sobre el acceso y uso de tierra y recursos para PIs y comunidades locales asociadas a vacíos de regularización de tenencia de la tierra, frente a potencial competencia por acceso a tierras y recursos para producción de energía.

Políticas operacionales del BID y BM aplicables bajo el enfoque común del FCPF

De acuerdo con el documento del Enfoque Común del FCPF, el BID deben alcanzar la “equivalencia sustancial”, lo cual significa equivalencia con las políticas los procedimientos de salvaguardas ambientales y sociales del BM aplicables al Fondo *Readiness* del FCPF; y que, si las políticas y los procedimientos de salvaguardas del BID son más rigurosos y/u ofrecen más protección que los del BM, el BID aplicará sus políticas y procedimientos a las actividades realizadas en el marco del Fondo *Readiness* del FCPF.

De acuerdo al BIC⁸⁰ y a un estudio independiente hecho para el FCPF⁸¹, la mayoría de los requisitos de las políticas de salvaguardas del BID son semejantes (o menos rigurosos) a los del Banco Mundial.

En relación a Pueblos Indígenas, bajo en enfoque común del FCPF y de acuerdo a estos estudios aplicaría la Política Operacional 765 del BID para Pueblos Indígenas (y su Guía Operativa). También aplicaría el Principio 21 de la PO 4.10⁸² que es más riguroso en el tema del reparto equitativo de los beneficios.

La Política Operacional 765 del BID para Pueblos Indígenas, establece que en los proyectos financiados por el Banco deben: a) Apoyar el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas, incluyendo el fortalecimiento de sus capacidades de gestión, y (b) Salvaguardar a los pueblos indígenas y sus derechos de impactos adversos potenciales, y de la exclusión en los proyectos de desarrollo financiados por el Banco.

La PO 765 sobre Pueblos Indígenas establece una serie de procedimientos y criterios para todos los proyectos propuestos para financiamiento por el Banco que afectan a Pueblos

⁸⁰ Políticas de Salvaguardia Socio Ambiental y Enfoque Común del FCPF, Bank Information Center, Agosto 2013.

http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Políticas-de-Salvaguardia-Socio-Ambiental-y-Enfoque-Comun-del-FCPF_BankInformationCenter_agosto2013.pdf

⁸¹ Independent Assessment of IDB's Background Information for the FCPF Common Approach to Environmental and Social Safeguards, 2011.

<https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2011/Summary%20Memo%20and%20Gap%20Analysis%20of%20IDB%20Background%20Info%20110603.pdf>

<http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2011/Summary%20Memo%20and%20Gap%20Analysis%20of%20IDB%20Background%20Info%20110603.pdf>

⁸² Si un proyecto restringe el acceso de pueblos indígenas a áreas protegidas que éstos han utilizado tradicionalmente, el BM requiere que los pueblos indígenas “compartan equitativamente” los beneficios de dichas áreas protegidas. Principio 21 (pagina 10 PO 4.10): El marco de procedimiento establece las directrices para la elaboración, durante la ejecución del proyecto, de un plan de gestión de cada parque y zona protegida y asegura que los Pueblos Indígenas tomen parte en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de gestión, y que reciban una participación equitativa en los beneficios que generen los parques y las zonas protegidas

Indígenas, y éstos son aplicables a todos sus componentes, independiente de la fuente de financiamiento.

Todos los proyectos propuestos para financiamiento del Banco en cuya área de influencia existan pueblos indígenas requieren de la realización de un proceso de consulta y negociación de buena fe con los afectados indígenas, independientemente de lo que sea requerido por la legislación nacional. Éste debe permitir un intercambio genuino para lograr un grado satisfactorio de apoyo por parte de los afectados indígenas al proyecto y a las medidas de mitigación y compensación asociadas. Estos procesos (que deben estar debidamente documentados) deben ser socioculturalmente apropiados y abarcar el diseño, análisis de alternativas, preparación, debida diligencia, y ejecución del proyecto. Además, deben ser consistentes con los mecanismos legítimos de toma de decisión de los pueblos o grupos indígenas afectados.⁸³

Es necesario constatar y documentar que las comunidades indígenas afectadas hayan dado amplio apoyo al proyecto, prestando especial atención a la evaluación social y a las actas y el resultado de las consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas afectadas. Proyectos con potenciales impactos adversos sobre pueblos indígenas deberán contar con acuerdos con los pueblos indígenas o grupos afectados.⁸⁴

La PO 765 del BID⁸⁵ precisa que (a) en los casos en que se identifiquen impactos adversos potenciales, el Banco requerirá y verificará que el proponente del proyecto incluya el diseño y la implementación de las medidas necesarias para minimizarlos o evitarlos, inclusive procesos de consulta y negociación de buena fe consistentes con los mecanismos legítimos de toma de decisión de los pueblos o grupos indígenas afectados, medidas de mitigación, monitoreo y compensación justa; y (b) en el caso de impactos potenciales adversos particularmente significativos, que impliquen un grado de alto riesgo para la integridad física, territorial o cultural de los pueblos o grupos indígenas involucrados, el Banco requerirá y verificará, además, que el proponente demuestre haber obtenido, mediante procesos de negociación de buena fe, los acuerdos sobre la operación y las medidas de manejo de los impactos adversos para respaldar, a juicio del Banco, la viabilidad socio cultural de la operación.

Al concluir la tarea de análisis, de deberá proporcionar:

- (a) el informe de evaluación sociocultural (que puede ser parte del EIA o EA);
- (b) los procesos de consulta y negociación suficientemente avanzados e indicando un grado de apoyo adecuado por parte de los pueblos indígenas afectados;
- (c) un borrador del conjunto de medidas o planes propuestos para mitigar los impactos adversos sobre los pueblos indígenas, es decir una propuesta de Esquema de Mitigación; y
- (d) cuando sean requeridos acuerdos, borradores o actas de negociaciones con los pueblos afectados.

Marco legal aplicable

⁸³ Guía Operativa sobre la PO 765 del BID, p. 17, lineamiento 2.34. b

⁸⁴ Guía Operativa sobre la PO 765 del BID, p. 17, lineamiento 2.34.c

⁸⁵ Política Operativa 765, p.17

Guatemala cuenta con un marco legal aplicable en materia de pueblos indígenas, por lo cual, el cumplimiento de las políticas señaladas se realizará a través del respeto de la normativas y políticas para pueblos indígenas del país, incluidos los compromisos asumidos con la ratificación del Convenio 169 de la OIT.

| | |
|--|---|
| <p>Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo</p> | <p>El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, además de ser un instrumento jurídico internacional, es parte del derecho interno guatemalteco, porque ha sido aprobado por el Congreso de la República, mediante Decreto Legislativo número 9-96 de fecha cinco de marzo de 1996 y publicado en el diario oficial el 28 de marzo del mismo año.</p> <p>Dicho convenio se establece sobre el marco de la protección a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial.</p> |
| <p>Constitución Política de la República de Guatemala.</p> | <p>La Carta Fundamental del Estado de Guatemala, se cimienta sobre la protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradición es, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.</p> |
| <p>Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto número 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala</p> | <p>La mencionada ley, parte de un Sistema de Consejos de Desarrollo, los cuales permiten ser el medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca.</p> |
| <p>Código Municipal, Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala</p> | <p>De acuerdo al mandato del Código Municipal, establece que las comunidades de los pueblos indígenas, son formas de cohesión social natural y como tales tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, debiendo inscribirse en el registro civil de la municipalidad correspondiente, con respeto de su organización y administración interna que se rige de conformidad con sus</p> |

| | |
|--|--|
| | normas, valores y procedimientos propios, con sus respectivas autoridades tradicionales reconocidas y respetadas por el Estado, de acuerdo a disposiciones constitucionales y legales. Además, contiene principios relacionadas a las Alcaldías indígenas, ya que el gobierno del municipio debe reconocer, respetar y promover las alcaldías indígenas, cuando éstas existan, incluyendo sus propias formas de funcionamiento administrativo. |
|--|--|

Definiciones en Guatemala

La siguiente sección presenta las definiciones relevantes a este marco en concordancia con el marco legal nacional y los lineamientos del BID. Se hace notar que el marco legal de Guatemala no prevé como tal definiciones a los siguientes términos, por lo tanto para efectos del ESFM se utilizarán los previstos en el BID.

Pueblo Indígena

De acuerdo al BID, pueblos indígenas, es un término que se refiere a los pueblos que cumplen los siguientes tres criterios: (i) son descendientes de los pueblos que habitaban la región de América Latina y el Caribe en la época de la Conquista o la colonización; (ii) cualquiera que sea su situación jurídica o su ubicación actual, conservan, parcial o totalmente, sus propias instituciones y prácticas sociales, económicas, políticas, lingüísticas y culturales; y (iii) se auto adscriben como pertenecientes a pueblos o culturas indígenas o precoloniales.

Derechos indígenas

De acuerdo al BID, Derechos indígenas incluyen los derechos de los pueblos y personas indígenas, ya sean originados en la legislación indígena emitida por los Estados, en la legislación nacional pertinente, en las normas internacionales aplicables y vigentes para cada país, o en los sistemas jurídicos indígenas,⁸⁶ que en su conjunto pasan a denominarse “las normas de derecho aplicables.” Se considerará a los sistemas jurídicos indígenas de acuerdo a las reglas para su reconocimiento establecidas en la legislación del país correspondiente. En ausencia de dichas reglas se reconocerá dichos sistemas siempre y cuando sean consistentes con la legislación nacional y no contradigan los derechos fundamentales establecidos en la legislación nacional y en las normas internacionales.

Gobernabilidad Indígena

De acuerdo al BID, gobernabilidad indígena se define como el ámbito de gestión de los pueblos indígenas que, dentro de la estructura de las normas de derecho aplicables y de los

⁸⁶ El concepto de sistema jurídico indígena, también conocido como derecho propio o interno, incluye las normas de origen, los derechos consuetudinarios, los usos y costumbres y los sistemas jurídicos y de justicia indígenas. Diecisiete de los 19 países con población indígena en América Latina y el Caribe reconocen el derecho consuetudinario. El Banco llevó a cabo una revisión exhaustiva y un análisis comparativo de la legislación pertinente a los pueblos indígenas en todos los países de la región que puede ser consultada en www.iadb/sds/ind.

Estados nacionales de los cuales dichos pueblos forman parte, y teniendo en cuenta las formas de organización propias de los pueblos indígenas, plantea el control de su propio desarrollo económico, social y cultural, la gestión interna de sus tierras y territorios en reconocimiento de la relación especial que existe entre el territorio y la identidad étnica y cultural, y una participación efectiva de los pueblos indígenas en el gobierno local, subnacional y nacional.

Desarrollo con identidad de los pueblos indígenas

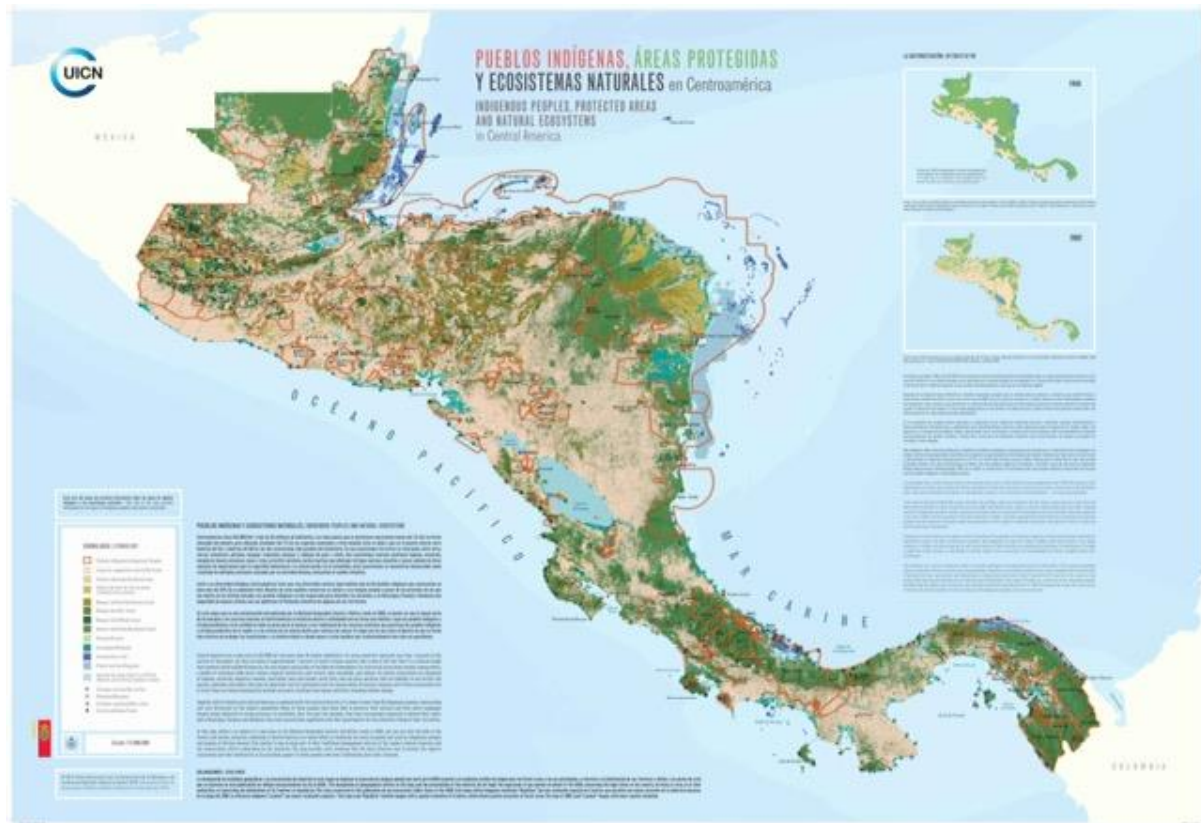
De acuerdo al BID, desarrollo con identidad de los pueblos indígenas se refiere a un proceso que comprende el fortalecimiento de los pueblos indígenas, la armonía con el medio ambiente, la buena administración de los territorios y recursos naturales, la generación y el ejercicio de autoridad, y el respeto a los valores y derechos indígenas, incluyendo derechos culturales, económicos, sociales e institucionales de los pueblos indígenas, de acuerdo a su propia cosmovisión y gobernabilidad. Este concepto se sustenta en los principios de equidad, integralidad, reciprocidad y solidaridad y busca consolidar las condiciones en que los pueblos indígenas y sus integrantes puedan contar con bienestar y crecer en armonía con su entorno, aprovechando para ello, según sus propias prioridades, el potencial de sus bienes culturales, naturales y sociales.

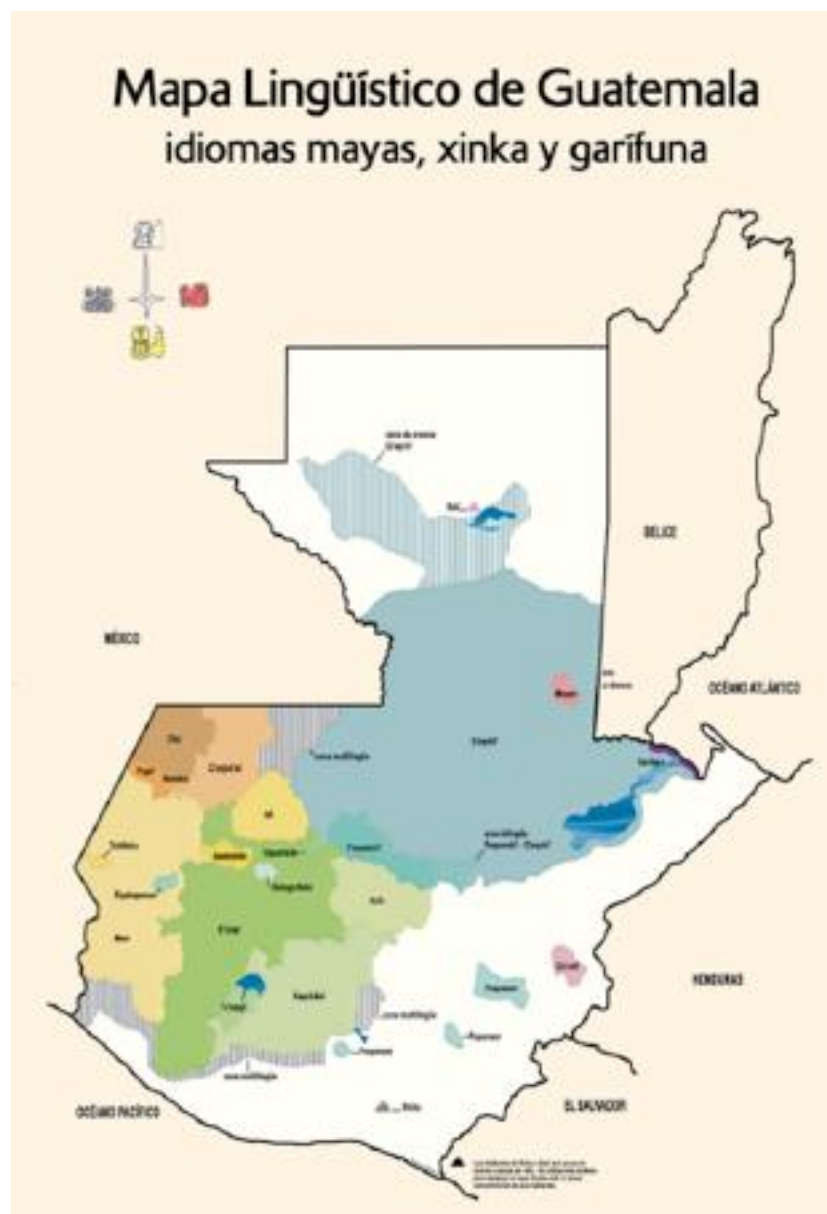
Comunidades campesinas

2.2. Pueblos indígenas en Guatemala

En Guatemala, a diferencia de otros países de la región, no existe una delimitación territorial de comunidades indígenas. Sin embargo, a fin de poder guiar la identificación respecto al área de influencia de cada pueblo indígena a continuación se presenta los siguientes mapas que presenta por una parte la identificación de los pueblos indígenas en Centroamérica, en el cual se ha identificado a la fecha 63 grupos indígenas ubicados a lo largo y ancho del istmo centroamericano.⁸⁷ Asimismo, se incluye el mapa lingüístico de Guatemala, que presenta principal de la distribución de los idiomas indígenas de Guatemala, mediante el cual se visualizar la zona núcleo de habla y la dispersión de sus hablantes.

⁸⁷ Descripción del Mapa de Pueblos Indígenas, Áreas Protegidas y Ecosistemas Naturales en Centroamérica elaborado por IUCN, 2017





LEGISLACIÓN RELEVANTE A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

En materia de Derecho a la tenencia y posesión de la tierra

En cuanto a la tenencia de la tierra, el artículo 109 del Código Municipal Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, regula las tierras comunitarias y establece que: “El gobierno municipal establecerá previa consulta con las autoridades comunitarias, los mecanismos que garanticen a los miembros de las comunidades el uso, conservación y administración de las tierras comunitarias cuya administración se haya encomendado tradicionalmente al gobierno municipal; en todo caso, los mecanismos deben basarse en lo indicado en el Título IV, capítulo I de este Código.”⁸⁸

Asimismo, la Ley de Registro de Información Catastral –RIC- Decreto número 41-2005, en su artículo 23 inciso y), define “**tierras comunales, las tierras en propiedad, posesión o tenencia**

⁸⁸ Código Municipal Decreto 12-2002

de comunidades indígenas o campesinas como entes colectivos, con o sin personalidad jurídica. Además, forman parte de estas tierras aquellas que aparecen registradas a nombre del Estado o de las municipalidades, pero que tradicionalmente han sido poseídas o tenidas bajo el régimen comunal. Continúa indicando la normativa en su artículo 65 Tierras comunales. Si durante el proceso de establecimiento catastral se determina la propiedad, posesión o tenencia comunal de tierras, el RIC reconocerá y hará la declaratoria administrativa de tierra comunal y emitirá las certificaciones para lo que sea conducente y, en su caso, ordenar el registro.⁸⁹ El Registro de Información Catastral deberá sujetarse a lo regulado por la Constitución Política de la República en sus artículos 66 y 67.

La relación que existe entre las comunidades de pueblos indígenas y el territorio, ha sido protegido en primera instancia por mandato constitucional, ya que la misma parte de la protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Por ello, las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozan de protección especial por parte del Estado, debiendo proporcionar asistencia crediticia y de técnica preferencial, **que pueda garantizar su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.**

De lo anterior, se parte que el Estado deba proteger y manejar las tierras comunales bajo un sistema que permita poder garantizar el derecho de ejercer todas o algunas facultades inherentes al dominio de las tierras comunales, bajo la premisa de derechos de posesión existentes. Por ello, resulta imperioso recalcar, que así como el Estado puede proteger las tierras comunales y dotarlas de protección especial, cabe por disposición constitucional la acción de expropiación, procediendo la misma por “utilidad o necesidad pública o interés social”. La acción de expropiación se encuentra regulada por el Decreto Número 529 del Congreso de la República de Guatemala, estableciendo que dicha acción procede para todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o espiritual.

La declaración a que se refiere el objeto de esa Ley, debe realizarse con referencia precisa, siempre que fuere posible, a los bienes afectados, determinando el objeto de la expropiación con términos que no permitan extender la acción expropiatoria a otros bienes que a aquellos que sean necesarios para lograr la satisfacción colectiva que se procura llevar a cabo.

Cabe mencionar que la expropiación debe limitarse a la porción necesaria para construir la obra pública o satisfacer la necesidad colectiva, salvo el caso de que para su realización o su financiación, sea necesaria la expropiación de todo el bien o de una porción mayor, o de otro bien adyacente, extremos que deberán ser establecidas en la declaración respectiva.

En materia de Derecho de consulta

En la legislación guatemalteca se encuentran regulados varios tipos de consultas, algunas están normadas por la Constitución Política de la República y otras en leyes ordinarias como el Código Municipal, la Ley de registro de información catastral, la Ley de Consejos de

⁸⁹ Ídem.

Desarrollo Urbano y Rural, y el Convenio 169 de la OIT como instrumento jurídico internacional y como norma de derecho interno aprobado mediante el Decreto número 9-96 del Congreso de la República de Guatemala.

En la Constitución Política de la República, en su artículo 173 se encuentra regulado un procedimiento consultivo sobre “las decisiones políticas de especial trascendencia que deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos”⁹⁰. Esta “consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral TSE a iniciativa del presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos. La Ley Constitucional Electoral regulará lo relativo a esta institución”.⁹¹ Y en el artículo 280 está regulada la consulta popular específicamente para las reformas constitucionales.

En el Código Municipal Decreto número 12-2002 del Congreso de la República encontramos otras regulaciones de consultas, referentes a asuntos de gran trascendencia para el municipio o cuando se refiere a asuntos de carácter general que afecte a todos los vecinos del municipio. Estas consultas pueden ser de oficio por los gobiernos municipales o a petición de los vecinos. El artículo 17 Derechos y Obligaciones de los vecinos, inciso k) establece: “Pedir la consulta popular municipal en los asuntos de gran trascendencia para el municipio, en la forma previsto por este Código”, asimismo, en el artículo 63 regula lo relativo a la “Consulta a vecinos, que procede cuando la trascendencia de un asunto aconseje la conveniencia de consultar la opinión de los vecinos, el Concejo Municipal, con el voto de las dos terceras partes del total de sus integrantes, podrá acordar que tal consulta se celebre..., y el artículo 64 establece la consulta a solicitud de los vecinos. Los vecinos tienen el derecho de solicitar al concejo municipal la celebración de consulta, cuando se refiere a asuntos de carácter general que afecten a todos los vecinos del municipio. La solicitud deberá contar con la firma de por lo menos el diez por ciento de los vecinos empadronados en el municipio y los resultados serán vinculantes si participan en la consulta al menos el 20% de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto consultado.”⁹²

En el artículo 65 se refiere a “**Consulta a las comunidades o autoridades indígenas del municipio**”, indica que la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias. El concejo municipal realizará consultas a solicitud de las comunidades o autoridades indígenas, inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas”.⁹³

El artículo 109 “Tierras comunitarias. El gobierno municipal establecerá previa consulta con las autoridades comunitarias, los mecanismos que garanticen a los miembros de las comunidades el uso, conservación y administración de las tierras comunitarias cuya administración se haya encomendado tradicionalmente al gobierno municipal...”.⁹⁴ Y en el artículo 66 se establecen las modalidades y mecanismos de cómo realizar y desarrollar las consultas normadas en el artículo 64 y 65 de este Código, que pueden ser mediante boleta

⁹⁰ Artículo 173, Constitución Política de la República.

⁹¹ Ídem.

⁹² Artículos 17, 63 y 64 del Código Municipal decreto 12-2002.

⁹³ Artículo 65 del Código Municipal decreto 12-2002.

⁹⁴ Ídem.

diseñada técnica y específicamente para el caso, fijando en la convocatoria el asunto a tratar, la fecha y los lugares donde se llevará a cabo la consulta. Asimismo, la aplicación de criterios del sistema jurídico propio de las comunidades indígenas sujetos de derechos y finalmente los resultados serán vinculantes si participa en la consulta al menos el cincuenta por ciento de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto consultado.⁹⁵

El marco legal guatemalteco define a las autoridades indígenas como entidades representativas de las comunidades, instituyéndose y reconociéndose las mismas como vínculo de relación con el gobierno municipal.

Por otra parte, la Ley de Registro de información catastral –RIC, contenida en el Decreto número 41-2005, define la consulta en su artículo 2 Definiciones. Inciso e) **Consulta:** Es el proceso que el RIC debe realizar para garantizar la participación de las comunidades indígenas y campesinas, previamente informado, para recabar su consentimiento libre e interés de que los predios en los que ejercen propiedad, posesión o tenencia, sean reconocidos y declarados tierras comunales, incorporando las recomendaciones, sugerencias y demandas que sobre el tema consultado formulen dichas comunidades.⁹⁶ Este artículo fundamenta jurídicamente la salvaguarda del Consentimiento Libre, Previo e Informado en relación a la propiedad, posesión y tenencia de la tierra.

De igual manera, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en sus disposiciones generales artículo 26 establece: ***“Consulta a los Pueblos indígenas. En tanto se emite la ley que regula la consulta de los Pueblos indígenas, las consultas a los Pueblos Maya, Xinka y Garífuna sobre medidas de desarrollo que impulsa el Organismo Ejecutivo y que afecten directamente a estos Pueblos, podrán hacerse por conducto de sus representantes en los consejos de desarrollo.”***⁹⁷

En materia de Participación de los Pueblos indígenas

En la normativa ordinaria, principalmente la trilogía de leyes (Código Municipal, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y la Ley General de Descentralización) se encuentra algunas normativas específicas del derecho a la participación de los Pueblos indígenas en la toma de decisiones en el ámbito municipal. El Código Municipal Decreto número 12-2002, en su artículo 17, establece los derechos y obligaciones de los vecinos: ... principalmente en los incisos siguientes: “f) Participar activa y voluntariamente en la formulación, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas municipales y comunitarias; j) Participar en las consultas a los vecinos de conformidad con la Ley, y el k) Pedir la consulta popular municipal en los asuntos de gran trascendencia para el municipio, en la forma prevista por este Código”.⁹⁸ Al igual que los conceptos de ciudadanía y Pueblo, el concepto de vecinos que establece este Código, incluye a los Pueblos indígenas (Maya, Xinka y Garífuna), principalmente en las comunidades y municipios en donde la población indígena constituye más del 80% de la población total de las comunidades y municipios del país.

⁹⁵ Artículo 66 del Código Municipal decreto 12-2002.

⁹⁶ Ley de registro de información catastral –RIC- Decreto 41-2005

⁹⁷ Ley de consejos de desarrollo urbano y rural

⁹⁸ Artículo 17, Código Municipal decreto 12-2002.

En este mismo Código, encontramos el reconocimiento jurídico de las autoridades tradicionales propias de las comunidades, las alcaldías indígenas, alcaldías comunitarias o alcaldías auxiliares como instituciones propias de los Pueblos indígenas, dentro de las cuales se desarrolla un sistema de gobernanza forestal, porque dentro de la estructura de este sistema de autoridades comunitarias y pueblos indígenas, existen autoridades responsables del cuidado de los bosques comunitarios o bosques municipales, denominados guardabosques. En el artículo 8 establece los elementos básicos que integran el municipio, en donde se encuentran dos elementos fundamentales de salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas: literal c. “La autoridad ejercida en representación de los habitantes, tanto por el Concejo Municipal como **por las autoridades tradicionales propias de las comunidades de su circunscripción**; y en la literal f. **El ordenamiento jurídico municipal y el derecho consuetudinario del lugar**”.⁹⁹ En los artículos 55 y 56 se reconoce a las Alcaldías Indígenas y las Alcaldías comunitarias o alcaldías auxiliares, en donde establece: que “el gobierno del municipio debe reconocer, respetar y promover las alcaldías indígenas...; y **reconocerá a las alcaldías comunitarias o alcaldías auxiliares, como entidades representativas de las comunidades, en especial para la toma de decisiones** y como vínculo de relación con el gobierno municipal”.¹⁰⁰ Y el artículo 58 establece las atribuciones del alcalde comunitario o alcalde auxiliar, en su respectiva circunscripción, las siguientes: “a) Promover la organización y la participación sistemática y efectiva de la comunidad en la identificación y solución de los problemas locales; b) Colaborar en la identificación de las necesidades locales y en la formulación de propuestas de solución a las mismas; c) Proponer lineamientos e instrumentos de coordinación en la comunidad para la ejecución de programas o proyectos por parte de personas, instituciones o entidades interesadas en el desarrollo de las comunidades”.¹⁰¹

Por otra parte, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, decreto 11-2002, en su artículo 1. Naturaleza, establece que: “**El Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de participación de la población Maya, Xinka, Garífuna y la no indígena, en la gestión pública** para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca”.¹⁰² En los diferentes niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la Ley establece el número de espacios de representación de los Pueblos indígenas de la siguiente manera: “en el Consejo Nacional de Desarrollo CONADUR, cuatro representantes de los pueblos Maya, uno Xinka y un Garífuna (Artículo 5 inciso g); en el Consejo Regional de Desarrollo CORETUR, un representante de cada uno de los pueblos indígenas que habitan en la región (Artículo 7. Inciso f); en el Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE, Un representante de cada uno de los Pueblos indígenas que habiten en el departamento (Artículo 9. Inciso e); y en el Consejo Municipal de Desarrollo, los representantes de los consejos comunitarios de desarrollo, el número de espacios de representación depende del número de cantones y aldeas que tiene cada municipio (Artículo 11. Inciso c). Además, el artículo 23 de la misma Ley, establece la conformación de “Consejos Asesores Indígenas en los niveles comunitarios, para brindar asesoría al órgano de coordinación del Consejo comunitario y Consejo Municipal de Desarrollo, en donde exista al menos una comunidad indígena. Los Consejos Asesores indígenas se integrarán con las

⁹⁹ Artículo 8 del Código Municipal decreto 12-2002.

¹⁰⁰ Artículos 55 y 56 del Código Municipal decreto 12-2002.

¹⁰¹ Código Municipal decreto 12-2002.

¹⁰² Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, decreto 11-2002.

propias autoridades reconocidas por las comunidades indígenas de acuerdo a sus propios principios, valores, normas y procedimientos”.¹⁰³

También la Ley General de Descentralización, Decreto número 14-2002, establece algunas normativas de salvaguardas a los derechos de los Pueblos indígenas, como el “respeto a la realidad multiétnica, pluricultural y multilingüe de Guatemala, en el artículo 4.4; la participación ciudadana en el artículo 4.9; Facilitar la participación y control social en la gestión pública, artículo 5.4; La participación ciudadana... en la planificación, ejecución y control integral de las gestiones del gobierno nacional, departamental y municipal para facilitar el proceso de descentralización, artículo 17; y la Fiscalización social en donde las comunidades organizadas conforme a la Ley, tendrán facultad para realizar la auditoria social de los programas de descentralización que se ejecuten en sus respectivas localidades y en los que tengan participación directa, ya sea en el ámbito municipal, departamental, regional o nacional. En caso necesario solicitarán a la Contraloría General de Cuentas la práctica de la auditoria que corresponda, cuyo resultado deberán serle informados dentro del plazo de treinta días..., artículo 19.”¹⁰⁴

Lineamientos para el desarrollo de planes de pueblos indígenas

A continuación, se presentan lineamientos para el desarrollo de planes de pueblos indígenas (PPIs) en Guatemala a implementar durante la implementación de acciones REDD+ enmarcadas en la Estrategia Nacional REDD+ que se desarrollen en áreas con presencia de Pueblos Indígenas y puedan afectarlos.

Este protocolo deberá ser aplicado por todo actor/sector que lleve a cabo acciones REDD+ en el país. El GCI estará a cargo de supervisar la implementación de este marco.

a) Confirmación de presencia de Pueblos Indígenas en la zona de la implementación de las acciones REDD+ propuestas

La confirmación de presencia de Pueblos Indígenas en la zona de la implementación de las acciones REDD+ propuestas se ejecutarán de acuerdo a los criterios establecidos en la OP 761 del BID¹⁰⁵, y los señalados en la normativa nacional (sección 2.4.) incluyendo la identificación de personas, comunidades y asociaciones indígenas.

Específicamente, el procedimiento de identificación considerará los siguientes pasos:

- a) Todas las áreas prioritarias identificadas como candidatas a ejecutar acciones REDD+ que tengan comunidades indígenas, serán visitadas por el técnico(a) encargado(a) de la implementación del ESMF en la Unidad/ Secretaría de REDD+; y para ello se contactará a los representantes de las asociaciones de pueblos indígenas y a las autoridades territoriales pertinentes, se les enviará una notificación para informarles que serán visitados con el objetivo de que inviten a líderes, lideresas e instituciones representantes de su comunidad para analizar las acciones de la Estrategia Nacional

¹⁰³ Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, decreto 11-2002.

¹⁰⁴ Ley General de Descentralización decreto 14-2002.

¹⁰⁵ P. 11 OP761 BID

REDD+ planificadas para la implementación en la zona de su comunidad. Durante la visita, los participantes podrán exponer sus puntos de vista con respecto a las acciones de la Estrategia Nacional REDD+, los cuales serán debidamente considerados.

- b) Durante la visita, el técnico(a) responsable de la implementación del ESMF, considerará los siguientes aspectos:
- a. ¿Las acciones REDD+ propuestas están ubicadas en una zona geográfica físicamente próxima a tierras o territorios indígenas?
 - b. ¿Las acciones REDD+ propuestas están ubicadas en una zona geográfica o medio socioeconómico donde hay presencia de pueblos o personas indígenas o donde pueden existir interacciones, físicas, sociales, culturales o económicas con grupos indígenas?
 - c. ¿Las acciones REDD+ propuestas tienen el potencial de ocasionar impactos adversos (directos o indirectos, o cumulativos) sobre los pueblos indígenas, sus derechos o su patrimonio, individuales o colectivos?
 - d. ¿Las acciones REDD+ propuestas contemplan facilidades o instalaciones asociadas que presentan riesgos de impactos adversos sobre los pueblos indígenas, sus derechos o su patrimonio, individuales o colectivos que podrían afectar viabilidad socio-cultural de las acciones?
- c) Durante la visita el técnico(a) responsable de la implementación del ESMF, recopilará la información relativa a: (i) Los nombres de las organizaciones representativas por territorio y PI afectado; (ii) El número total de indígenas afectados; si el área priorizada incluye territorios indígenas y tierras privadas simultáneamente se deberá (iii) Calcular el porcentaje de territorios indígenas afectados y su correspondiente población, (iv) los aspectos cubiertos en el punto b) descritos anteriormente.
- d) Si los resultados confirman que hay territorios indígenas en las áreas prioritarias para la ejecución de acciones REDD+, se planificará una evaluación sociocultural de dichas acciones para los correspondientes pueblos indígenas (utilizando como base los resultados del SESA).

b) Evaluación sociocultural y Esquema de mitigación

Una vez confirmada la presencia de PIs en las áreas prioritarias para la ejecución de acciones REDD+, se llevará a cabo una evaluación sociocultural de las acciones REDD+ propuestas tomando como base los resultados del SESA, y el que considerará los siguientes pasos:

- a) Si se confirma la presencia de Pueblos Indígenas en las áreas prioritarias establecidas para la implementación de las acciones REDD+ o de un apego colectivo de esos pueblos a dicha zona, el técnico(a) encargado(a) de la implementación del ESMF y el correspondiente MPPI se asegurará que se lleve a cabo una evaluación sociocultural de acuerdo con los requisitos estipulados en la OP 761¹⁰⁶, y los señalados en la normativa nacional (sección 2.4.), para determinar los posibles impactos positivos o negativos de las acciones de la Estrategia Nacional REDD+ sobre los Pueblos Indígenas, y para examinar alternativas de mitigación o compensación cuando los efectos negativos puedan ser importantes.

¹⁰⁶ OP 761 del BID, p.11, Guía Operativa de la OP 761, punto 2.34 a

- b) El técnico(a) encargado(a) de la implementación del ESMF y el correspondiente MPPI ejecutará directamente la evaluación sociocultural o podrá contratar a especialistas. Si se contempla la contratación de especialistas, el técnico(a) encargado(a) de la implementación del ESMF y el correspondiente MPPI deberá: a) Preparar los términos de referencia para la evaluación sociocultural (ver elementos claves en punto D más abajo), asegurándose, especialmente, que permitan la participación en la misma de los Pueblos Indígenas afectados, y b) determinar las calificaciones y la experiencia de los especialistas en ciencias sociales que llevarán a cabo la evaluación sociocultural.
- c) El técnico(a) encargado(a) de la implementación del ESMF realiza los correspondientes trámites de contratación de la consultoría, de ser aplicable.
- d) La evaluación sociocultural deberá determinar los posibles impactos positivos o negativos de las acciones REDD+ sobre los Pueblos Indígenas e identificar alternativas de mitigación para los impactos adversos. El ámbito y proceso de esta evaluación abarca:
- a. Un análisis preliminar de escritorio, de informes existentes solicitados de las agencias gubernamentales del país y el Banco, y otras fuentes de información obtenida de fuentes secundarias idóneas (incluyendo organizaciones indígenas, publicaciones, universidades, y ONGs). Se recopila y analiza información sobre las características demográficas, sociales, culturales y políticas de los pueblos indígenas involucrados, y sobre la tierra y los territorios que poseen tradicionalmente, o que usan u ocupan habitualmente, y los recursos naturales de los que dependen. Este análisis incluirá una identificación de antecedentes respecto a conflictos existentes o potenciales sobre la propiedad de la tierra que puedan involucrar a pueblos indígenas en dicho territorio. Dichos antecedentes pueden incluir reclamaciones formales, informales y procesos de regularización en desarrollo, así como acceso y uso de recursos de áreas protegidas. Asimismo, se deberá documentar las formas de toma de decisiones y los mecanismos de participación de los pueblos indígenas identificados, y que serán considerados para asegurar que los Pueblos Indígenas logren participar de manera eficaz en la evaluación sociocultural, incluyendo la recolección de sus insumos (como se menciona en el punto siguiente).
 - b. La evaluación preliminar resultará en una: (a) identificación de los temas prioritarios que deben investigarse a fondo; y (b) determinación de las metodologías de evaluación sociocultural y consulta, y según sean aplicables negociación y acuerdo, que deben realizarse como parte de la evaluación socio cultural. La priorización de los temas a fondo considerara ciertas preguntas relevantes:
 - i. **En cuanto a potenciales impactos positivos**
 - ¿Podría la acción REDD+ contribuir a visibilizar o mejorar la comprensión de la temática indígena, incluyendo demandas y necesidades indígenas?;

- ¿Ofrece la acción REDD+ oportunidades para desarrollar soluciones socio- culturalmente apropiadas para mejorar la disponibilidad y calidad de los servicios sociales, particularmente de salud y educación para los pueblos indígenas (tales como educación intercultural bilingüe, articulación de sistemas médicos, etc.) ?;
- ¿Presenta la acción REDD+ oportunidades para reconocer, articular e implementar los derechos indígenas contemplados en las normas de derecho aplicables o mejorar dicha normativa?;
- ¿Podría la acción REDD+ apoyar la cultura, la identidad, el idioma, las artes y técnicas tradicionales, los recursos culturales de los pueblos indígenas?;
- ¿Ofrecería la acción REDD+ el potencial para fortalecer los procesos de legalización y administración física de los territorios, las tierras y los recursos naturales tradicionalmente ocupados o aprovechados por los pueblos indígenas, de conformidad con las normas de derecho aplicables?;
- ¿La acción REDD+ lidia con el manejo o gestión de áreas protegidas? De ser así, se cuenta con los mecanismos apropiados de consulta, ¿de participación en la gestión de los recursos naturales y de participación en los beneficios por parte de los pueblos indígenas en cuyas tierras y territorios la acción se desarrolle?;
- ¿Podría la acción REDD+ apoyar iniciativas socio-culturalmente apropiadas para mejorar el acceso de los pueblos indígenas a los mercados financieros, productivos y laborales, la asistencia técnica y las tecnologías de información?;
- ¿Tiene la acción REDD+ el potencial de apoyar la gobernabilidad de los pueblos indígenas mediante el fortalecimiento de las capacidades, las instituciones y los procesos de gestión, toma de decisiones y administración de las tierras y territorios en los ámbitos local, nacional y regional de acuerdo a las normas de derecho aplicables?;
- ¿Podría la acción REDD+ apoyar la participación, liderazgo y protección de las mujeres, los ancianos, los jóvenes, y los niños y la promoción de la igualdad de derechos?;
- ¿Ofrece la acción REDD+ oportunidades para fortalecer la capacidad institucional de los pueblos indígenas?;

ii. En cuanto a potenciales impactos negativos

- ¿Podría la acción REDD+ afectar negativamente la seguridad física y alimentaria, tierras, territorios, recursos, sociedad, derechos, economía tradicional, forma de vida e identidad o integridad cultural de los pueblos indígenas?;
- ¿Afectaría negativamente el estatus legal, la posesión o la gestión de los territorios, las tierras o los recursos naturales

tradicionalmente ocupados o aprovechados por los pueblos indígenas?;

- ¿Existen factores en el contexto de la acción REDD+ que podrían impedir o dificultar en forma discriminatoria el acceso de los indígenas a los beneficios de REDD+?;
- ¿Podría la acción REDD+ afectar negativamente la cultura, identidad, idioma y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas?;
- ¿Trata el proyecto del desarrollo comercial de recursos culturales y conocimientos indígenas? (vi)
- ¿Podría afectar a pueblos indígenas aislados, no-contactados o recientemente contactados?

- c. El análisis preliminar será complementado a través de visitas a terreno, y siempre que sea posible, el equipo consultor obtendrá los insumos directamente de los pueblos indígenas potencialmente afectados por la acción REDD+. De preferencia, estos insumos deberían incluir entrevistas a personas seleccionadas, u otros métodos de obtener información directa de los afectados (en conformidad con las metodologías definidas para la consulta). En su defecto, o para complementar la información así adquirida, se pueden emplear fuentes secundarias idóneas de información que permitan obtener la gama de opiniones de los pueblos afectados.
- d. Preparación de PPIs. Los PPI deben prepararse de manera flexible y pragmática, y su nivel de detalle variará dependiendo de las características de cada acción REDD+ a implementar y la naturaleza de los efectos que se vayan a abordar. Los PPIs deberán considerar los siguientes elementos:
- . Una revisión y actualización (en caso de que sea necesario) del marco jurídico e institucional aplicable a los PIs
 - . descripción de la acción REDD+;
 - . Una breve descripción de la información levantada durante la evaluación sociocultural respecto a las características demográficas, sociales, culturales y políticas de los pueblos indígenas afectados, la tierra y los territorios, incluyendo aquellos que se encuentran regularizados, así como aquellos que son objeto de reclamo y las áreas que sean de uso tradicional. Esta descripción incluirá también los principales recursos disponibles en el área (incluyendo áreas protegidas) que sean utilizados por la comunidad.
 - . Un resumen de la evaluación sociocultural, incluyendo una descripción de los potenciales impactos adversos y positivos de las acciones REDD+ para pueblos indígenas,
 - . Cuando sea aplicable, la descripción de las oportunidades para potenciar impactos positivos;
 - . Propuesta de las medidas necesarias para evitar impactos adversos —o, si las medidas no son factibles, la identificación de las medidas necesarias para reducir lo más posible, mitigar o compensar dichos impactos desde el punto de vista cultural;

- . Un resumen de los resultados de la consulta libre, previa e informada (ver sección 2.5.3) con las comunidades de los Pueblos Indígenas afectados que se realizó durante la preparación del PPI
- . El estimado de los costos, cronograma y el plan de financiamiento para el PPI.
- . Definición del equipo a cargo de la implementación del PPI, incluyendo responsabilidades de los equipos regionales de implementación en los casos que corresponda.
- . Procedimientos para el monitoreo y evaluación de la implementación del PPI. Este monitoreo deberá considerar la evaluación de la pertinencia de las metodologías utilizadas para la implementación de las medidas de gestión y otras estrategias a implementar, seguimiento al cumplimiento de acuerdos generados, tiempo, ejecución de recursos e idoneidad de los equipos a cargo de la implementación de los PPI y otros elementos de acuerdo a lo mencionado más adelante.

El documento final del PPI incluirá los acuerdos y modificaciones (si corresponde) resultado de la consulta previa, libre e informada del PPI (ver sección 2.5.3), así como la explicación del amplio apoyo de los pueblos indígenas involucrados.

c) Consulta, aprobación y acuerdos de los PPIs

Como se mencionó en la sección de objetivos y alcances del MPPI, para aquellas acciones REDD+ de índole legislativa y de política corresponde llevar a cabo un proceso de consulta de acuerdo a lo estipulado en la legislación nacional relevante. Para todas las otras acciones REDD+ contempladas aplica este MPPI y se deberán realizar procesos de consulta de los PPIs, de acuerdo a lo estipulado en el presente documento.

De acuerdo con la PO 761 del BID¹⁰⁷, la aprobación de cada PPIs requerirá implementar procesos socio-culturalmente apropiados y efectivos de consulta con dichos pueblos; con miras a evaluar y diseñar las medidas de mitigación mediante negociaciones de buena fe con las comunidades indígenas afectadas. Además, deben ser consistentes con los mecanismos legítimos de toma de decisión de los pueblos o grupos indígenas afectados.

Las actividades de consulta en el diseño (ver sección 2.5.2.) y aprobación de los PPIs deberán considerar los siguientes elementos:

- i. Identificación de partes interesadas y afectadas en los pueblos indígenas, procurando una participación inclusiva en términos intergeneracionales y de género. La identificación deberá considerar a todas las organizaciones existentes al interior de la comunidad, así como otras organizaciones que sean señaladas por ellas, además de aquellos miembros que no residan en el área de influencia pero que sean parte de la comunidad.

¹⁰⁷ Guía Operativa sobre la PO 765 del BID, p. 17, punto 2.34. b

- ii. Definición en conjunto con las partes interesadas de metodología para el desarrollo de las actividades de consulta de manera de garantizar que sean pertinentes a la realidad de cada comunidad y diseño de un plan de trabajo a ser consensuado con la comunidad que incluya las distintas actividades, incluyendo el proceso de convocatoria, preparación de materiales que incluyan toda la información necesaria respecto a la acción REDD+, desarrollo de talleres y reuniones, sistematización de la información y generación de recomendaciones.
- iii. Desarrollo de las actividades de consulta, con especial consideración para garantizar la participación de mujeres y jóvenes. En el caso de la aprobación de los PPIs, la consulta debe considerar la entrega previa de información detallada del PPI, en particular sobre los potenciales impactos y medidas de gestión consideradas para su manejo y mitigación. En este ámbito se prestará especial atención a aquellas que puedan generar aspectos asociados a reasentamiento involuntario en cualquiera de sus formas a la hora de explicar los posibles efectos y medidas que se pueden implementar para su prevención y/o mitigación.
- iv. Definición, validación y documentación de acuerdos con la comunidad, incluido el explicitación del amplio apoyo comunitario. Los proyectos cuyos impactos potenciales adversos sobre pueblos o grupos indígena sean significativos deben contar con acuerdos con los pueblos o grupos afectados al finalizarse el proceso de consulta y negociación.
- v. Realización de nuevas actividades de consulta según se haya definido con la comunidad, durante la implementación de la acción REDD+.

El informe de la consulta sobre la aprobación del PPI deberá dejar constancia de los siguientes elementos:

- 1. Actividades realizadas, participantes (incluyendo información desagregada por género y jóvenes) y metodología de talleres.
- 2. Acuerdos generados respecto a medidas de gestión sobre potenciales impactos, incluyendo recomendaciones y modificaciones requeridas para el desarrollo de la acción REDD+.
- 3. Otros acuerdos relevantes generados con la comunidad y plan de acción para su implementación, si corresponde.
- 4. Explicación del amplio apoyo comunitario

La implementación/supervisión de la consulta estará a cargo del técnico(a) encargado(a) de la implementación del ESMF y el correspondiente MPPI. El técnico(a) encargado(a) de la implementación del ESMF examina la documentación sobre la evaluación social y el proceso de consulta, para constatar que durante el proceso se ha obtenido un amplio apoyo de los representantes de los Pueblos Indígenas, conforme se establece en la OP 4.10 y 761, y los señalados en la normativa nacional (sección 2.4.).

2.2. Marco para reasentamiento involuntario

Esta sección se estructura de la siguiente manera:

- Objetivos y alcance del marco;
- Resumen de los potenciales impactos identificados a través del SESA y que son relevantes a reasentamiento involuntarios o y/o restricción y pérdida de acceso a recursos naturales;
- Identificación de las políticas operacionales del Banco Mundial y BID aplicables bajo el enfoque común del FCPF;
- Marco legal aplicable en Guatemala; y
- Lineamientos para el desarrollo de planes de reasentamiento

Objetivos y alcance

Durante el proceso de evaluación de la Estrategia Nacional REDD+ a través del SESA, se ha determinado la activación de la Política Operacional OP 710 de Reasentamiento Involuntario del BID. Si bien la Estrategia Nacional REDD+ no considera opciones estratégicas, actividades o acciones REDD+ que impliquen reasentamiento involuntario, es posible que durante su implementación se generen desplazamientos, traslados, reubicaciones o restricciones que, tal y como establece la OP, generen la privación involuntaria de tierras que de por resultado el desplazamiento o pérdida de la vivienda, la pérdida de los activos o del acceso a los activos, o la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia que resulten en el traslado de personas a otros lugares.

El presente documento presenta un Marco de Políticas de Reasentamiento Involuntario (MPRI), cuyo fin es establecer los lineamientos y procedimientos que guiarán las medidas a tomar en caso que sea necesario adquirir o utilizar tierras, ya sea de manera total o parcial, en el marco de la implementación de las acciones REDD+, y, por consiguiente, elaborar un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI).

Se destaca que la implementación de la Estrategia Nacional REDD+ tiene carácter nacional, por lo cual se estará ejecutando en todo el país incluyendo en territorios indígenas. Por lo tanto, el Marco de Reasentamiento Involuntario establece los principios y procedimientos que deben seguirse si se determina que las acciones REDD+ provocarán un reasentamiento involuntario.

Se subraya que Guatemala ya cuenta con un marco legal y arreglos institucionales que son la base para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la OP 710, tal como resume la subsección 2.3.1.

Objetivo General del MPRI

Establecer las normas y procedimientos que permitirán abordar situaciones de reasentamiento involuntario de acuerdo al alcance establecido en la OP 710 del BID y 4.12

del BM, que puedan afectar a la población, en el contexto de la implementación de las acciones REDD+.

Objetivos Específicos

- . Asegurar la adecuada planificación e implementación del proceso de reasentamiento involuntario de personas, activos y/o actividades, en el caso de presentarse desplazamientos, traslados o restricciones en la implementación de las acciones REDD+;
- . Asegurar que se desarrolle un proceso participativo claro y oportuno de las personas afectadas y se garantice la mitigación de impactos negativos que pudieran derivarse de potenciales desplazamientos, traslados o restricciones de la implementación de las acciones REDD+;
- . Entregar los elementos más relevantes para una adecuada operación de las diversas medidas que deben ejecutarse en posibles reasentamientos, en el marco de la implementación de las acciones REDD+;

Resumen de los potenciales impactos identificados a través del SESA y que son relevantes para reasentamiento involuntario y/o restricción y pérdida de acceso a recursos naturales

Esta sección proporciona un resumen de los potenciales impactos adversos de la implementación de las opciones REDD+ que son relevantes para reasentamiento involuntario y/o restricción y pérdida de acceso a recursos naturales. Estos impactos fueron extraídos del SESA donde se identifican los potenciales impactos adversos priorizados de la implementación de las opciones y actividades REDD+. Estos impactos son el resultado del proceso del SESA y de diseño del ESMF, desarrollado a través de un proceso participativo incluyendo pueblos indígenas y comunidades locales.

Opción 1: Armonización del marco de políticas, planes e instrumentos, de sectores vinculados al uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la gestión forestal-ambiental

Vinculado (pero no limitado)¹⁰⁸ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos.

Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques.

Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros.

¹⁰⁸ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

- **Cambios en la normativa vigente para la legalización de la tenencia de la tierra podría derivar en desplazamientos físicos o desalojos de comunidades locales y pueblos indígenas. Asimismo, la armonización de reformas de los regímenes de propiedad aumente la tensión e inseguridad por la tenencia de la tierra.**

Opción 3: Promoción y Fortalecimiento del Ordenamiento Territorial en Guatemala

Vinculado (pero no limitado)¹⁰⁹ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos.

Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Actividad 3. Manejo de bosques naturales con fines de protección, provisión de servicios ambientales y conectividad de ecosistemas.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 5. Promover actividades productivas compatibles con la conservación de los bosques.

Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros

- **Situaciones de reasentamiento y desalojo y/o limitaciones sobre el acceso y uso de tierras y recursos para Pls y comunidades locales. La falta de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra puede propiciar situaciones de desalojo de comunidades indígenas y no indígenas que no cuentan con un título registrado en áreas protegidas (solo su derecho consuetudinario).**
- **Falta de reconocimiento de los derechos colectivos e individuales sobre la tierra de los Pls sobre los territorios y recursos naturales sujeto a los cambios en el ordenamiento territorial.**
- **Desplazamiento interno de las poblaciones más vulnerables (inmigración) por falta de alternativa de sobrevivencia humana, lo cual puede causar un desplazamiento de emisiones.**

Opción 7: Desarrollo e Implementación de una Estrategia para Uso Sostenible de Leña como fuente energética

Vinculado (pero no limitado)¹¹⁰ a las siguientes actividades del ER-PIN y del IMT:

Actividad 1. Manejo sostenible de bosques naturales con fines productivos.

Actividad 2. Fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Actividad 4. Reforestación con fines energéticos, maderables y de restauración funcional de tierras forestales.

Actividad 6. Monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales, cambio de uso del suelo, actividades ilícitas y otros

¹⁰⁹ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

¹¹⁰ Las actividades REDD+ propuestas en el ER-PIN y el IMT abordan parcialmente las opciones de estrategia (no todas) y más adelante el país definirá otras actividades que cubrirán las demás opciones (cuando el país defina su Estrategia REDD+)

- **Desplazamiento forzoso y/o limitaciones sobre el acceso y uso de tierra y recursos para PIs y comunidades locales asociadas a vacíos de regularización de tenencia de la tierra, frente a potencial competencia por acceso a tierras y recursos para producción de energía.**

Identificación de las políticas operacionales del Banco Mundial y BID aplicables bajo el enfoque común del FCPF

De acuerdo con el documento del Enfoque Común del FCPF, el BID deben alcanzar la “equivalencia sustancial”, lo cual significa equivalencia con las políticas los procedimientos de salvaguardas ambientales y sociales del BM aplicables al Fondo *Readiness* del FCPF; y que, si las políticas y los procedimientos de salvaguardas del BID son más rigurosos y/u ofrecen más protección que los del BM, el BID aplicará sus políticas y procedimientos a las actividades realizadas en el marco del Fondo *Readiness* del FCPF.

De acuerdo al BIC¹¹¹ y a un estudio independiente hecho para el FCPF¹¹², la mayoría de los requisitos de las políticas de salvaguardas del BID son semejantes (o menos rigurosos) a los del Banco Mundial.

En relación al Reasentamiento Involuntario, bajo en enfoque común del FCPF y de acuerdo a estos estudios aplicaría la Política de Reasentamiento Involuntario (710) del BID Indígenas (y su Guía Operativa). También aplicarían los principios 2b, 6a, 6b y 10 de la PO 4.12¹¹³ que son más rigurosos en los temas de:

- Requerir la participación de las partes afectadas en todas las actividades de reasentamiento (incluyendo la determinación de beneficio)
- Informar las personas desplazadas acerca de sus opciones y derechos
- Requerir una compensación efectiva y rápida equivalente al costo total de reposición
- Reasentamiento y compensación en tierras para personas desplazadas cuyos medios de subsistencia dependen del uso de la tierra

¹¹¹ Políticas de Salvaguardia Socio Ambiental y Enfoque Común del FCPF, Bank Information Center, Agosto 2013.

http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Políticas-de-Salvaguardia-Socio-Ambiental-y-Enfoque-Comun-del-FCPF_BankInformationCenter_agosto2013.pdf

¹¹² Independent Assessment of IDB's Background Information for the FCPF Common Approach to Environmental and Social Safeguards, 2011.

<https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2011/Summary%20Memo%20and%20Gap%20Analysis%20of%20IDB%20Background%20Info%20110603.pdf>

<http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2011/Summary%20Memo%20and%20Gap%20Analysis%20of%20IDB%20Background%20Info%20110603.pdf>

¹¹³ PO 4.12. Página 1, principio 2.b: Cuando el reasentamiento resulte inevitable, las actividades de reasentamiento se deben concebir y ejecutar como programas de desarrollo sostenible, que proporcionen recursos de inversión suficientes para que las personas desplazadas por el proyecto puedan participar en los beneficios del mismo. Es preciso celebrar consultas satisfactorias con las personas desplazadas y darles la oportunidad de participar en la planificación y ejecución de los programas de reasentamiento.

Página 2, principio 6.a.i : se le informe a las personas desplazadas acerca de sus opciones y derechos relacionados con el reasentamiento; Página 3, principio 6. a. ii y iii : se les consulte y se les dé a elegir entre distintas opciones técnicas y económicos viables de reasentamiento, y se les otorgue una indemnización rápida y efectiva equivalente al costo total de reposición por las pérdidas de activos atribuibles directamente al proyecto

Página 3, principio 6b : Si entre los efectos se incluye el traslado físico, en el plan de reasentamiento o en el marco de políticas de reasentamiento se deberán prever medidas que garanticen que las personas desplazadas i) recibirán asistencia (como subsidios de traslado) durante el traslado, y ii) recibirán viviendas o sitios para vivienda, o, según el caso, sitios agrícolas cuyo potencial productivo, ubicación y otros factores sean, como mínimo, equivalentemente ventajosos en conjunto a los del sitio antiguo.

Página 4, principio 10 : la privación de tierras y otros activos conexos sólo podrá ocurrir una vez que se haya pagado la indemnización y, cuando corresponda, una vez que se hayan proporcionado sitios de reasentamiento y subsidios de traslado a las personas desplazadas.

- Requerir que se haga el reasentamiento o la restricción de acceso únicamente una vez que se hayan pagado las compensaciones.

La Política de Reasentamiento Involuntario (710) del BID abarca todo desplazamiento físico involuntario de personas causado por un proyecto del Banco. Se aplica a todas las operaciones financiadas por el Banco, tanto del sector público como del privado, en las cuales el financiamiento del Banco esté encauzado directamente (como en el caso de los préstamos de inversión) o sea administrado por intermediarios (programas de obras múltiples, por etapas o de crédito multisectorial). Excluye los planes de colonización, así como el asentamiento de refugiados o víctimas de desastres naturales.

De acuerdo con varios estudios comparativos¹¹⁴, esta política del BID tiene requisitos más rigurosos que el BM. El BM requiere que los pueblos indígenas provean su “amplio apoyo” para cualquier reubicación, a través de la consulta libre, previa e informada, mientras que el BID les obliga a los pueblos indígenas a proveer su “consentimiento informado”, y es obligatorio plenamente reconocer y compensar los derechos consuetudinarios de éstos.

El objetivo de la política es minimizar alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las personas que viven en la zona de influencia del proyecto, evitando o disminuyendo la necesidad de desplazamiento físico, y asegurando que, en caso de ser necesario el desplazamiento, las personas sean tratadas de manera equitativa y, cuando sea factible, participen de los beneficios que ofrece el proyecto que requiere su reasentamiento.

Los principios generales de esta política son:

1. **Se tomarán todas las medidas posibles** para evitar o reducir al mínimo la necesidad de reasentamiento involuntario. Se deberá realizar un análisis profundo de las alternativas del proyecto para identificar soluciones que sean viables desde el punto de vista económico y técnico, eliminando a la vez, o disminuyendo al mínimo, la necesidad de reasentamiento involuntario. Al examinar las ventajas y desventajas de las alternativas, es importante que se cuente con un cálculo razonable del número de personas que probablemente se verán afectadas y con una estimación de los costos del reasentamiento. Se deberá prestar especial atención a los aspectos socioculturales, tales como la trascendencia cultural o religiosa de la tierra, la vulnerabilidad de la población afectada o la disponibilidad de sustitución en especie de los activos, particularmente cuando tengan consecuencias intangibles importantes. Cuando un número considerable de personas o una proporción significativa de la comunidad afectada tendrían que ser reasentados y/o los impactos afecten bienes y valores que son difíciles de cuantificar y compensar, después de haber explorado las

¹¹⁴ Independent Assessment of IDB's Background Information for the FCPF Common Approach to Environmental and Social Safeguards, 2011.

<https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2011/Summary%20Memo%20and%20Gap%20Analysis%20of%20IDB%20Background%20Info%20110603.pdf>

Políticas de Salvaguardia Socio Ambiental y Enfoque Común del FCPF, Bank Information Center, Agosto 2013.

http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Políticas-de-Salvaguardia-Socio-Ambiental-y-Enfoque-Comun-del-FCPF_BankInformationCenter_agosto2013.pdf

otras posibles opciones, se debe considerar seriamente la alternativa de no seguir adelante con el proyecto.

2. **Cuando el desplazamiento sea inevitable**, se deberá preparar un plan de reasentamiento que asegure que las personas afectadas serán indemnizadas y rehabilitadas de manera equitativa y adecuada. Las partes afectadas deberán participar en la preparación de este plan y deberán ser informados de todas sus opciones y sus derechos. La indemnización y la rehabilitación se deberá hacer antes de hacer el reasentamiento, y son consideradas equitativas y adecuadas cuando aseguren que, en el plazo más breve posible, las poblaciones reasentadas y las receptoras: i) lograrán unos estándares mínimos de vida y acceso a tierra, recursos naturales y servicios (tales como agua potable, saneamiento, infraestructura comunitaria, titulación de tierras) que sean, como mínimo, equivalentes a lo que tenían anteriormente (ii) compensación en tierras para personas desplazadas cuyos medios de subsistencia dependen del uso de la tierra, iii) recobrarán todas las pérdidas causadas por dificultades transitorias; iv) experimentarán un mínimo desmantelamiento de sus redes sociales, oportunidades de trabajo o producción y del acceso a recursos naturales y servicios públicos; y v) dispondrán de oportunidades para el desarrollo social y económico.

Marco legal aplicable en Guatemala

La tabla a continuación presenta el marco legal nacional e internacional relevante y aplicable a este MPRI en Guatemala.

Constitución Política de la República de Guatemala

Al efecto, la Constitución Política de la República de Guatemala, parte de la protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.

Código Municipal, Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala

El referido Código Municipal, parte de la premisa en cuanto a las sesiones que llevan los Concejos municipales, con miras a contar con sesiones que tomen en cuenta con carácter obligatorio los temas relativos a servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda, Artículo 36 del referido cuerpo legal.

Ley de Desarrollo Social, Decreto Número 42-2001 del Congreso de la República de Guatemala

La presente Ley tiene por objeto la creación de un marco jurídico que permita implementar los procedimientos legales y de políticas públicas para llevar a cabo la promoción, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones gubernativas

y del Estado, encaminadas al desarrollo de la persona humana en los aspectos social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos de especial atención.

Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto Número 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala

El Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca.

Ley de Transformación Agraria, Decreto Número 1551 del Congreso de la República de Guatemala

La misma parte de la garantía constitucional a la propiedad privada, las condiciones indispensables para que el propietario alcance en el más alto índice el desarrollo y utilización de sus bienes, y que regule al mismo tiempo las obligaciones y limitaciones a la propiedad que sean adecuadas para la transformación de la tierra ociosa, la protección del patrimonio familiar y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de la Nación, precisándose el concepto de tierra ociosa y el gravamen que pesará sobre éstas, regulándose la expropiación y proporcionándose medios para el desarrollo agrario del país, todo de acuerdo con las condiciones y características de cada región, estableciéndose los procedimientos y los órganos para su aplicación, a fin de llevar al campesinado guatemalteco la justicia Social.

Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos, Decreto Número 120-96 del Congreso de la República de Guatemala

La referida Ley, tiene como objeto, apoyar, fortalecer, fomentar y regular las acciones del Estado y los habitantes de la República, con el fin de desarrollar el sector vivienda y asentamientos humanos para establecer las bases institucional, técnica y financiera, que permitan a la familia acceder a una solución habitacional digna y adecuada.

Ley de Fondo de Tierras, Decreto Número 24-99 del Congreso de la República de Guatemala

El referido cuerpo legal, pretende dar cumplimiento a los enunciados y principios a que se refieren los considerandos anteriores y sentido práctico a los acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, se hace imperativa la creación de un Fondo de Tierras, por lo que deben dictarse las disposiciones legales correspondientes, emitiendo una ley que cree una entidad estatal, descentralizada con autonomía funcional.

Ley de Registro de Información Catastral, Decreto Número 41-2005 del Congreso de la República de Guatemala

Dicha ley, contiene principalmente la creación del Registro de Información Catastral como una autoridad competente en materia catastral, que tiene por objeto establecer, mantener y

actualizar el catastro nacional, según lo preceptuado en la presente Ley y sus reglamentos. Todas sus actuaciones y registros son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en un tiempo prudencial, con las formalidades de ley y sin limitación alguna, informes, copias, reproducciones y certificaciones de las actuaciones a costa del interesado.

DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

En particular, se deben considerar las siguientes disposiciones:

Artículo 26.1. “Los Pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido; y en el numeral 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma; y en el numeral 3 establece que “Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas... y en el artículo 25, establece que “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.”¹¹⁵

En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, encontramos cinco artículos que regulan el derecho de los Pueblos indígenas a ser consultados sobre diferentes temas, los cuales se describen a continuación:

- 1) “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado (Artículo 19).
- 2) Los Estados celebraran consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares (Artículo 30 numeral 2).
- 3) Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptaran medidas eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho (Artículo 36 numeral 2).
- 4) Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración (Artículo 38).

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras

¹¹⁵ Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo (Artículo 32.2).”

CONVENIO 169 DE LA OIT, Decreto 9-96 que aprueba dicho convenio

En particular, se deben considerar las siguientes disposiciones:

Artículos. 15.1 Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

Artículo 7.1 Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

Artículo 7.4 Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Artículo 6.1 a) “Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Artículo 6.2 Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”

Artículo 15.2 En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.

Artículo 16.2 Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, solo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa.

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL

Informe 30 y 31 de 1997, los cuales recomendaron al Estado de Guatemala adoptar medidas para garantizar una distribución justa y equitativa de la tierra, teniendo en cuenta las necesidades de la población indígena. Asimismo, sugirió al Estado utilice las disposiciones del Convenio 169 de la OIT como guía para resolver las cuestiones de distribución de la tierra y

que examine, a la luz de la Convención, la cuestión de la indemnización por los bienes que no puedan restituirse. CERD/30 y 31/1997¹¹⁶

El Comité exhorta al Estado a que tome medidas que reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras y territorios. En los casos en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se hayan ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de aquellas poblaciones, el comité recomienda al Estado que adopte medidas para que dichas tierras les sean devueltas. Asimismo, urge a que asegure la debida aplicación de la Ley de Catastro Nacional para que se identifiquen y demarquen las tierras comunales indígena. CERD/17/2006¹¹⁷

El Comité en su informe 19 del año 2006, recomendó al Estado de Guatemala que al tomar decisiones relacionadas directamente con los derechos e intereses de los pueblos indígenas se esfuercen en obtener su consentimiento con conocimiento de causa como se establece en la recomendación general 23, párrafo 4 d). Asimismo, recomendó que el Estado incluya, antes de adoptar la Ley reguladora del procedimiento consultivo, una cláusula referente al derecho de consulta de los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos con el fin de asegurar su consentimiento por tales medidas. CERD/19/2006.

Lineamientos para el desarrollo de un plan de reasentamiento

Se consideran las siguientes etapas conforme a lo establecido en la OP 710 y la normativa nacional e internacional aplicable:

Fase I: Evaluación Preliminar y Estudio de Base

Como se mencionó más arriba, si bien la Estrategia Nacional REDD+ no considera opciones estratégicas, actividades o acciones REDD+ que impliquen reasentamiento involuntario, es posible que durante su implementación se generen desplazamientos, traslados, reubicaciones o restricciones que, tal y como establece la OP, generen la privación involuntaria de tierras que de por resultado el desplazamiento o pérdida de la vivienda, la pérdida de los activos o del acceso a los activos, o la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia que resulten en el traslado de personas a otros lugares.

De manera potencial y no excluyente las afectaciones que podrían producirse durante la implementación de las acciones REDD+ a las cuales se deberá aplicar el presente MPRI, son todas aquellas establecidas en la OP 710 del BID y el marco legal relevante que podrían dar como resultado lo siguiente:

- Pérdida involuntaria de tierras, especialmente en aquellas acciones que implican procesos de regularización de la tenencia de tierra donde personas que no cuentan con derechos de propiedad formales puedan verse afectados negativamente;
- Pérdida de medios de subsistencia o fuentes de ingreso;

¹¹⁶ Recomendaciones del Comité para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación Racial de la ONU a Guatemala.

¹¹⁷ Ídem.

- Desplazamiento físico involuntario de personas;
- Afectación de activos, ya sea de manera total como parcial (incluyendo viviendas o cualquier otro activo);
- Pérdida de acceso a terrenos donde existan recursos que sean fuentes de ingreso de personas afectadas; y
- La restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la ley como parques o zonas protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la subsistencia de las personas.

Por lo tanto, el diseño de acciones REDD+ respecto a las cuales el SESA determinó un potencial impacto de reasentamiento involuntario, serán evaluadas conforme a lo siguiente y con miras a tomar todas las medidas posibles para evitar o reducir la necesidad de un reasentamiento involuntario:

1. El técnico(a) encargado del seguimiento del ESMF y este MPRI, deberá realizar un análisis preliminar de las alternativas de la acción REDD+ propuesta, para identificar soluciones que sean viables desde el punto de vista económico y técnico, eliminando a la vez, o disminuyendo al mínimo, la necesidad de reasentamiento involuntario.

Al examinar las ventajas y desventajas de las alternativas, y al preparar este estudio de base, es importante que se cuente:

- a) con un cálculo razonable del número de personas que probablemente se verán afectadas y con una estimación de los costos del reasentamiento.
- b) indicar los posibles riesgos para la población afectada. Se deberá prestar especial atención a¹¹⁸:
 - La pérdida de tierras;
 - La pérdida de oportunidades de empleo puede afectar a grupos distintos de los que pierden tierras o vivienda;
 - La pérdida de acceso a recursos comunes, como tierras de pastoreo, bosques y lugares de pesca, puede afectar gravemente al ingreso o la base de subsistencia de algunos grupos, especialmente poblaciones indígenas y pequeños agricultores tradicionales;
 - La marginalización, o movilidad social hacia abajo, ocurre cuando los hogares no pueden recuperar plenamente su capacidad económica y ello puede ser resultado de la pérdida parcial de propiedades, la pérdida de acceso a clientes y mercados o una compensación insuficiente;
 - La inseguridad alimentaria que puede verse agravada si el reasentamiento tiene lugar en un momento inadecuado y hace que se pierdan cultivos o ganado;
 - La pérdida de la vivienda y los enseres domésticos;
 - El aumento de la morbilidad y la mortalidad vinculada al empobrecimiento, la pérdida de la seguridad alimentaria y la vivienda y el trauma y la presión psicológica;
 - El desbaratamiento de las redes sociales vinculado al desplazamiento causa la separación de grupos familiares y de comunidades muy unidas;

¹¹⁸ Reasentamiento involuntario en los proyectos del BID, Principios y lineamientos, Pg 9

- La pérdida del patrimonio cultural, incluye la de lugares de importancia cultural como iglesias, cementerios y formaciones naturales de importancia;
 - Interrupción o pérdida de la educación.
- c) indicar los distintos grupos, sectores y poblaciones de que se trata y analizar las formas concretas en que han de ser afectados (análisis de los directamente interesados). La información debe ser lo más precisa posible y servir de base sólida para el análisis de distintas alternativas, y deberá contener los siguientes elementos:¹¹⁹
- Número de personas/hogares afectados según los distintas acciones REDD+ posibles;
 - El tamaño y la composición del hogar;
 - Grupos vulnerables, como poblaciones indígenas, medieros o inquilinos;
 - Los recursos y actividades productivas de subsistencia;
 - El empleo, las fuentes y niveles de ingreso;
 - Las actitudes, los valores y las aspiraciones;
 - La situación jurídica en cuanto a la tenencia o los derechos de ocupación;
 - La vivienda, el tipo y los materiales;
 - La infraestructura y los servicios (abastecimiento de aguas, desagüe, caminos de acceso, escuelas, etc.);
 - Los indicadores de salud y los riesgos posibles;
 - Las redes sociales y de organización de la comunidad; y
 - La presencia del gobierno local, organismos jerárquicos y organizaciones no gubernamentales.

El técnico tendrá que emplear diversas disciplinas en la preparación de este estudio de base, especialmente las ciencias sociales. Puede recurrir a fuentes secundarias, como censos o datos procedentes de un censo agrícola.

El estudio de base suele incluir:

- a) un censo completo de la población afectada.¹²⁰ Si el desplazamiento no tiene lugar hasta que hayan transcurrido varios años desde la aprobación de la acción REDD+, o se lleva a cabo en etapas separadas, tal vez sea más procedente aplazar el censo oficial y llevarlo a cabo en un momento más cercano a aquél en que realmente se produzca el reasentamiento. Cualquiera que sea el momento en que se lleve a cabo, el censo completo debe ser riguroso y verificable y hay que notificar oficialmente a la población afectada que será utilizado para determinar sus derechos a los beneficios de la acción REDD+ o a una compensación.
- b) Un análisis social.¹²¹ Los estudios de base deben ir más allá de una simple enumeración de la población y servir de análisis de los distintos grupos y organismos afectados por el proyecto o que tienen un interés legítimo en él y de las relaciones entre ellos. Es importante comprender los intereses de los distintos

¹¹⁹ Reasentamiento involuntario en los proyectos del BID, Principios y lineamientos, Pg 11

¹²⁰ Reasentamiento involuntario en los proyectos del BID, Principios y lineamientos, Pg 13

¹²¹ Reasentamiento involuntario en los proyectos del BID, Principios y lineamientos, Pg 13

grupos y asegurarse de que en el proceso de consulta las opiniones y las aspiraciones de cada uno de ellos están adecuadamente representadas.

- c) Identificación de necesidades especiales de grupos vulnerables¹²². Será importante identificar los grupos o sectores particularmente expuestos a riesgos. El reasentamiento es difícil para todos, pero es especialmente traumático para quienes carecen relativamente de poder o están más profundamente apegados al lugar en que viven o a su región de origen. Tres de los grupos más vulnerables son las mujeres, las personas de edad y los pueblos indígenas.

En la medida de lo posible, el estudio debe llevarse a cabo en estrecha consulta con las poblaciones afectadas. Las organizaciones locales, los organismos de gobierno y las organizaciones no gubernamentales tal vez puedan ofrecer también experiencias útiles y puntos de vista locales.

A continuación, en el cuadro 1 se exponen las principales categorías de datos necesarias para un estudio de base. La lista es indicativa.

Cuadro 1: Esquema Indicativo de un Estudio de Base¹²³

Parte I: Zona geográfica afectada (zona de partida)

- Ubicación geográfica de la zona de la acción REDD+ propuesta y viviendas que habrá que trasladar con mapas.
- Distancia de la vivienda afectada a los lugares de empleo y servicios básicos, tales como escuelas, centros de salud, mercados y centros comunitarios. Estos datos son útiles para analizar la red espacial que comprende a la población afectada.
- Uso de la tierra. Tierras agrícolas, tierras de pastoreo, tierras usadas para la minería y otros fines comerciales. Tierras comunes, ríos y lagos, cuando proceda, con un inventario de la flora y fauna que tenga importancia económica y para la alimentación. Utilización para fines de vivienda, comerciales e industriales. Solares desocupados para jardinería o actividades comerciales informales.
- Derechos oficiales y consuetudinarios sobre la tierra. Identificación y demarcación de la zona y registro de los títulos. Documentación de las modalidades de tenencia de la tierra y los derechos consuetudinarios sobre ella y utilización de recursos fuera del sistema jurídico oficial. Pautas históricas de ocupación, duración de la ocupación o de la residencia.

Parte II: Características demográficas

- Número de unidades familiares/familias y personas afectadas. Es importante definir la unidad familiar y establecer los criterios para

¹²² Reasentamiento involuntario en los proyectos del BID, Principios y lineamientos, Pg 14

¹²³ Reasentamiento involuntario en los proyectos del BID, Principios y lineamientos, Pg 16

determinar los derechos a la compensación, a tierras o a solares para vivienda y cerciorarse de que se informe plenamente a los hogares afectados. La composición del hogar es variable, según la forma de organización social. Cada vez que sea posible, se deben preparar las definiciones de común acuerdo con la población afectada.

- Perfil demográfico por sexo y grupo de edad. Tasas de crecimiento de la población y proyecciones para los 5, 10 y 15 próximos años. Se debería tener en cuenta el crecimiento de la población, especialmente en los casos en que la solución que se proponga consista en canjear tierras por otras.
- Modalidades de migración. Unidades familiares o personas temporalmente ausentes.
- Incidencia y prevalencia de enfermedades.

Parte III: Información socioeconómica

La información socioeconómica es necesaria para identificar a los distintos grupos y sectores que habrá que consultar, especialmente los grupos vulnerables que no están en condición de defender sus intereses y corren mayor riesgo de empobrecimiento como consecuencia del reasentamiento. Se trata de información detallada acerca de la magnitud de las pérdidas, necesaria para preparar medidas de mitigación adecuadas, y da además una idea de la organización y estructura de las comunidades o los grupos que habrá que reasentar.

- Diversidad étnica, lingüística y socioeconómica. Hay que determinar la base de la organización social, especialmente los factores que influyen en la forma en que se clasifica a las personas, con inclusión de la jerarquía socioeconómica, los grupos familiares o de parentesco, los grupos organizados sobre la base de su origen geográfico, su religión o sus aspiraciones socioeconómicas.
- Propiedad de la tierra, arrendamiento u otros sistemas de tenencia. Propiedad de la vivienda, el espacio para fines industriales y comerciales, arrendamiento y otros regímenes.
- Actividades de subsistencia, perfiles de empleo e ingreso de los principales grupos sociales, étnicos y económicos (por ejemplo, agricultores, obreros, artesanos, comerciantes, pequeños empresarios, microempresarios, trabajadores de servicios, trabajadores domésticos), ingreso disponible de los miembros de los hogares.
- Nivel de educación, alfabetización y escolaridad alcanzado.
- Acceso a los servicios básicos (agua, drenaje, alcantarillado, caminos de acceso, electricidad, transporte). Hay que incluir todos los medios informales por los cuales la gente obtiene servicios, como las conexiones ilícitas para el suministro de electricidad.

Parte IV: Organizaciones regionales y locales

- Organizaciones comunitarias y mecanismos de participación de la comunidad, formales e informales. Organizaciones del comercio local, de productores, de comerciantes o sindicales; organizaciones religiosas, etc. Tipos y formas de conflictos dentro de la población afectada y facciones en que se dividen.
- Presencia y alcance de los organismos jerárquicos de gobierno y otros programas oficiales.
- Presencia, actividades y alcance de los organismos no gubernamentales.

Parte V: Actitud y expectativas de la población afectada

- Expectativas con respecto a los lugares de reasentamiento, las soluciones de vivienda y las nuevas oportunidades económicas.
- Obstáculos sociales y culturales para llevar a buen término el reasentamiento (lugares de importancia cultural, apego al lugar).
- Noción del tiempo y de los requisitos temporales para trasladarse en la práctica como, por ejemplo, las exigencias del ciclo agrícola.

Parte VI: Inventario de tierras y vivienda

- Inventario de la tierra y los bienes personales afectados por el proyecto: características físicas de la tierra, infraestructura, casas y otras propiedades, tamaño estimado, antigüedad y tipo de construcción, características estructurales, estado de mantenimiento, estimaciones del valor de reposición.
- Inventario de espacios públicos o comunes, infraestructura u otros recursos productivos o sociales que se perderán: escuelas, centros de salud, templos, tierras comunes de pastoreo, acceso a bosques, zonas de pesca.

Si el estudio de base determina que **el desplazamiento es inevitable**, se procederá a preparar un plan de reasentamiento que asegure que las personas afectadas serán indemnizadas y rehabilitadas de manera equitativa y adecuada. Ver siguiente fase.

Si el estudio de base determina que un número considerable de personas o una proporción significativa de la comunidad afectada tendrían que ser reasentados y/o los impactos afectan bienes y valores que son difíciles de cuantificar y compensar, después de haber explorado las otras posibles opciones, se debe considerar seriamente la alternativa de no seguir adelante con la acción REDD+.

Fase II: Preparación del plan de reasentamiento involuntario

El plan de reasentamiento debe describir claramente los procedimientos de compensación; la base jurídica y los procedimientos para la expropiación de tierras y bienes; y la compensación correspondiente. Se debe fijar un calendario aceptable y realista para el registro, la tasación, la indemnización y la expropiación de los bienes afectados. Este plan se debe preparar con la participación efectiva de las partes afectadas.

Asimismo, debe incluir definiciones claras de los siguientes elementos:

- “Personas afectadas por la acción REDD+” (quienes tendrán derecho a una compensación o un beneficio),
- La “familia” o “unidad familiar”,
- Las “fechas límite” para tener derecho a una compensación, y
- Los bienes que serán indemnizados al costo de reposición

En los casos en que la población afectada no tenga títulos de propiedad, como ocurre en muchas zonas rurales, habrá que levantar un catastro para dar a los ocupantes de la tierra pruebas de su derecho a una compensación. Tal vez proceda combinar el levantamiento catastral con un censo y convenir en la fecha del censo y el levantamiento combinados como fecha límite para la compensación.

Una vez preparada la documentación y determinado el monto de la compensación, el pago debe hacerse cuanto antes. El procedimiento de pago debería ser sencillo y no entrañar gastos adicionales para los hogares afectados, como el transporte a centros urbanos o el pago de honorarios a abogados y notarios públicos. La compensación debe hacerse antes de reasentamiento.

El pago de la compensación debe ser objeto de supervisión independiente a fin de cerciorarse de que la tasación de los bienes sea justa y que sean compensados exclusivamente aquellos cuyos bienes son afectados por el reasentamiento. Es importante llevar registros fidedignos de todos los pagos.

Con base a la información levantada y las consultas realizadas, el técnico encargado del ESMF y este MPRI elaborará de un plan de reasentamiento que incluya los siguientes elementos:

- a) Objetivos. Los principales objetivos del programa de reasentamiento.
- b) Descripción de la acción REDD+. Descripción general de la acción REDD+ e identificación de la zona de implementación.
- c) Resultados y las conclusiones de los estudios socioeconómicos y levantamientos de líneas de base realizados durante la Fase I, incluyendo una identificación de los posibles impactos, donde se identifique:
 - el componente que dan origen a reasentamiento;
 - la zona de impacto del componente o de las actividades;
 - las alternativas estudiadas para evitar o reducir al mínimo el reasentamiento, y
 - los mecanismos establecidos para reducir al mínimo el reasentamiento durante la ejecución de la acción REDD+, dentro de lo posible.
- d) Derechos de las personas afectadas por la acción REDD+
 - a. Definición de los derechos de las personas y/o población afectada por la acción REDD+, (incluirá a todos los que pierdan tierras, acceso a recursos naturales, etc. y a quienes sufran la pérdida de sus viviendas). Los criterios para ello deben ser claros y específicos y sentar las bases para determinar la elegibilidad, por ejemplo la antigüedad de la tenencia o la ubicación física en el lugar afectado. Hay que fijar los plazos para la tasación de las

pérdidas y la definición de las unidades familiares y delinear claramente los criterios de selección.

- b. Descripción de la compensación que se ha de dar y de las normas de compensación por la pérdida de vivienda, tierras, propiedad, empleo y acceso a los servicios básicos.
- c. Descripción de los criterios de rehabilitación para el restablecimiento de los ingresos y el nivel de vida.
- d. Descripción de los derechos y procedimientos para la resolución de quejas relativas a las decisiones en materia de compensación y reasentamiento.

e) Marco jurídico e institucional, que abarque:

- a. Legislación aplicable a las expropiaciones y el reasentamiento. En particular, el alcance del derecho de expropiación u otro tipo de afectación de activos y la índole de la compensación vinculada a éste, tanto en cuanto al método de valoración como a la fecha de pago;
- b. Los procedimientos jurídicos y administrativos aplicables, en particular una descripción de los recursos judiciales de que disponen las personas desplazadas y el plazo normal para interponerlos, y cualesquiera otros mecanismos disponibles de solución de controversias que puedan guardar relación con el reasentamiento que entraña la acción REDD+;
- c. las normas pertinentes (en particular las de derecho consuetudinario y tradicional) que gobiernan la tenencia de tierras, la valoración de los activos y las pérdidas, la indemnización, y los derechos de uso de los recursos naturales; el derecho consuetudinario personal relacionado con el desplazamiento, y las leyes ambientales y la legislación sobre bienestar social;
- d. las leyes y reglamentos relacionados con los organismos responsables de ejecutar las actividades de reasentamiento;
- e. la identificación de los organismos responsables de las actividades de reasentamiento;
- f. una evaluación de la capacidad institucional de esos organismos;
- g. medidas para mejorar la capacidad institucional de los organismos;
- h. los mecanismos, esquema y procedimientos de coordinación entre el organismo encargado del reasentamiento, el organismo encargado de su ejecución (si fuesen distintos) y demás que participen. El plan debe indicar los organismos encargados de¹²⁴:
 - i. la tasación de los bienes,
 - ii. la expropiación e indemnización,
 - iii. el registro de propiedades y la escrituración de las tierras,
 - iv. el diseño y la aprobación del plan de reasentamiento,
 - v. la resolución de quejas,
 - vi. la reubicación y las disposiciones temporales,
 - vii. las medidas para impedir la reocupación,
 - viii. la financiación de la vivienda,
 - ix. la construcción de viviendas,

¹²⁴ Reasentamiento involuntario en los proyectos del BID, Principios y lineamientos, Pg 29

- x. la preparación del lugar de reasentamiento y el suministro de infraestructura de servicios,
 - xi. la prestación de servicios sociales,
 - xii. la capacitación y la asistencia para el empleo, y
 - xiii. la supervisión y evaluación.
- f) Valoración de las pérdidas e indemnización. La metodología aplicable para valorar las pérdidas y que determina su costo de reposición, y una descripción de los tipos y niveles de compensación propuestos según la legislación local y las medidas complementarias necesarias para obtener el costo de reposición de los bienes perdidos. La indemnización debe ser equivalente al costo total de reposición por las pérdidas de activos atribuibles directamente a la acción REDD+. Asimismo, y en caso de personas desplazadas cuyos medios de subsistencia dependen del uso de la tierra, deberá considerarse una compensación en tierras.
- g) Medidas de reasentamiento. Una descripción de las medidas de indemnización. Además de ser técnica y económicamente viables, las medidas de reasentamiento deberán ser compatibles con las preferencias culturales de las personas desplazadas y deberán prepararse en consulta con éstas.
- h) Selección y preparación de la reubicación. La consideración de diversos sitios posibles de reubicación y una explicación sobre los sitios seleccionados, que incluya:
 - a. los mecanismos institucionales y técnicos para la identificación y preparación de los sitios de reubicación, respecto de los cuales el potencial productivo, las ventajas de ubicación y otros factores sean, como mínimo, comparables a los del sitio anterior, junto con una estimación del tiempo necesario para la adquisición y transferencia de tierras y recursos conexos;
 - b. las disposiciones necesarias para impedir la especulación en materia de tierras o la afluencia a los emplazamientos seleccionados de personas sin derecho a ello;
 - c. los procedimientos para la reubicación física en relación con el proyecto, en particular calendarios para la preparación del emplazamiento y la transferencia de la población,
 - d. los mecanismos legales para regularizar la tenencia de tierras y transferir los títulos de propiedad a los reasentados.
- i) Servicios de vivienda, infraestructura y servicios sociales. Planes para el suministro (o para financiar el suministro por parte de los reasentados) de vivienda, infraestructura (por ejemplo, abastecimiento de agua, caminos de acceso), y servicios sociales (por ejemplo, escuelas, servicios de salud), planes para asegurar servicios comparables para las poblaciones de acogida, y cualquier urbanización de terrenos y preparación de diseños técnicos y arquitectónicos que sean necesarios para los emplazamientos.
- j) Protección y gestión ambientales. Una descripción de los límites de la zona de reubicación, y una evaluación de los impactos ambientales del reasentamiento propuesto y medidas para mitigar y gestionar esos impactos (coordinadas, según proceda, con la evaluación ambiental de la inversión principal que hace necesario el reasentamiento).

- k) Participación de la comunidad. Participación de los reasentados y de las comunidades de acogida, que incluya:
 - a. una descripción de la estrategia de consulta con los reasentados y las comunidades de acogida y de participación de éstos en la formulación y ejecución de las actividades de reasentamiento;
 - b. un resumen de las opiniones expresadas y de la forma en que se tuvieron en cuenta al preparar el plan de reasentamiento;
 - c. un examen de las alternativas de reasentamiento presentadas y las decisiones adoptadas por las personas desplazadas con respecto a las opciones de que disponían, en particular las decisiones relativas a las formas de compensación y de asistencia para el reasentamiento, a su reubicación como unidades familiares individuales o como parte de comunidades preexistentes o de grupos de parientes, al mantenimiento de las modalidades existentes de organización en grupo y a la conservación del acceso a los bienes culturales (por ejemplo, lugares de culto, centros de peregrinaje, cementerios);
 - d. los mecanismos institucionalizados mediante los cuales las personas desplazadas pueden comunicar sus preocupaciones a las autoridades encargadas de la acción REDD+ a lo largo de todo el proceso de planificación y ejecución, y las medidas destinadas a velar por que los grupos vulnerables estén suficientemente representados.
- l) Integración con las poblaciones de acogida. Medidas para mitigar el impacto del reasentamiento en las comunidades de acogida, si las hay que consideren:
 - a. consultas con las comunidades de acogida y los gobiernos locales;
 - b. disposiciones para la realización expedita de pagos a las comunidades de acogida por las tierras u otros bienes proporcionados a los reasentados, si corresponde;
 - c. disposiciones para atender a cualquier conflicto que pueda presentarse entre los reasentados y las comunidades de acogida, y
 - d. las medidas que sean necesarias para aumentar los servicios en las comunidades de acogida, a fin de hacerlos comparables, como mínimo, a los servicios de que disponen los reasentados.
- m) Procedimientos de quejas. Procedimientos accesibles para la resolución por terceros de las controversias que se deriven del reasentamiento; teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos judiciales y de mecanismos comunitarios y tradicionales de resolución de quejas. Para esto se deberá considerar el MIAQ (ver sección que presenta el MIAQ del ESMF).
- n) Calendario y cronograma de ejecución. Un calendario de ejecución que abarque todas las actividades de reasentamiento desde la preparación hasta la ejecución, incluyendo fechas estimadas de entrega de beneficios y las fechas de terminación de las distintas formas de asistencia. En el calendario se debe indicar la forma en que las actividades de reasentamiento estarán vinculadas a la ejecución de la acción REDD+. Esto es particularmente importante para verificar que las

compensaciones y otras medidas de reasentamiento sean resueltas previo al inicio de la acción.

- o) Presupuesto. El plan debe incluir un presupuesto detallado, desglosado por componente y subcomponente, organismo y año de ejecución.
- p) Supervisión y evaluación. Disposiciones para el seguimiento de las actividades de reasentamiento por parte del organismo de ejecución, complementadas con actividades de seguimiento realizadas por supervisores independientes, según el Banco lo estime apropiado, para velar por que la información sea completa y objetiva; indicadores de seguimiento del desempeño para medir los resultados de las actividades de reasentamiento; participación de las personas desplazadas en el proceso de seguimiento; evaluación del impacto del reasentamiento durante un período razonable después de que todas las actividades de reasentamiento y actividades de desarrollo conexas hayan quedado terminadas; utilización de los resultados del seguimiento del reasentamiento como guía para la ejecución posterior.

La población afectada debe participar en el diseño del plan de reasentamiento (ver cuadro siguiente). Asimismo, importante considerar y aplicar el Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI) conforme a lo dispuesto en la legislación nacional e internacional relevante y aplicable (ver Cuadro 3).

Cuadro 2: Participación de la población afectada en el diseño del plan de reasentamiento

La participación de la comunidad asegura que las medidas de compensación, los lugares en que tendrá lugar el reasentamiento, los proyectos de rehabilitación económica y la prestación de servicios reflejen las necesidades y las expectativas de la población afectada.

La estrategia de participación de la comunidad debe considerar:

- un análisis de los estudios de base;
- la distribución geográfica de la población afectada, por vecindario, aldea o municipalidad, y tener en cuenta las características sociales, étnicas y de género;
- los medios para asegurarse de que las opiniones de todos los grupos y sectores están suficientemente representadas; y
- habría que prestar especial atención a las mujeres, los jóvenes y las personas de edad.

Posiblemente sea útil establecer un grupo consultivo, integrado por dirigentes elegidos o reconocidos de las comunidades afectadas, representantes del gobierno local u organismos jerárquicos del lugar, (salud, educación, etc.), y tal vez expertos independientes procedentes de organizaciones no gubernamentales o de otras instituciones. Un grupo de esa índole ofrecería la posibilidad de sumar a las opiniones de la gente del lugar la opinión informada de expertos.

El plan de reasentamiento debe incluir expresamente una estrategia de información pública, en la cual se recurrirá a los medios de difusión, la radio y la televisión en particular, para comunicar la fecha y el lugar de celebración de reuniones públicas, la disponibilidad de documentos, las medidas de compensación y los criterios de selección. El plan debe incluir un programa y un calendario para la primera serie de consultas públicas y las reuniones previstas para grupos especiales, como pueblos indígenas o mujeres de determinados vecindarios o aldeas.

Cuadro 3: Casos en que se deberá obtener el CLPI

De conformidad con el derecho internacional aplicable, Guatemala tiene la obligación procesal de obtener el CLPI de los pueblos indígenas, en las siguientes circunstancias:

- en el caso del traslado y la reubicación de los pueblos indígenas de las tierras que ocupan;
- en el caso del traslado de bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de territorios indígenas;
- antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas que puedan afectar a los pueblos indígenas;
- antes de que se almacenen o eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas;
- antes de la autorización de proyectos destinados a la extracción de los recursos naturales en territorios de los pueblos indígenas, y
- antes de acceder a los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales asociados a ellos.

Alcance y contenido del CLPI

Los principios básicos del CLPI se encuentran resumidos en la Guía sobre el Convenio No. 169 de la OIT, de la siguiente manera:

Consentimiento: Las partes deben establecer un diálogo que les permita hallar soluciones adecuadas en una atmósfera de respeto recíproco con buena fe, y una participación plena y equitativa. Los pueblos indígenas deben poder participar mediante sus representantes libremente elegidos y sus instituciones consuetudinarias o de otra índole. La inclusión de una perspectiva de género y la participación de las mujeres indígenas son fundamentales, así como la participación de los niños y los jóvenes, según corresponda. Este proceso puede incluir la opción de negar el consentimiento;

Libre debe implicar que no hay coerción, intimidación ni manipulación;

Previo debe implicar que se ha tratado de obtener el consentimiento con suficiente antelación a cualquier autorización o comienzo de actividades y que se han respetado las exigencias cronológicas de los procesos indígenas de consulta o consenso con los pueblos indígenas;

Informado debe implicar que se suministra información que abarque (por lo menos) los siguientes aspectos:

- a. la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad propuesto;
- b. la razón o las razones o el objeto del proyecto y/o la actividad; c. la duración del proyecto o la actividad; d. la ubicación de las áreas que se verán afectadas;
- e. una evaluación preliminar de los probables impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluso los posibles riesgos, y una distribución de beneficios justa y equitativa en un contexto que respete el principio de precaución;
- f. el personal que probablemente intervenga en la ejecución del proyecto propuesto (incluso pueblos indígenas, personal del sector privado, instituciones de investigación, empleados gubernamentales y demás personas); y
- g. los procedimientos que puede entrañar el proyecto.

Fase III: Implementación y seguimiento del Plan de Reasentamiento Involuntario

El MPRI requiere de seguimiento y monitoreo durante su implementación que considere al menos los siguientes elementos:

- Indicadores de ejecución de la acción REDD+;
- Indicadores de los efectos de la acción REDD+;
- Identificación del mejoramiento, mantenimiento o desmejoramiento de las condiciones de vida de los hogares reasentados en relación con los componentes territorial, ambiental, económico, desarrollo social y habitacional.
- La evaluación de resultados de la implementación del Plan de Reasentamiento por parte de cada familia o grupo humano reasentado al cumplirse el período de aplicación de dicho Plan.

El técnico encargado del seguimiento y evaluación deberá incorporar mecanismos para monitorear dichos indicadores y generar reportes periódicos, donde se determine el avance y resultados de las medidas durante su implementación.

Adicionalmente, el seguimiento deberá vincularse a información recogida de la aplicación del MIAQ para atender y resolver adecuadamente los conflictos que puedan surgir en este ámbito.

El seguimiento a las personas afectadas deberá continuar por al menos dos años después de finalizado el plan de reasentamiento.

De igual forma, el acompañamiento y monitoreo de los Planes de Reasentamiento a implementar deberán considerar:

- Asistencia integral a la población reasentada que garantice que las medidas de mitigación, reparación y/o compensación sean efectivas para evitar el empobrecimiento y empeoramiento de los sistemas de vida.
- Monitoreo independiente, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos contemplados, permitiendo disponer de los resultados del cumplimiento de los

compromisos sociales y ambientales, tanto para la autoridad ambiental como para las personas afectadas y comunidad interesada. Esta evaluación será de especial relevancia una vez finalizada la implementación del plan de reasentamiento, y deberá incluir la implementación de encuestas de evaluación del proceso por parte de las personas afectadas

Sección 3. Arreglos institucionales para el ESMF

El **Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI)** es la instancia máxima de coordinación para la preparación de la Estrategia Nacional REDD+, acorde a lo establecido en el artículo 20 de la Ley Marco de Cambio Climático.¹²⁵ El GCI está formado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB).

El GCI incluye un nivel político (conformado por los Ministros) y uno técnico. A través de este grupo técnico las Direcciones/Departamentos/Unidades de Cambio Climático, Pueblos Indígenas, Género, SIG y otros, se coordina con múltiples partes interesadas del sector público, privado, academia, Pueblos Indígenas, ONG, Municipalidades, Organizaciones Campesinas, sociedad civil, grupos de mujeres, entre otros.

Además, el GCI puede invitar también a funcionarios de otras instituciones del Estado, sector privado, académico, la sociedad civil organizada, y la Cooperación Internacional, quienes participarán como Observadores y/Asesores, a participar en las reuniones que celebre, siempre que sus competencias tengan relación con alguno de los temas a tratar en la agenda del GCI.

En cuanto a la implementación del ESMF, se estima que el GCI cuenta con un marco jurídico e institucional sólido para supervisar la implementación del ESMF en su calidad de entidades rectoras. Estas instituciones y a través del GCI tiene la responsabilidad para asegurar que las acciones en campo/proyectos que son incentivados, cumplan con lo que se defina en el ESMF.

En ese sentido, los roles y responsabilidades de la implementación del ESMF se regirán por la competencia temática de cada una de las instituciones que forman parte del GCI:

MARN será la organización ejecutora que coordinará esfuerzos con los otros miembros del GCI (MAGA, CONAP, INAB). Cada uno de los miembros del GCI contará con una Unidad de Cambio Climático que será la encargada de la implementación de las actividades según su competencia.

El reporte “Propuesta de las entidades institucionales de Gobierno responsables de la supervisión de la construcción del Evaluación Estratégica Social y Ambiental y Marco de Gestión Social y Ambiental, incluyendo arreglos institucionales y contemplando la normativa del país relacionada con REDD+” presenta información detallada de la conformación, fundamento legal, operación y análisis del alcance de las atribuciones del GCI.

¹²⁵ Artículo 20 de la Ley Marco de Cambio Climático (Decreto 7-2013), página 12

Sección 4. Propuesta de diseño del mecanismo de atención a reclamos

Objetivos y alcance del mecanismo de Información y atención a quejas

Guatemala busca diseñar un MIAQ que permita dar información y manejar de forma clara y efectiva quejas o conflictos derivados de la preparación e implementación de la Estrategia REDD+.

Dicho mecanismo no estaría destinado a sustituir el poder judicial u otras formas de acción legal y/o tradicional existente en el país, sino a complementarlos. Por lo tanto, las partes agraviadas podrán dirigir sus quejas e utilizar la tipología de mecanismos existentes y relevantes conforme a sus competencias (ver cuadro 1 con información sobre mecanismos existentes).

Tipología de mecanismos disponibles a las partes, en complementariedad al MIAQ en Guatemala.¹²⁶

- **Los mecanismos formales de queja y resolución de conflictos ante autoridades judiciales:** entendemos que son aquellos que se dirimen ante alguna autoridad judicial (tribunales civiles, penales, laborales, agrarios y contencioso-administrativos o del Poder Judicial de la Federación), ya sea por algún conflicto entre particulares, contra servidores públicos de dichos tribunales o contra algún acto de autoridad independiente a ese tribunal (juicio contencioso administrativo o juicio de amparo).
- **Los mecanismos formales de queja y resolución de conflictos administrativos:** entendemos que son aquellos que prevén y conocen las propias autoridades administrativas para resolver aquellos conflictos que se susciten entre particulares o contra servidores públicos por la inobservancia de las leyes administrativas y que lesionan algunos de los derechos garantizados por las salvaguardas REDD+ (por ejemplo, denuncia popular, las quejas ante los órganos internos de control, conciliaciones y arbitrajes). Asimismo, los mecanismos administrativos también pueden tener como propósito revisar y evaluar la legalidad de los actos administrativos emitidos por autoridades que se encuentran subordinadas a las autoridades revisoras, y en su caso revocar, anular y ordenar que se emita nuevamente ese acto administrativo conforme a derecho.
- **Los mecanismos tradicionales o consuetudinarios de queja y resolución de conflictos:** son aquellos que las propias partes confrontadas resuelven sus desacuerdos, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, ya sea de manera directa o asistidos por terceros neutrales que facilitan el diálogo y la búsqueda de soluciones al conflicto. Específicamente son utilizados por las comunidades y pueblos indígenas para resolver conflictos que se susciten entre integrantes de dichas comunidades y pueblos indígenas. Estos mecanismos varían

¹²⁶ Para más detalles, se ruega ver producto 14 de esta consultoría que proporciona un análisis de cada uno de estos mecanismos.

considerablemente, abarcando variados mecanismos de diferentes grados y formas de formalidad; y generalmente no tiene un fundamento legal de creación.

- **Los mecanismos quejas a nivel de proyectos REDD+:** consisten en mecanismos que utilizan personas particulares y comunidades para la resolución de conflictos surgidos de la aplicación de la estrategia REDD+. Estos conflictos son atendidos en primera instancia por el proyecto encargado de implementar la estrategia REDD+, brindándole al usuario una atención directa y asesorándolo para la segunda instancia a nivel gubernamental.

Los objetivos específicos del MIAQ en conformidad con los requerimientos del FCPF son:

- *Brindar información oportuna y clara a los usuarios que lo requieran.*
- *Identificar y resolver problemas de implementación de manera oportuna y de forma costo efectiva:* Como sistemas de alerta temprana, el MIAQ deberá funcionar adecuadamente para ayudar a identificar y abordar los problemas potenciales antes de que se agraven, evitando costosas disputas que consumen mucho tiempo.
- *Identificar los problemas sistémicos:* La información proveniente de los casos del MIAQ puede destacar reclamaciones recurrentes, cada vez más frecuentes o crecientes, lo que ayuda a identificar problemas sistémicos subyacentes relacionados con la capacidad de ejecución y procesos que necesitan ser abordados.
- *Mejorar los resultados de REDD+:* A través de la resolución oportuna de los temas y problemas, el MIAQ podrá contribuir al logro oportuno de los objetivos de REDD+ y que podrán afectar la exitosa implementación de la Estrategia REDD+ (incluyendo la reversión de emisiones).
- *Promover la rendición de cuentas en los países de REDD+:* El MIAQ deberá promover una mayor rendición de cuentas entre los actores involucrados, afectando positivamente las actividades específicas y la gobernanza general de REDD+. El MIAQ serviría como primera línea de comunicación y respuesta para los usuarios y otras comunidades relacionadas con el bosque, a través del cual pueden adquirir información sobre REDD+ y obtener soluciones a problemas con su implementación.
- *Contribuir a promover participación y empoderamiento de los usuarios de los bosques en REDD+:* al brindar soluciones a través del diálogo y la resolución de quejas se promueve la participación de los actores relevantes.

Ver figura 1 con ilustración de objetivos del MIAQ

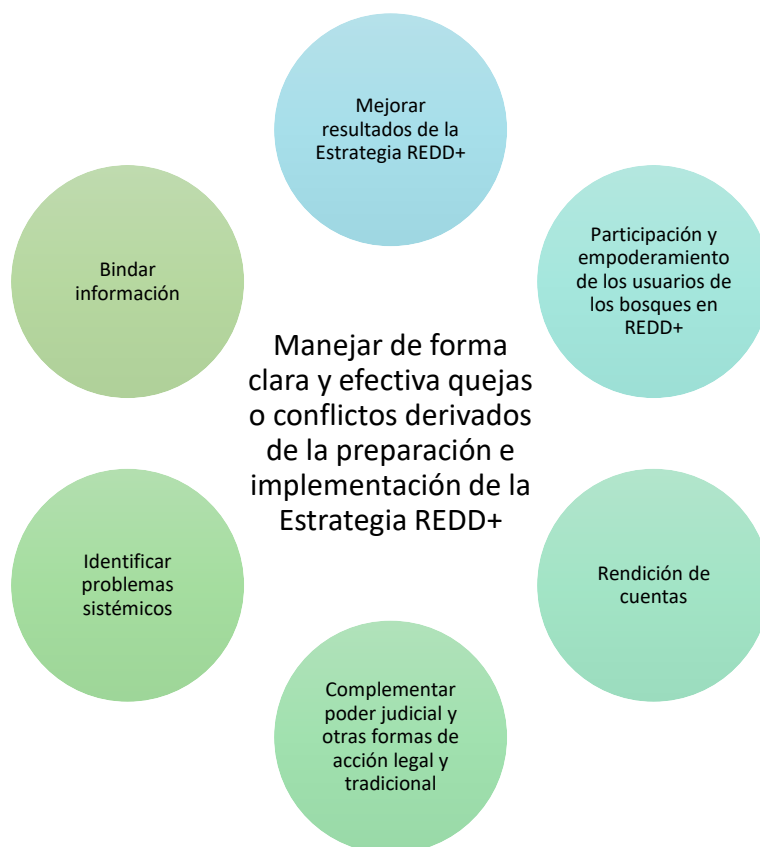


Figura : Objetivos del mecanismo de Información y atención a quejas en Guatemala

Alcance del MIAQ

El MIAQ debe abordar los agravios que surjan en vinculación con la implementación de las Opciones de la Estrategia REDD+ (y las actividades y acciones REDD+ en cada territorio). Como se mencionó más arriba, el MIAQ no estaría destinado a sustituir el poder judicial u otras formas de acción legal y/o tradicional existente en el país (incluyendo aquellos mecanismos de queja a nivel de proyecto), sino a complementarlos. **Por lo tanto, las partes agraviadas podrán dirigir sus quejas e utilizar todos los mecanismos existentes y relevantes conforme a la competencia de cada uno.** Figura 2 ilustra el alcance del MIAQ y vinculación con los otros mecanismos existentes conforme a sus competencias.

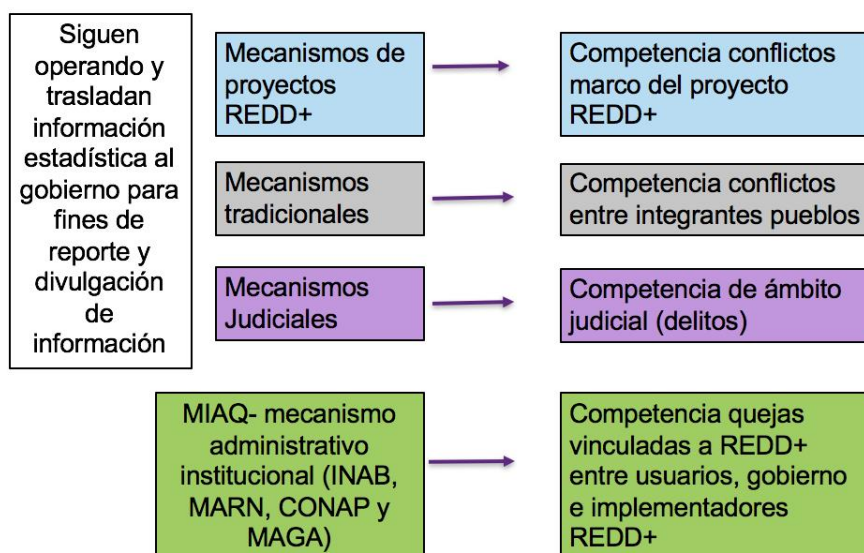


Figura : Alcance del MIAQ y otros mecanismos relevantes

Por fines de costo efectividad, se propone que el reclamante puede decidir usar un mecanismo tradicional, un mecanismo de proyecto (si existe), mecanismos formales o el MIAQ. Asimismo, si el MIAQ, no lo satisface, podrá usar los otros también (siempre y cuando sean admisibles).

Se considera que el tipo de agravios que deberán ser abordados por el MIAQ están relacionados con tensiones que existen sobre la tenencia de la tierra y el uso de los recursos forestales, así como los aspectos relacionados con la participación en el diseño y aplicación de las Opciones de la Estrategia REDD+. ¹²⁷ Por lo tanto, y a modo de ilustración se contempla que el alcance del MIAQ estaría relacionado con las siguientes categorías de quejas que puedan surgir en vinculación a la implementación de las Opciones de la Estrategia REDD+ ¹²⁸ :

- **Participación y consultas:** se considera que el MIAQ deberá abordar agravios vinculados con discrepancias y disputas que puedan surgir en relación a la participación de los actores relevantes en la implementación, y la evaluación de la implementación de las Opciones de la Estrategia REDD+. Lo anterior incluye aspectos vinculados al adecuado intercambio de información sobre REDD+, y la concienciación, la participación (incluyendo la aplicación del Consentimiento Libre Previo e Informado) y la incidencia de las partes interesadas.
- **Tenencia de la tierra y uso de recursos forestales:** se considera que el MIAQ deberá abordar agravios vinculados a procesos para adquirir derechos sobre las tierras (incluyendo aquellos asociados a la falta de certeza jurídica, la regularización de tenencia de la tierra, y restricciones de acceso a mujeres y grupos vulnerables), y el aprovechamiento de los recursos forestales. Asimismo, conflictos que podrán surgir en vinculación al acceso e implementación de programas de incentivos forestales, y

¹²⁷ Se ruega ver Producto 8 con la identificación de los potenciales conflictos que podrán surgir de la implementación de las Opciones de la Estrategia REDD+.

¹²⁸ Se ruega ver Producto 8 con la identificación de los potenciales conflictos que podrán surgir de la implementación de las Opciones de la Estrategia REDD+.

en respuesta al reforzamiento de medidas de protección y control forestal sobre actividades de tala ilegal y sobre uso de la leña.

Se destaca que el tema de tenencia de la tierra no es competencia del GCI, sin embargo, de alguna forma las instituciones o técnicos de las mismas pueden brindar algún tipo de información u orientación al momento de presentarse alguna queja o problema de este tipo.

- **Derechos de pueblos indígenas y comunidades:** se considera que el MIAQ deberá abordar agravios vinculados a la falta de reconocimiento y respecto de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades, en particular, en cuanto a sus derechos consuetudinarios (incluyendo los derechos de tenencia y uso de la tierra y recursos naturales) y prácticas y conocimientos tradicionales y ancestrales.
- **Distribución de beneficios:** se considera que el MIAQ deberá abordar agravios vinculados a la distribución de beneficios entre los diferentes usuarios / propietarios de los bosques. Esto incluye situaciones en que hay un inadecuado reconocimiento y valorización económica de los bienes y servicios ambientales asociados a los bosques (en particular los derechos de carbono); y titulares de derechos no son reconocidos (en particular, las comunidades) que se encontraban en la zona antes de la declaración de áreas protegidas.

Principios del MIAQ

Con la intención de proporcionar una resolución eficaz a las reclamaciones presentadas por los actores interesados y en conformidad con las directrices del FCPF, el MIAQ ha sido diseñado de acuerdo a los siguientes principios rectores:¹²⁹

- a. **Legítimo:** facilite la confianza de las partes directamente interesadas para cuyo uso está destinado y rinde cuentas sobre la justicia de sus procesos.
- b. **Accesible:** sea de conocimiento de todas las partes directamente interesadas para cuyo uso está destinado, y proporcione la asistencia adecuada para aquellos que enfrentan barreras de acceso particulares. Las barreras de acceso pueden incluir la falta de conocimiento sobre los mecanismos, el lenguaje, la alfabetización, los costos, la ubicación física y el temor a represalias.
- c. **Predecible:** proporcione un procedimiento claro y conocido por todas las partes interesadas, con un plazo indicativo para cada etapa, y claridad sobre los tipos de proceso y resultados disponibles, y los medios para el monitoreo de la implementación.
- d. **Equitativo:** garantice que las partes directamente afectadas tengan acceso razonable a las fuentes de información, asesoramiento y conocimientos necesarios para

¹²⁹ Indicador 26.2 Marco metodológico FCPF

participar en un proceso de resolución de reclamaciones en condiciones justas, informadas y respetuosas.

- e. **Transparente:** mantiene a aquellos que realizan la reclamación informados sobre el progreso del caso y proporciona información suficiente acerca del funcionamiento del mecanismo que genera confianza en su eficacia y satisface cualquier interés público en juego. Asimismo, se promueve la transparencia sobre el desempeño del mecanismo a través de estadísticas, estudios de casos o información más detallada sobre el manejo de ciertos casos. Al mismo tiempo, la confidencialidad del diálogo entre las partes y de las identidades de los individuos involucrados debe proporcionarse cuando sea necesario.
- f. **Compatible con derechos:** mecanismo sea consistentes con los derechos nacionalmente aplicables e internacionalmente reconocidos. Reclamaciones con frecuencia no se presentan en términos de derechos y muchos no involucran inicialmente a inquietudes relacionadas a los derechos humanos u otros derechos. De todos modos, cuando los resultados tienen consecuencias para los derechos, se debe tener cuidado de que sean consistentes con los estándares nacionalmente aplicables e internacionalmente reconocidos y que no restrinjan el acceso a otros mecanismos de reparación.
- g. **Facilita el aprendizaje continuo:** se basa en las medidas pertinentes para identificar lecciones para mejorar el mecanismo y evitar reclamaciones y daños futuros. El análisis periódico de los patrones de frecuencia y las causas de las reclamaciones; las estrategias y los procesos utilizados para la resolución de reclamaciones; y la eficacia de estas estrategias y procesos, puede permitir a la institución que administre el MIAQ mejorar las políticas, procedimientos y prácticas para mejorar el rendimiento, y evitar daños futuros.
- h. **Basado en la participación y el diálogo:** se consulta a las partes directamente interesadas para cuyo uso está destinado y se centra en el diálogo como medio para abordar y resolver las reclamaciones. La participación regular de las partes directamente afectadas en el diseño y rendimiento del MIAQ puede ayudar a asegurar que cumpla con sus necesidades, que lo utilicen en la práctica, y que haya interés común en asegurar su éxito.

Estructura del MIAQ

El MIAQ tendrá una estructura de carácter administrativa, que estaría bajo la coordinación del MARN, y operativo en las oficinas regionales y departamentales del INAB, el MAGA, MARN y el CONAP.

Los delegados institucionales de cada institución en las regiones o enlaces REDD+ estarán a cargo de la aplicación del MIAQ, con el apoyo del departamento jurídico de su institución. Ver Figura 3 y sección del procedimiento del MIAQ con los detalles de coordinación entre estas instituciones.

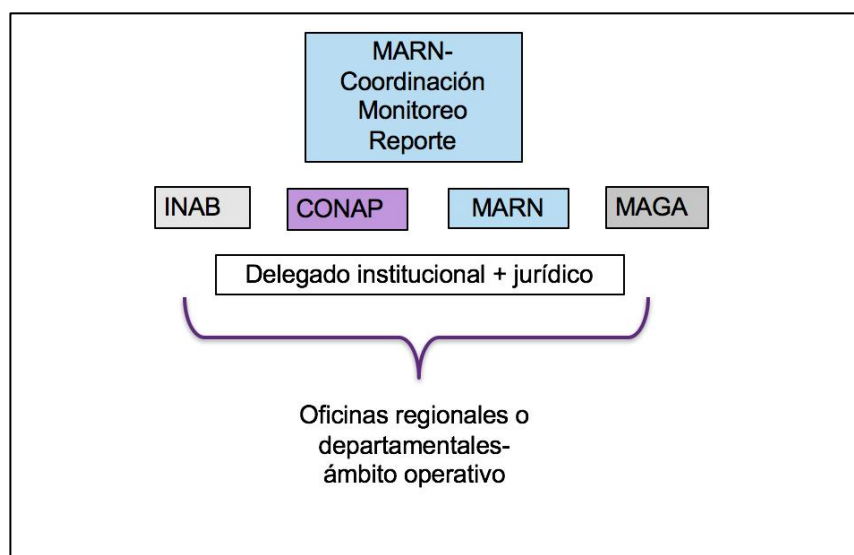


Figura 3: Estructura del MIAQ

El MIAQ se prevé como un órgano administrativo público que determinará objetivamente los hechos y sacará conclusiones de ellos a fin de tomar una decisión (resolución) final. Al ser un órgano administrativo, la decisión (resolución) que provenga del MIAQ será un acuerdo contractual que generará obligaciones vinculantes entre las partes. En el caso de que las partes no cumplan con estas obligaciones, la agencia(s) a cargo del MIAQ pueden usar recursos administrativos para lograr el cumplimiento del acuerdo. Las sugerencias vinculadas al establecimiento legal del MIAQ se tratan en la sección 3.1.

Como se mencionó en la sección de objetivos, el **MIAQ es concebido como un nuevo mecanismo de información y atención a quejas para fines de abordar específicamente los agravios que surjan en vinculación con la implementación de las Opciones de la Estrategia REDD+**. En dicho sentido, el MIAQ no estaría destinado a sustituir el poder judicial u otras formas de acción legal u tradicional existente en el país, sino a complementarlos al brindar una nueva avenida accesible y eficiente para resolver la queja de la parte agraviada en concordancia con los principios y directrices del FCPF.

Por lo tanto, se **destaca que la parte agraviada tiene derecho a usar el MIAQ y los otros mecanismos disponibles y relevantes en el país (identificados en la tabla 1).**

Tabla 1: Listado de mecanismos de información y atención a quejas disponibles en el país

| Institución | Alcance del Mecanismo |
|--|--|
| Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) | <p>Mecanismo de recepción de denuncias, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas es la entidad rectora en materia de áreas protegidas y diversidad biológica. Según su ley de creación, la Ley de Áreas Protegidas Decreto 4-89 del Congreso de la República debe velar por la protección al Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, por lo que es el encargado de crear las políticas necesarias para la protección y conservación.</p> <p>El CONAP procede a la recepción de denuncias por gestión inicial de particulares de forma escrita u oral de conformidad con el Artículo 85 del Decreto número 4-89 del Congreso de la</p> |

| | |
|---|--|
| | República de Guatemala, “Ley de Áreas Protegidas”, en donde establece que toda persona que se considere afectada por hechos contra la vida silvestre y áreas protegidas, podrá recurrir al CONAP, a efecto que se investigue tales hechos y se proceda conforme a ley. Es por ello que, a nivel institucional, se maneja un mismo mecanismo para la recepción de denuncias. |
| Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) | Es un Ministerio creado por medio de la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto 114-97 y Ley de creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Decreto 91-2000. El MARN es la entidad del sector público especializada en materia ambiental y de bienes y servicios naturales del Sector Público, al cual le corresponde proteger los sistemas naturales que desarrollen y dan sustento a la vida en todas sus manifestaciones y expresiones, fomentando una cultura de respeto y armonía con la naturaleza y protegiendo, preservando y utilizando racionalmente los recursos naturales. La recepción de denuncias puede realizarse por medio escrito y formulario electrónico en la página web. |
| Instituto Nacional de Bosques (INAB) | El INAB es una entidad estatal, autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, y es el órgano de dirección y autoridad competente del Sector Público Agrícola en materia Forestal. El mecanismo de recepción de denuncias es únicamente vía telefónica sin ningún trámite administrativo interno más que el de remitirlas al órgano que corresponda, específicamente al Ministerio Público. |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) | El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- cuenta con un componente jurídico, integrado por profesionales del derecho, quienes tienen la responsabilidad laboral de remitir las denuncias correspondientes en materia agropecuaria, hacia los órganos competentes. El mecanismo existente es por medio de llamada telefónica o acercamiento directo con los extensionistas en el área rural. |
| Protocolo de manejo y resolución de conflictos del proyecto REDD+ Guatecarbon | No tiene jurisdicción específica. Únicamente es aplicable a lo interno del proyecto. |
| Mecanismo de atención a reclamos de la Fundación para el Ecodesarrollo y Conservación -FUNDAECO- por medio del Proyecto REDD+ Caribe | No tiene jurisdicción específica. Únicamente es aplicable a lo interno del proyecto: dentro de áreas protegidas Sierra Caral, Cerro San Gil, Sierra Santa Cruz, Río Sarstún, Punta de Manabique |
| Mecanismo de atención a reclamos Fundación Defensores de la Naturaleza -DFN- por medio del proyecto REDD+ Lacandón Bosques para la Vida | No tiene jurisdicción específica. Únicamente es aplicable a lo interno del proyecto parque Nacional Sierra Lacandón |
| Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) | La Defensoría de la Mujer Indígena fue creada por medio del Acuerdo Gubernativo 525-1999, como una dependencia de la Presidencia de la República con capacidad de gestión y ejecución administrativa, técnica y financiera, con el fin de |

| | |
|--|--|
| | atender las particulares situaciones de vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la mujer indígena, para lo cual deberá promover las acciones de la defensa y pleno ejercicio de sus derechos. |
| Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) | La Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) se ha constituido como una instancia para el seguimiento a todo el tema agrario en Guatemala y uno de sus objetivos persigue <i>“Promover el establecimiento de las estrategias necesarias para atención a los conflictos de naturaleza agraria relativos a la tenencia, posesión o propiedad de la tierra”</i> ¹³⁰ . La SAA posee, en su portal, un número para denuncias y quejas, así como un formulario de solicitud de intervención, el cual puede ser llenado con los detalles del conflicto y este es canalizado al interior de la institución, para dar seguimiento; la SAA prepara un informe periódico (mensual) sobre los casos atendidos, el manejo y atención brindados, resoluciones, casos concluidos. Actualmente, el portal posee disponibles reportes hasta abril 2015. |
| Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo (CODISRA) | Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo - CODISRA-. CODISRA es una Comisión encargada de velar por el respeto de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, ha tenido una gran presencia a nivel político y nacional para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas ¹³⁰ . |
| Procuraduría de los Derechos Humanos | <p>El Procurador de los Derechos Humanos es un Comisionado del Congreso de la República para la defensa de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Tratados y Convenciones Internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. El Procurador para el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución Política de la República de Guatemala y esta ley establecen, no está supeditado a organismo, institución o funcionario alguno, y actuará con absoluta independencia.</p> <p>El fundamento de creación es la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y Procurador de los Derechos Humanos Decreto 54-86 del Congreso de la Republica.</p> <p>El mecanismo de denuncias se puede realizar por medio de llamada telefónica, personalmente o por medio escrito.</p> |
| Mesas Interinstitucionales | <p>Las mesas interinstitucionales que se han creado, han sido una práctica sin fundamento legal o instrumento legal previo.</p> <p>Han surgido de la necesidad de resolver conflictos o reclamos de la población. Estos conflictos generalmente conllevan la participación de varias instituciones del Estado, por lo que se</p> |

¹³⁰ Se creó por medio del Acuerdo Gubernativo 390-2002 y según el Artículo 1, tiene a su cargo la formulación de políticas públicas que tiendan a erradicar la discriminación racial.

| | |
|--|---|
| | crearon estas mesas con la finalidad de agilizar la toma de decisiones con los representantes claves de cada institución. |
|--|---|

Procedimiento del MIAQ

En concordancia con las directrices y principios del FCPF y las mejores prácticas internacionales se considera el siguiente procedimiento para la resolución de quejas a través del MIAQ en Guatemala. Como se mencionó en la sección de objetivos, el MIAQ no estaría destinado a sustituir el poder judicial u otras formas de acción legal y/o tradicional existente en el país (incluyendo aquellos mecanismos de queja a nivel de proyecto), sino a complementarlos.

Por lo tanto, el procedimiento descrito a continuación aplicaría en caso de que las partes afectadas decidan utilizar el MIAQ en preferencia a otros mecanismos disponibles.

Se recomienda considerar un proceso estructural que prevé entregar un resultado contractual vinculante entre las partes en disputa, o entre una parte afectada por la implementación de la Estrategia Nacional REDD+ y el Gobierno.

Desde el momento en que se recibe la queja hasta que se emita una resolución sobre la disputa, se contemplan 30 días hábiles. Se sigue un proceso sistemático que consta de cinco pasos como se muestra en la Figura 4: i) Recibo y registro, ii) Investigación, iii) Selección de enfoque, iv) Evaluación y Respuesta, v) Monitoreo. Cada uno de estos pasos se describen más adelante.



Figura 4: Procedimiento del MIAQ

El proceso es inclusivo y participativo, en el cual se considera la participación de múltiples partes. El MIAQ está diseñado para promover discusiones entre diferentes actores (especialmente entre los usuarios del bosque y el Gobierno) y desarrollar conjuntamente una resolución viable para la queja presentada.

Un factor importante para que los actores locales utilicen el MIAQ es la disponibilidad de un sistema de apoyo. Los actores locales a menudo tienen dificultades para entender y acceder a los procedimientos institucionales, y no pueden participar en las iniciativas a nivel local debido a problemas logísticos (lenguaje y transporte).

Anticipamos que las estructuras tradicionales y comunitarias, las asociaciones, agrupaciones y organizaciones no gubernamentales, las mismas instituciones con presencia local, y los implementadores de proyectos REDD+, que ya están en estrecho contacto con los actores locales relevantes, actúen como el sistema de apoyo para acceder a el MIAQ. Las funciones principales de este sistema de apoyo consistirían en:

- Facilitar la preparación y presentación de los formularios a través de los distintos canales descritos más abajo. En particular, podrán facilitar el uso de su nombre y detalles de contacto, si el solicitante/reclamante prefiere mantenerse anónimo; completar el formulario, incluyendo redactar la queja; traducir la queja desde el idioma local, y presentar la queja para su registro en los canales de registro.
- Facilitar y apoyar en el seguimiento de la solicitud/queja. En particular, servir como punto de contacto para proporcionar información sobre la tramitación de la solicitud

de la queja entre las oficinas del CONAB, MAGA, INAB, y MARN y el solicitante u reclamante.

- Ayudar a proporcionar información a las partes interesadas a nivel local y de esta manera evitar que se presenten solicitudes y quejas innecesarias basadas en problemas en el intercambio de información.

La estructura y sistema de apoyo que se contempla, es la siguiente (ver figura 5 que los ilustra). Destacamos que como parte de la ruta de implementación del MIAQ, se contempla la capacitación de estas estructuras de apoyo (ver sección III).

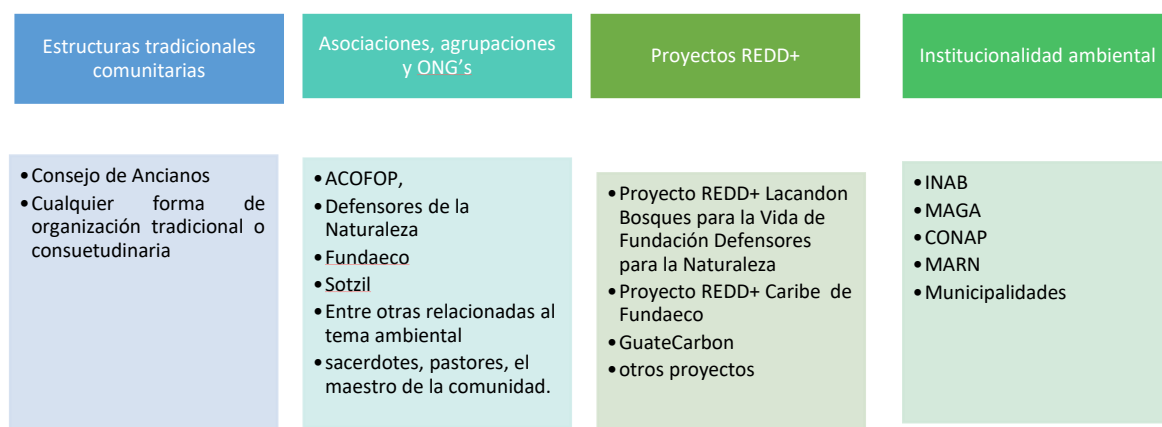


Figura 5: estructura de apoyo del MIAQ

1. Estructuras tradicionales comunitarias y autoridades indígenas comunitarias

Es importante resaltar que en la actualidad se practica el derecho indígena en Guatemala y la resolución de quejas se realiza dentro de la misma comunidad a través del Consejo de Ancianos o cualquier forma de autoridad consuetudinaria.

La expectativa es que el solicitante u reclamante podrá acudir a la estructura tradicional o comunitaria pertinente para obtener el apoyo que necesite en el envío y seguimiento de su queja u solicitud.

2. Asociaciones, Agrupaciones y Organizaciones no Gubernamentales

En el área rural, existen diversas organizaciones sin ánimo de lucro que colaboran de cerca con la población.

La expectativa es que el solicitante u reclamante podrá acudir a estas asociaciones y agrupaciones pertinentes para obtener el apoyo que necesite en el envío y seguimiento de su queja u solicitud.

3. Institucionalidad ambiental

Las instituciones relacionadas a la estrategia REDD+ y que conforman el GCI, por medio de sus técnicos, extensionistas, guardarecursos en campo, proporcionan información y prestan apoyo a usuarios en materia ambiental. Asimismo, se consideran las municipalidades.

La expectativa es que el solicitante u reclamante podrá acudir a las oficinas en las delegaciones departamentales del MARN, INAB, CONAP, MAGA y municipalidades para obtener el apoyo que necesite en el envío y seguimiento de su queja u solicitud.

Las partes interesadas tienen la posibilidad de hablar con el punto focal local de REDD+/ técnico de MARN/INAP/CONAP/MAGA (cuando esté disponible) en la localidad (interacción cara a cara) u oficiales forestales y obtener apoyo para presentar solicitud o queja.

4. Proyectos REDD+

Los proyectos REDD+ cuentan con protocolos internos para la atención de reclamos. Sin embargo, y como se denotó en el alcance del MIAQ, las partes interesadas tienen la opción de utilizar los protocolos de atención de reclamos de los proyectos o el procedimiento del MIAQ. Si las partes interesadas deciden utilizar el MIAQ, la expectativa es que el solicitante u reclamante podrá acudir a los técnicos encargados del proyecto para obtener el apoyo necesario en el envío y seguimiento de su queja u solicitud utilizando el procedimiento del MIAQ. Asimismo, cabe destacar que el solicitante y reclamante también podrá acudir (de ser relevante) a las estructuras tradicionales y comunitarias, las asociaciones, agrupaciones y organizaciones no gubernamentales, y las mismas instituciones con presencia local para apoyo.

Para información adicional y más detallada sobre el MIAQ, ver el Producto 15 de la consultoría.

Sección 5. Participación y consulta

Guatemala cuenta con las siguientes plataformas de gobernanza que se estima podrían ser utilizadas como plataformas de involucramiento de los actores relevantes en la implementación y supervisión del ESMF.

Plataformas institucionales

El país cuenta con el Decreto 11-2002¹³¹, que establece el Sistema de Consejos de Desarrollo comprende cinco niveles, a saber:

- El nacional, con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural;
- El regional, con los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural;
- El departamental, con los Consejos Departamentales de Desarrollo;
- El municipal, con los Consejos Municipales de Desarrollo; y
- El comunitario, con los Consejos Comunitarios de Desarrollo.

El objetivo del Sistema de Consejos de Desarrollo es organizar y coordinar la administración pública mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional, pública y privada.

Plataforma multisectoriales

- **Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático (GBByCC).**

El GBByCC es una plataforma de diálogo y participación ciudadana, consulta y propuesta, impulsada por el Gobierno de Guatemala, por medio del MARN, INAB, CONAP y MAGA, que tiene como objetivo ser un mecanismo de amplia participación para la formulación de propuestas y búsqueda de consensos en los temas de bosques, biodiversidad y cambio climático, y es la plataforma especialmente utilizada para el proceso de preparación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Deforestación y Degradación y la Estrategia Nacional (REDD+), sin excluir otros procesos relacionados.

Desde el inicio de la preparación REDD+ en Guatemala, el GBByCC se ha constituido como el órgano de acompañamiento, asesoría y consulta del proceso a nivel general.

- **Red de Comunidades Beneficiarias del PINPEP¹³² (Red PINPEP)**

Es un espacio para la participación directa de las comunidades en la operación del programa. Creada por el Decreto 51-2010, que instruye que la Dirección Técnica del programa está a cargo del Comité Directivo (CODI) y que el mismo, está integrado por un representante titular y un suplente del INAB, uno de la Red Nacional de Comunidades Organizadas Beneficiarias del PINPEP, y uno de la Asociación Nacional de Municipalidades.

¹³¹ [http://sistemas.segeplan.gob.gt/discode/sche\\$portal/documentos/ley_concejos_desarrollo_guatemala.pdf](http://sistemas.segeplan.gob.gt/discode/sche$portal/documentos/ley_concejos_desarrollo_guatemala.pdf)

¹³² Programa de incentivos para pequeños poseedores de tierras de vocación forestal o agroforestal

La Red del PINPEP está conformada por 22 representantes, uno por departamento del país, entre quienes se elige al representante titular ante el CODI y su suplente. Estos representantes ante el CODI, funcionan como las figuras de liderazgo-incidencia-coordinación de la Red del PINPEP.

- **La Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias (ANOFC)**

La Alianza es una plataforma comunitaria presente a nivel nacional y se describe a sí misma como una instancia nacional de diálogo, incidencia política, gestión, enlace y emprendimiento comunitario en torno al manejo responsable y conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible en las comunidades de Guatemala. Fue establecida hace aproximadamente ocho años¹³³.

- **La Mesa Indígena de Cambio Climático (MICCG)**

Tres plataformas a nivel nacional que aglutinan a las principales organizaciones de base vinculadas al manejo de tierras forestales y cambio climático. Asimismo, se propone incluir a Oficinas Forestales Municipales de algunas regiones vinculadas a acciones tempranas REDD+ para tener la visión de gobiernos locales en la identificación de los impactos.

Proceso de participación implementado para el SESA y el ESMF

Para la implementación del SESA y elaboración del ESMF se implementó un proceso de participación y de consulta a nivel regional y nacional.

Se organizaron cuatro talleres regionales y un taller nacional SESA para retroalimentar resultados preliminares con actores relevantes. Estos talleres para el proceso de identificación y priorización de impactos positivos y negativos, sociales y ambientales, que pueden surgir de la implementación de las opciones y actividades REDD+ propuestas se organizaron de la manera siguiente:

¹³³ <http://www.alianzaofc.org/acerca-de/>



La división regional para la evaluación de impactos respondió a la disponibilidad de recursos (tiempo y financieros) para realizar cuatro talleres y se agruparon siguiendo las regiones REDD+ y la organización institucional de INAB y CONAP, de manera que el análisis se presenta en relación a las cuatro localidades donde se reunieron los actores para el análisis:

- Tierras Bajas del Norte: Taller en Petén con participantes de Petén y parte de Izabal
- Verapaces: Taller en Cobán con actores de Alta y Baja Verapaz
- Oriente: Taller en Teculután, Zacapa, con representantes de los departamentos que conforman el Oriente del país y también algunos actores de Izabal
- Occidente: Taller en Panajachel, Sololá, con actores de los departamentos que conforman el Occidente del país

Participantes incluyeron en cada región representantes de comunidades o asociaciones locales, representantes de la Red de Beneficiarios de PINPEP, técnicos de instituciones del MARN, INAB, MAGA, representantes de municipalidades, técnicos de ONGs y de cooperación internacional. (Para más información sobre los participantes de los talleres regionales, ver el producto 16 de la consultoría que incluye la sistematización del proceso de consulta.

Después de los talleres regionales se organizó un taller nacional. El objetivo del taller fue brindar información sobre el proceso SESA y los avances en el análisis, a representantes del Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático (GBByCC)¹³⁴ y plataformas de gobernanza forestal a nivel local, con el fin de obtener insumos para complementar el análisis realizado a partir de talleres regionales y priorizar impactos sociales y ambientales de las opciones de la Estrategia Nacional REDD+.

Para el ESMF se siguió un proceso similar, con actores similares. A fin de retroalimentar los documentos del ESMF y MIAQ y compilar insumos de las partes interesadas, se organizaron múltiples talleres a nivel regional y nacional:

¹³⁴ El GBByCC es el grupo de trabajo que acompaña el proceso de preparación REDD+ en Guatemala.



Los talleres regionales se llevaron a cabo en las siguientes fechas y departamentos:

- Taller 1: Santa Elena, Petén del 1 al 2 de agosto,
- Taller 2: Cobán, Alta Verapaz el 8 y 9 de agosto,
- Taller 3: Río Hondo, Zacapa el 10 y 11 de agosto,
- Taller 4: Tecpán, Chimaltenango del 16 al 17 de agosto,
- Taller 5: Quetzaltenango del 22 al 23 de agosto y
- Taller 6: Huehuetenango del 24 al 25 de agosto 2017.

Después de los talleres regionales se organizó un taller nacional. El objetivo del taller nacional fue presentar y retroalimentar la propuesta para el ESMF, así como la propuesta del MIAQ en el marco del proceso de preparación REDD+, desde las visiones de los actores nacionales vinculados a las opciones estratégicas REDD+.

A lo largo del proceso de implementación del SESA y elaboración del ESMF, el GCI también ha sido involucrado. Se coordinaron múltiples reuniones con el GCI para informarles de los planes y avances de la consultoría, así como recoger insumos y retroalimentación de las instituciones relevantes.

Para más información y detalles sobre el proceso de participación, ver el Producto 16 de la consultoría o las memorias de los talleres¹³⁵ disponibles en el portal REDD+ del MARN.

Los actores involucrados a nivel regional y nacional en la elaboración del SESA, ESMF y MIAQ están familiarizados con los documentos. Por lo tanto, se debe aprovechar y considerar su participación en la implementación del ESMF y del MIAQ.

¹³⁵ http://www.marn.gob.gt/s/redd_/paginas/Talleres_Regionales_REDD

Sección 6. Consideraciones prácticas para la aplicación del ESMF

La siguiente sección presenta los aspectos de comunicación, disseminación y presupuesto del ESMF.

6.1. Disseminación y divulgación del ESMF

La propuesta de los mecanismos de divulgación, comunicación y consulta a ser empleados en la implementación del ESMF se vincula directamente con la selección de la plataforma institucional encargada del de la implementación del ESMF. Se propone utilizar los mecanismos de divulgación, comunicación y consulta enmarcados en estas estructuras de gobernanza, a saber:

- A nivel nacional, más general y vinculado al Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI) formado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB); se propone el uso de la plataforma virtual REDD+ en la página Web del MARN. Una sugerencia a partir de la propia experiencia de los actores entrevistados, es mejorar la manera de ingresar al subportal específico, por el momento no es fácil para alguien que no conoce cómo funciona y también es deseable, una forma más práctica de disponer la información, que sea más sencillo encontrarla para cualquier usuario.
- Asimismo, y a nivel nacional se recomienda crear y emplear una pestaña de información en el SIREDD+ dedicado para el ESMF.
- Por otra parte, para la comunicación de resultados y/o consulta a nivel subnacional o local, por el momento no existe un mecanismo estándar, se utilizan diversos medios dependiendo la disponibilidad y dinámica de cada región. La sugerencia por parte de las oficinas institucionales de pueblos indígenas/interculturalidad y de género, es que se utilicen las plataformas de la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias y la Red de Comunidades Beneficiarias del PINPEP, utilizando las formas de comunicación con los facilitadores/líderes/representantes, tal y como el INAB y CONAP han venido haciéndolo a través de los años, desde sus oficinas regionales y de los funcionarios de las oficinas de componentes sociales. No se consideran recomendaciones específicas en este ámbito.

A continuación, examinamos la propuesta, y su normativa aplicable que justifica la selección de estos mecanismos.

Normativa general aplicable

A nivel nacional la transparencia y el acceso a la información son requisitos requeridos por la Ley Marco de Cambio Climático en sus Artículos 9 y 22, así como por la Ley de Acceso a la

Información Pública¹³⁶. Esta última garantiza a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las instituciones de gobierno. Asimismo, esta ley vela por la transparencia de la administración pública y el derecho de toda persona a tener acceso libre a la información pública.

Sobre esta base jurídica y de acuerdo a los requerimientos de la CMNUCC y el FCPF, se propone el uso de estos mecanismos vinculados a las plataformas identificadas.

Plataforma virtual del MARN

El MARN es la entidad coordinadora del GCI, y cuenta con una plataforma virtual (y un sub-portal REDD+¹³⁷). La sistematización de las actividades de participación (talleres nacionales, reuniones de trabajo, etc.), así como estudios o avances realizados en el marco de la preparación de la Estrategia Nacional REDD+, han sido publicados en el sub-portal REDD+ del MARN para ampliar el acceso e intercambio de información, ejecución y divulgación pública.

Se estima que esta plataforma virtual es idónea para divulgar, comunicar y consultar información con las partes relevantes a nivel nacional. Sin embargo, hay varios ámbitos que consideramos pueden ser fortalecidos:

- 1) Será importante divulgar información sobre la existencia del sub-portal REDD+, y hacer más fácil el acceso al mismo. Se sugiere: a) crear una ventana directa para su acceso en la página de bienvenida a la plataforma virtual del MARN; o alternativamente b) incluir el sub-portal REDD+ directamente en el listado de 'subportales' que denota la página principal.
- 2) Que el sub-portal REDD+ contemple poder proporcionar información en relación los potenciales impactos identificados para cada uno de las intervenciones REDD+ propuestas. Se sugiere utilizar la pestaña 'actividades REDD+' e insertar (cuando esté disponible) la información vinculada a la identificación de potenciales impactos.
- 3) Que el sub-portal REDD+ contemple poder proporcionar información en relación a las reuniones y acuerdos relevantes tomados por el GCI y el GBBYCC¹³⁸. Se sugiere utilizar la pestaña 'otras reuniones de planificación y coordinación' e insertar (cuando esté disponible) la información pertinente. Entendemos por información pertinente: invitación, agenda, memoria de la reunión conteniendo los principales acuerdos, presentaciones realizadas (si fuera el caso), y documentos de apoyo y revisión (si fuera el caso).

Aún con las adecuaciones recomendadas, se considera que el subportal REDD+ no debería ser el único mecanismo de comunicación, puesto que no es el idóneo para todos los actores

¹³⁶ Decreto 57-2008

¹³⁷ http://www.marn.gob.gt/s/redd_/paginas/Qu_es_2

¹³⁸ En conformidad con el manual de funcionamiento del GBBYCC información sobre reuniones y acuerdos debe estar disponible en la página web de cambio climático del MARN.

relevantes en el proceso REDD+, sobre todo para actores locales que no tienen fácil acceso a internet o incluso, no manejan computadoras. Para estos grupos, quienes coordinan el proceso de preparación REDD+ deberán utilizar medios más locales e incluso los canales de comunicación que ya utilizan con las plataformas como la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias (ANOFCG) y la Red de Beneficiarios del PINPEP.

6.2. Presupuesto

No se ha establecido un presupuesto detallado para la implementación del ESMF. Esto dependerá del avance del proceso REDD+ en Guatemala y de la definición de una Estrategia REDD+ con acciones REDD+.

Los miembros del GCI han comunicado la necesidad de tener un enlace REDD+ en las regiones relevantes. Este enlace podría tener, entre otras responsabilidades, la responsabilidad de asegurar la implementación del ESMF.

El presupuesto podría incluir:

- Enlace REDD+ en regiones relevantes
- Capacitación
- Equipo (computo, etc.)

El presupuesto del ESMF también tendrá que considerar la 'implementación del ESMF' que conlleva implementar actividades y acciones para mitigar los impactos adversos y para potenciar los impactos positivos. Se tendrá que evaluar estos costos una vez que se determine una Estrategia REDD+ y programas de inversión particulares.